Colección EL SUR ES CIELO ROTO

Poblaciones y territorios en disputa

Rosa Bermúdez
Enrique Jaramillo
Luis Fernando Barón
Ana Lucía Paz

ISBN 978-958-8357-23-2

UNIVERSIDAD ICESI

PNUD Colombia

Territorios y poblaciones en disputa

Rosa Emilia Bermúdez Rico
Enrique Jaramillo Buenaventura
Luis Fernando Barón Porras
Ana Lucía Paz Rueda

UNIVERSIDAD ICESI

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Icesi
Cali, Colombia

PNUD Colombia

Territorios y poblaciones en disputa.
1 ed. –Cali: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi, 2009.
176 pp. ; 17x23cm.
ISBN: 978-958-8357-23-2
1. Valle del Cauca 2. Paz 3. Desplazamiento forzado 4. Organización comunitaria
I. Tit.
303.69 - dc 21

Territorios y poblaciones en disputa.
Colección "El sur es cielo roto"
Universidad Icesi
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Rector
Francisco Piedrahita Plata

Secretaria General
María Cristina Navia

Director Académico
José Hernando Bahamón

Editor y coordinador editorial
Rafael Silva Vega

Comité editorial
Luis Fernando Barón
Hoover Delgado
Lelio Fernández
Diana Patricia Quintero

Diseño
Pablo Andrés Sánchez

Impreso en Cali – Colombia
A.A. 25608 Unicentro
Tel. 555 23 34 Ext. 404
Fax: 555 17 06
E-mail: coleccionesdcs@icesi.edu.co
Cali, Colombia

El material de esta publicación puede ser reproducido sin autorización, siempre y cuando se cite el título, el autor y la fuente institucional.

Primera edición, diciembre 2009
ISBN: 978-958-8357-23-2

Índice

Prólogo. Tiempos de paz, Vladimir Rouvinski 5

Introducción 11

Capítulo 1. Gobernabilidad y control territorial en el Pacífico colombiano, Rosa Emilia Bermúdez Rico 21

Capítulo 2. Políticas espaciales y comunidades negras en el Pacífico colombiano, Enrique Jaramillo Buenaventura 45

Capítulo 3. Tierras y territorios en conflicto, Luis Fernando Barón Porras 83

Capítulo 4. Tensiones del periodismo público frente al conflicto, Ana Lucía Paz Rueda 131

Epílogo. La ciudadanía en conflicto, Rafael Silva Vega 163

De los autores 173

Prólogo

Tiempos de paz

Cesó el combate. Ya todo está en calma.
Los cuerpos forman un atroz montón.
Corre por ellos, húmeda, la sangre
Dime, ayudante, qué nombre dan a este río.
Le llaman Valerik, y es el río de los muertos.
Quienes lo bautizaron ahora están en el Cielo
De repente escuchamos a una voz sostener:
"Para la guerra fue hoy un día decisivo".
Y en un aldeano vi ojos llenos de desdén.
Sonrió un poco y no dijo una palabra.
Allí estuve, mi corazón lleno de dolor:
"¡Oh pobre hombre! ¿Qué fin estás buscando?
¡El cielo es azul, el mundo infinito!
¡Y tú estás luchando! ¿Por qué, para qué? [1]

Mijaíl Lermontov, *Valerik (1840)*

¿Cómo se logra entender un país que vive en medio de un conflicto interno durante tantas décadas? ¿Cómo se logran identificar los rayos de paz en un flujo infinito de noticias de guerra e injusticia? ¿Cómo lograr romper el maniqueísmo con el que, en ciertas circunstancias, leemos la realidad en la que vivimos? ¿Cómo encontrar el camino para sobrevivir en medio de una guerra sin convertirse en un traidor de las ideas y valores más íntimos?, ¿sin perder la confianza de su comunidad y de su gente?

[1] Traducción de Hoover Delgado.

Seguramente, no existe una respuesta universal a estas preguntas. Probablemente, porque sería muy difícil proponer una respuesta que pueda satisfacer a todos. No obstante, el ejercicio de indagación sobre las respuestas que construyen las propias comunidades colombianas acerca del conflicto es un aporte valioso para el proceso de paz que soñamos. Y es por esto que uno debe destacar, desde un principio, el valor de este libro, que refleja la labor de los investigadores de la Universidad Icesi, al documentar, en una manera responsable, las experiencias de algunas comunidades del Departamento del Valle del Cauca, que constituyen ejemplos de buenas prácticas para superar el conflicto que vive este país.

Tuve el privilegio de apoyar esta investigación. Para mí, hijo de tierras frías y lejanas de la Siberia Oriental, la participación en el proyecto conjunto con el Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en Colombia, resultó ser una oportunidad única para conocer, de primera mano, el contexto inédito del conflicto de este país suramericano donde vivo actualmente. No obstante, al comenzar mi trabajo, no pude dejar de sentir unas similitudes con el prolongado conflicto del Cáucaso –otra de mis experiencias investigativas.

Como es posible que le suceda a muchas otras personas que vienen a Colombia, cuando estuve en el Cáucaso por primera vez llegue con unas percepciones construidas, desde la distancia, acerca de las víctimas y los victimarios, de los actores del conflicto, sus intenciones y acciones, y acerca de qué es lo que estaba pasando en esta región. En el caso del conflicto colombiano, la similitud que encontré con el Cáucaso, se debió al mismo tipo de desconocimiento acerca de la realidad que vive Colombia actualmente y al poder de unas imágenes ambiguas que me presionaban a leer esa realidad desde ciertas perspectivas.

Por esta razón, después de la primera entrevista que realice para el proyecto de investigación con la Universidad Icesi vino a mi memoria otra experiencia investigativa en la que estuve relacionado años atrás, en Abjasia. Sobre esta otra ocasión, recordaba mis sentimientos de reserva y desconfianza antes de la primera entrevista de investigación que tuve que llevar a cabo en Abjasia, con un importante protagonista de la guerra sangrienta, de 1992-1993, entre Abjasia y Georgia. Después, la entrevista tuvo lugar en una oficina ubicada cerca del malecón de la vieja capital de Abjasia, al lado de la profunda bahía de la ciudad de Sujum, en el Mar Negro. Terminada la entrevista, caminé por el malecón, bajo los fogosos rayos del sol subtropical del mes de agosto, y trataba de convivir con el sentimiento ya no

de desconfianza sino de sorpresa por la experiencia que tuve luego del encuentro con la persona que acababa de entrevistar: sus vivencias, trágicas y profundas, en relación con su lealtad a sus ideas e ideales, con su firme deseo que mostraba de perseguir el objetivo de construir una vida mejor para su comunidad.

Algo similar estaba pasando a lo largo del caso que me correspondió investigar sobre el "Programa de estudios políticos y resolución de conflictos", de la Universidad del Valle[2]. Pero también observe en mí, en forma recurrente, el entusiasmo y la exaltación que sobrecoge a un investigador que tuvo la fortuna de encontrar las respuestas a preguntas difíciles; aunque estas respuestas no siempre fueran coincidentes con las que hallaron mis colegas Rosa Bermúdez, Ana Lucia Paz, Enrique Jaramillo y Luis Fernando Barón, y sus asistentes de investigación Lady Otalora y Maritza Valencia, durante las reuniones de trabajo en las cuales intercambiamos experiencias mutuas acerca de la investigación en curso. Cabe decir que trabajar juntos como equipo fue una preciosa experiencia –con todo y las diferencias causadas por el hecho de ser partidarios fieles de las disciplinas académicas que cada uno de los miembros del equipo practicamos y, aunque todos estuvimos de acuerdo con los propósitos fundamentales de la investigación, esas diferencias se muestran claramente en las páginas de este libro.

Comparto las conclusiones a las que llegó el director del proyecto, Luis Fernando Barón,[3] acerca de la importancia de tener en cuenta los procesos históricos y socio-políticos que tuvieron lugar en el Departamento del Valle del Cauca, con el fin de entender mejor las buenas prácticas para superar el conflicto en el departamento. Se trata de no perder de vista la continuidad y la persistencia del conflicto agrario en la región y la lucha por el territorio, el alto nivel de la movilización y organización social, la demanda de la inclusión política, cultural y étnica, la avalancha de la violencia que sorprendió a la región durante la última década del siglo pasado y la respuesta a este acontecimiento por parte de la sociedad civil, medios de comunicación, la academia y los empresarios del Valle.

---

[2] El caso del "Programa de estudios políticos y resolución de conflictos" de la Universidad del Valle no hace parte de este libro debido a las características que lo hacen distinto a los demás casos que se presentan aquí. Se trata de un caso acerca de una buena práctica para superar el conflicto en el área de educación para la paz. El análisis de este caso se presentó en la siguiente publicación: Rouvinski, Vladimir (2009), "A Farewell to Arms: The Challenge of Studying Politics by Former Rebels in Colombia", *IPSHU Research Series,* No. 42, 349-372.

[3] Baron, Luis Fernando (2009), "Estudios de caso sobre buenas prácticas para superar el conflicto en el Valle del Cauca", *Revista CS* No. 3, 217-226.

De igual forma, comparto con Barón la identificación de los ingredientes regionales que condicionaron el éxito de los casos de buenas práctica para superar el conflicto, los cuales, en su aspecto principal, son derivados de la habilidad de los actores de los casos estudiados para construir un ambiente de inclusión social, política y económica. Por otra parte, como se demuestra con toda claridad, en los cuatro casos analizados en este libro, se puede indicar la importancia de la construcción de unas nuevas *relaciones de poder* por las poblaciones de los territorios en disputa.

La oportunidad y la necesidad de construir unas nuevas relaciones de poder, en el nivel local, se deben, en primer lugar, a la incapacidad o insuficiencia de los esfuerzos coordinados o patrocinados por los organismos del Estado para intervenir en los conflictos por la tierra y los territorios en varias partes del Valle del Cauca. Frente a este escenario, los actores armados escogen la violencia como un instrumento para conseguir el control sobre los territorios y las poblaciones en disputa, intentando construir una nueva jerarquía en relaciones de poder.

En las áreas geográficas en cuestión los actores armados aprovechan la debilidad del Estado, con el fin de convertir la violencia en una característica persistente de los territorios afectados. En los casos analizados en este libro, los eventos claves están relacionados con la respuesta de la población a estos intentos. Y, en estas circunstancias, al momento de negociar y pactar las nuevas reglas de juego con los actores armados, las comunidades –que cuentan con una identidad compartida que les facilita la movilización social– son autónomas y toman con seguridad y firmeza lo que consideran como una oportunidad política. Asombrosamente, en los procesos de negociación con los actores armados, no se trata de la búsqueda, por parte de las comunidades en cuestión, de una articulación o vinculación a los programas y proyectos ya existentes promovidos por las instituciones del Estado, que a menudo ni siquiera están presentes en los territorios en disputa. Se trata de la construcción de una alternativa a la presencia de las instituciones del Estado, algo que vale la pena estudiar y comprender mejor.

Es importante subrayar que las comunidades mostradas en este libro, si bien comparten una identidad propia, no son homogéneas ni consolidadas y compactas como a veces se trata de mostrar en este tipo de iniciativas. Las poblaciones en territorios en disputa están involucradas en importantes discusiones internas que buscan afianzar y, a veces, transformar sus propios procesos y relaciones e, incluso, generan interacciones diferenciales con las instituciones del Estado y con los mismos actores armados. No obstante, en los casos analizados en este libro se

logra con éxito la construcción de las nuevas relaciones de poder, caracterizadas por una mayor inclusión política, étnica y cultural. Y, por eso, uno pude decir que este libro es una obra llena de esperanza. Esperanza en que, pese a todos los obstáculos, la voluntad sin límites de la gente común que sigue acumulando experiencias valiosas, con el apoyo entusiasta de la comunidad internacional y de otras experiencias nacionales, permitirá que Colombia logre encontrar la respuesta de lo que parecía ser un callejón sin salida. En este mismo sentido, este es un libro que, de igual manera, evidencia la responsabilidad de un grupo de investigadores ante la sociedad en la que ellos viven; pues, al identificar y documentar las experiencias de un proceso tan doloroso y delicado están poniendo una importante contribución para la construcción de una paz sostenible en Colombia.

A mis colegas y a mis amigos dentro y fuera de la Universidad Icesi, cuyos trabajos se presentan a continuación, quiero agradecerles la oportunidad que me brindaron de compartir con ellos esta experiencia investigativa que me ayudó a comprender mejor este país en el que ahora vivo. Pero también estoy convencido de que el lector, sea colombiano ó extranjero, puede encontrar en estas páginas, a su propio modo, la respuesta a la pregunta que plantea el gran poeta ruso Mijaíl Lermontov en el poema que utilicé como epígrafe a este prólogo: *¡Oh pobre hombre! ¿Qué fin estás buscando? ¡El cielo es azul, el mundo infinito! ¡Y tú estás luchando! ¿Por qué, para qué?*

Muchos de los protagonistas de los casos analizados, en las páginas siguientes, han encontrado sus respuestas a estas preguntas. Pero, estas respuestas no son las únicas posibles para todos los casos y situaciones tan diversas que se presentan a diario en este país. Cada día, más y más comunidades hacen un gran esfuerzo para encontrar las respuestas a sus particulares y específicas situaciones conflictivas ampliando, así, el conjunto de buenas prácticas. Y este es el hecho significativo, y radicalmente importante, pues cuando las buenas prácticas para superar el conflicto en Colombia dejen de ser los objetos de unos estudios excepcionales, y se conviertan en una realidad cotidiana de este país, los territorios y las poblaciones dejaran de ser objeto de una disputa violenta y los tiempos de la paz en Colombia ya no estarán tan lejanos.

Vladimir Rouvinski

Introducción

Colombia es, entre otras cosas, una cantera de múltiples expresiones ciudadanas que enfrentan con valentía, imaginación y dignidad las décadas de un conflicto violento, complejo y degradado que ha afectado a vastos sectores de la población. Las iniciativas de paz, como suele llamárseles, dejan ver no solamente posibles salidas alternativas a la violencia, sino rutas más o menos claras sobre las condiciones que podrían ayudar a construir un futuro menos amenazado por la desconfianza, el resentimiento y la venganza, y más encaminado a remover los obstáculos que impiden construir una sociedad justa, equitativa, incluyente, pacífica y que amplíe las opciones del desarrollo humano. Probablemente hace falta confiar más en esa capacidad de construir opciones para la paz y para ello hará falta identificarlas, conocerlas, aprender de sus lecciones y procurar que su ejemplo penetre en más sectores sociales.

Cuando se hace referencia al papel de la sociedad civil en la superación del conflicto colombiano, generalmente se alude a un conjunto de iniciativas que han marcado ciertos hitos en la movilización social por la paz. Desde mediados de la década de los ochenta surgen algunos movimientos con una significativa capacidad de convocatoria nacional: el Movimiento por la Vida en 1985, precursor de la Semana por la Paz que continúa realizándose hasta la fecha; Redepaz en 1992 que, entre otras cosas, tuvo incidencia en la conformación del Consejo Nacional de Paz bajo el gobierno de Ernesto Samper; la Comisión de Conciliación Nacional y el Comité de Búsqueda por la paz a mediados de los noventa, Destino Colombia en 1997, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en 1998 o iniciativas del sector privado como Empresarios por la Paz y la Fundación Ideas para la Paz a finales de esa década. Durante este período se destaca la convocatoria del Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad en 1997, que contó con la participación de 10 millones de votantes. Ya en la década siguiente, comienzan a tener una presencia significativa las movilizaciones de mujeres por la paz, especialmente luego del rompimiento de los diálogos del Caguán en 2002.

Estas y otras acciones importantes, de carácter regional y local, como la consulta popular en Aguachica en 1995 o la Asamblea municipal constituyente de Mogotes en 1998, y otras que por razones de espacio no se incluyen aquí, tienen un rasgo común: giran alrededor de las negociaciones de paz y, si bien con diversos matices, en su momento ejercieron una innegable presión social y política por las salidas negociadas al conflicto armado.

Por otra parte, hay también un sinnúmero de acciones colectivas para la construcción de la paz cuyos protagonistas son en la mayoría de los casos grupos de personas, familias, vecinos, comunidades, grupos étnicos, mujeres y jóvenes, que buscan reconstruir sus vidas luego de haber sufrido las arremetidas de la violencia. Pero además, a través de ese proceso, dan lecciones a cerca de las múltiples formas de transformar las condiciones que generan y reproducen un fenómeno de tal complejidad. Ese tipo de iniciativas son, precisamente, objeto de esta publicación. Aquí se recoge un fragmento de sus historias, de las diversas estrategias que estos grupos y comunidades han ideado y desarrollado para afrontar una realidad enmarañada y violenta, con matices y efectos distintos, que precisamente por eso permiten identificar valiosos aprendizajes para la construcción de la paz. Pero antes, una cuantas líneas que explican la articulación de esfuerzos que, con el propósito de profundizar el acercamiento a este tipo de iniciativas, emprendieron el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un conjunto de universidades en Colombia, entre ellas la Universidad Icesi de Cali.

Marco de cooperación del PNUD en Colombia

Tal como se resume en el Marco de Asistencia al Desarrollo de las Naciones Unidas en Colombia (UNDAF, por sus siglas en inglés), que recoge las áreas en las cuales centrará su cooperación con el país para el período 2008 – 2012: se apoyarán los esfuerzos nacionales por el fortalecimiento de su institucionalidad democrática, la construcción de condiciones para la paz, la promoción de la convivencia y por garantizar a las víctimas de la violencia interna generada por los grupos armados ilegales, la restitución de sus derechos dentro de los principios de verdad, justicia y reparación.

Uno de los propósitos de este Marco de Asistencia apunta a reforzar las capacidades nacionales y territoriales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de la convivencia, el desarrollo humano y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, con enfoque

diferencial y de reconciliación. Este es el ámbito de intervención del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya acción se sustenta en tres ejes: 1) Promoción de procesos sociales e institucionales de transformación no violenta de conflictos y consolidación de la paz. 2) Empoderamiento social, político y económico de las poblaciones vulnerables, excluidas y afectadas por la situación de violencia interna a raíz del conflicto con los grupos armados ilegales. 3) Protección de la memoria y la dignidad de las víctimas de la violencia generada por el conflicto con los grupos armados ilegales, mediante procesos de reconciliación acordes con los estándares internacionales.

La ruta de consolidación de la paz, a la cual apunta el primer eje, incluye la identificación y sistematización de las lecciones que se desprenden de acciones colectivas que promueven la construcción de opciones viables para la paz, el desarrollo de una cultura de convivencia y la transformación y resolución pacífica de los conflictos, fundamentalmente en el ámbito local. Este propósito es el que orienta al Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto, iniciativa del Área de Paz del PNUD que cuenta con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). Y es aquí donde se ancla el interés de conocer las acciones colectivas para la construcción de la paz, para aprender de sus lecciones y contribuir a su fortalecimiento.

Iniciativas de paz como agentes de transformación

Las acciones colectivas para la construcción de la paz a las que se hace referencia, contribuyen, desde distintos ángulos y con diverso alcance, a transformar las condiciones que reproducen, alimentan y avivan las respuestas violentas que se dan a las crisis desatadas en los contextos de conflictos y de violencia armada. Son iniciativas que desde respuestas no violentas pretenden transformar esos contextos, reducir las respuestas violentas a la conflictividad, prevenir el daño y reparar los derechos vulnerados de la población afectada.

Se trata, en cierto sentido, de "buenas prácticas", es decir, programas, proyectos o procesos, que tienen un efecto ejemplificador, que inspiran el desarrollo de acciones similares porque contienen elementos que persiguen la transformación de las condiciones que sustentan la violencia, y modifican la respuesta tradicional que a ella se le da. Son iniciativas que construyen realidades desde lógicas distintas a la confrontación violenta y recurren a principios básicos de solidaridad, respeto

mutuo y estimación de las personas. Son acciones que contienen esperanza y que surgen en gran medida de las situaciones más adversas dando fe de la capacidad de las personas para reponerse al dolor, al miedo, la ira o la impotencia y construir, junto con los demás, nuevas opciones de vida digna.

Las lecciones, aportes y aprendizajes que se desprenden de estas iniciativas constituyen un apreciable capital que amerita ser mejor comprendido, más reconocido públicamente y eficazmente apoyado para contribuir a su fortalecimiento. Con este convencimiento, se emprende la tarea de realizar un conjunto de estudios de caso, que permitieran avanzar hacia tal fin. Durante el primer semestre de 2008, gracias al eco y afinidad que el Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto encontró en un grupo de universidades de cinco regiones del país para comprometerse en este análisis colectivo, se dio inicio al proceso de realización de 25 estudios de caso en cinco zonas del país. Integraron este ejercicio de investigación la Universidad EAFIT, en Antioquia; la Universidad del Cauca, en ese departamento; la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Santander; la Universidad del Norte, para los casos de la región de Los Montes de María (Bolívar y Sucre) y la Universidad ICESI, en el Valle del Cauca, cuyos resultados de investigación se presentan en este volumen.

Gracias al trabajo cumplido por los equipos de investigación que cada una de las universidades integró y a la generosidad de las iniciativas de paz seleccionadas para realizar este trabajo, es posible contar con interesantes reflexiones y aportes que ahora se comparten con un público más amplio. Ojalá aquí encuentren elementos que alimenten sus propias miradas y reflexiones y contribuyan, también, a fortalecer y generar otros procesos sociales que persigan la construcción de la paz.

Los estudios de caso

El propósito que orientó los estudios de caso fue encontrar elementos de comprensión que contribuyesen a fortalecer el potencial de las acciones colectivas para la construcción de la paz en términos de las metodologías que aplican para alcanzar sus objetivos y de las condiciones, externas e internas, asociadas a tales decisiones. Con ello se esperaba identificar pautas, para fortalecer estas acciones colectivas, e identificar algunas líneas de política pública que pudiesen ilustrar un curso más seguro para la superación del conflicto violento.

Teniendo en cuenta que las acciones colectivas para la construcción de la paz, objeto de los estudios de caso, incluyen un conjunto diverso de respuestas

para abordar constructivamente la complejidad del conflicto armado, con el propósito de superar y transformas las condiciones que lo alimentan, se tomaron cinco procesos en cada una de las regiones donde el Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto había realizado un trabajo previo (Antioquia, Cauca, Santander, Valle y Montes de María) y que permitieran hacer un análisis lógico de los hallazgos. De esta forma, se esperaba obtener un compendio de características sistematizadas que tuvieran utilidad para futuros procesos de evaluación y de fortalecimiento de las acciones colectivas para la paz; por ello se seleccionaron cinco perfiles de acción colectiva que permitieran identificar diferencias o semejanzas de los casos entre si y entre las regiones, de acuerdo con los matices de contexto, origen, diversidad de actores involucrados y, en general, con las distintas experiencias en el desarrollo de sus acciones.

Los perfiles seleccionados fueron:

1. Atención integral a víctimas desde un enfoque de derechos y la búsqueda y/o presión colectiva por la aplicación de los principios de la justicia transicional (verdad, justicia, reparación y la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición). Son acciones que promueven la sensibilidad y la solidaridad de la sociedad y el reconocimiento de las responsabilidades que le competen al Estado como proveedor de condiciones para la prevención, la reparación y la justicia.
2. Prevención del reclutamiento mediante la generación de oportunidades educativas, productivas, lúdicas, deportivas y artísticas que sean atractivas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que encuentren oportunidades de vida por fuera del conflicto violento y los proteja del riesgo de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley.
3. Fortalecimiento de la gobernabilidad mediante iniciativas que promueven las relaciones democráticas entre sociedad civil y Estado para enfrentar la violencia, transformar los conflictos desde lógicas no violentas y vivificar el tejido organizativo social para la construcción de la paz. Todo ello pasa necesariamente por profundizar la democracia local en términos de escenarios, instrumentos y condiciones para la participación y la construcción de futuros incluyentes.
4. Educación para la paz, desde procesos formales hasta informales, que buscan fortalecer los valores de la cultura de convivencia, el respeto

y la tolerancia basados en la vigencia plena de los derechos, ofrecer opciones educativas adecuadas y flexibles a las víctimas del conflicto y a quienes se han aceptado con decisión el compromiso expreso de reintegrarse a la sociedad.

5. Comunicación para la paz, teniendo en cuenta el papel que cumple en la transformación de los imaginarios que alientan el conflicto violento. Las iniciativas dentro de este perfil son expresiones tanto de medios de comunicación como de sectores de la comunidad que, mediante la utilización de herramientas comunicativas, contribuyen a balancear la información sobre el conflicto armado y a darle mayor importancia a la cultura de convivencia.

Una vez delimitado el campo de las acciones colectivas para la construcción de la paz objeto de los estudios de caso, la pregunta que orientó el trabajo de los equipos de investigación fue: ¿cuáles son las características que mejor ilustran el potencial y la capacidad de acción de este tipo de iniciativas identificadas aquí como acciones colectivas para la construcción de la paz, dentro de las condiciones descritas? En principio no se partió de cero; al menos ya se perfilaban algunas características que comenzaron a verse a partir del trabajo de documentación y sistematización de cerca de 300 iniciativas que ha registrado el Banco de Buenas Práctica para Superar el Conflicto.

Sobre el potencial para la construcción de paz

Tres son los rasgos que se derivan de ese primer nivel de análisis, como ya se insinúa en líneas anteriores, y que, sobre todo, dejan ver las oportunidades que la construcción social de la paz puede tener en Colombia. Son ellos:

1. Contrariamente a lo que se podría esperar a la luz de lo que ha sido la propia historia de un conflicto violento de tan larga duración como el que se ha vivido en Colombia, grupos de personas, generalmente constituidos por quienes han padecido directa e indirectamente sus efectos, responden a las atrocidades de un conflicto degradado con acciones no violentas en procura de reconstruir su dignidad como individuos, como pueblo, como etnia o colectividad específica.

   Si bien este tipo de respuesta no es cien por ciento generalizable, es posible señalar que como sociedad existe un gran potencial para transformar la realidad, cuando quienes han sido más afectados tienen la capacidad

de responder de esta manera. Pues ellas no se quedan inertes en medio de la desmoralización: se aferran a un objetivo, a un ideal y construyen oportunidades, que pueden ser pequeñas y frágiles, por encima de odios y venganzas. No se resignan a vivir una vida a medias, con las oportunidades truncadas por el conflicto, y parece que han alcanzado una altura moral suficiente que los capacita para actuar con valor, que los engrandece en medio de las condiciones más difíciles y les da fortaleza para remediar, constructivamente, su destino.

2. Estas acciones colectivas emergen de la riqueza, el talento y la capacidad creadora que invierten cientos de personas para desarrollar prácticas concretas, aunque diversas en su forma y alcance, que aportan de manera específica a la superación de los efectos del conflicto armado. Rasgos particulares de su acción, elementos de sus metodologías y la dimensión de sus propuestas, ilustran las múltiples posibilidades de inventiva para hacerle frente a las distintas situaciones que provoca el conflicto, y que de manera significativa están afianzadas en la restitución de los derechos, en la identidad colectiva y en la cultura.

   Los matices van desde acciones humanitarias y la recuperación de las marcas traumáticas que les deja la violencia, pasando por la atención integral y la restitución de los derechos coartados, la prevención de nuevos efectos nocivos en más personas, hasta la construcción de proyectos de vida cuyo propósito es transformar las condiciones que han dado sustento y reproducen la confrontación armada. Se acude a estrategias que apelan a los recursos culturales y educativos, o a recuperar la política y la vida pública como expresión legítima de una sociedad civilizada.

3. En consecuencia, la organización social y la participación de este tipo de iniciativas en espacios de interlocución con el Estado se proyectan más allá de la necesidad y legitimidad de ocuparse de su drama particular como víctimas. Avanzan hacia la reivindicación de sus derechos, afianzándose en la ciudadanía y en otros temas que atañen a su comunidad, a su municipio, de esta forma se involucran mucho más activamente en el desarrollo y la democracia locales, promoviendo nuevos liderazgos, nuevas expresiones civilistas de manifestación colectiva. Buscan, en últimas, aunque no siempre con éxito, que el conflicto armado no encuentre ni espacios ni pretextos para perpetuarse en sus regiones.

Por eso las comunidades afectadas se organizan y se involucran en el diseño de su propio desarrollo para poner en marcha proyectos productivos viables y fortalecen los escenarios de participación ciudadana, la convivencia y el tejido social.

Estos tres rasgos se complementan, y refuerzan la pertinencia de tres pilares dentro de la lógica de construcción social de la paz: el fortalecimiento del tejido organizativo social (incluidas las organizaciones de víctimas), el reconocimiento de derechos como ejercicio pleno de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia local. Ellos son, sin duda, centrales en la lógica de transformación de las condiciones que alimentan el conflicto armado y la violencia generalizada.

Seguramente los estudios de caso que se recogen en esta publicación reforzarán estos planeamientos o discutirán en parte con ellos. De eso se trata precisamente participar en un ejercicio colectivo de investigación. Por cierto, ya se ha tenido oportunidad de discutir algunos de estos avances, tanto los que se acaban de presentar como los que se incluyen en esta publicación, con las propias iniciativas estudiadas. Pero más allá de un ejercicio académico, por lo demás riguroso y serio, tanto para el equipo de investigadoras e investigadores del ICESI que participaron en este proceso, como para el equipo del Banco de Buenas Práctica para Superar el Conflicto y para el PNUD, esta fue una oportunidad para ampliar la mirada sobre lo que parecía "saberse" y una ocasión para profundizar en la comprensión de lo que hombres y mujeres desde complejas realidades están aportando a la construcción de paz en este país.

Una visión global de las lecciones y recomendaciones que se desprenden de los 25 estudios de caso realizados será objeto de una próxima publicación del PNUD.

El contenido de esta publicación

En este libro se incluyen cuatro casos trabajados en el departamento del Valle. El primero de ellos, *Cultura de paz en el Río Cajambre* (zona rural del Buenaventura), es un proyecto comunitario afincado en la neutralidad a partir de la convicción del derecho a la propiedad colectiva de su territorio y la defensa de su cultura que como comunidades negras tienen como facultad constitucional. Tiene un claro proyecto político que inspira y moviliza su proceso de resistencia al destierro, luego de haber padecido un desplazamiento. Además, constituyen un proyecto de gestión social del territorio para generar condiciones de vida digna, a partir de conocer y aprovechar los marcos jurídicos que les reconocen propiedad colectiva, autonomía y formas de gobierno propio. Este caso es analizado por Rosa Emilia Bermúdez Rico, bajo el título: "Gobernabilidad y control territorial en el pacífico colombiano".

El segundo caso es el *Proceso de retorno y fortalecimiento de Bajo Calima*, analizado por Enrique Jaramillo Buenaventura con el nombre: "Políticas espaciales y comunidades negras en el pacífico colombiano". Es una experiencia de las comunidades negras de esta región del litoral pacífico vallecaucano que se estructura alrededor de la fortaleza de su Consejo Comunitario como agente que dinamiza la gestión de proyectos de vivienda, seguridad alimentaria y saneamiento básico para mejorar la calidad de vida y fortalecer la organización comunitaria. La reconstrucción del tejido social es una prioridad en términos de la recuperación de su identidad cultual y la construcción de un proyecto de largo plazo donde es posible ver emerger nuevos liderazgos que fortalecen su acción colectiva. Es, por así decirlo, un ejemplo claro de un dilema social: la tragedia sufrida fue la condición para comenzar a acercarse a la inclusión social y política.

El *Programa jóvenes agricultores del Valle del Cauca*, el tercer caso contenido en esta publicación con el título de "Tierras y territorios en conflicto", elaborado por Luis Fernando Barón Porras, es una iniciativa impulsada por el Comité Departamental de Cafeteros del Valle, en asocio con la Cooperativa de Centrales Agrarias del Valle del Cauca (CENCOA). Este programa facilita el acceso a algunos jóvenes a tierra, crédito, capacitación y restablecimiento de relaciones comunitarias, en una región donde el conflicto armado y el narcotráfico se constituyen en una fuente importante de ingresos. Se ha enfocado en el fortalecimiento de la autoestima y la identidad campesina en los jóvenes, en su capacidad de acción comunitaria en medio de un contexto marcado no solo por los ciclos de la ilegalidad sino, también, por los ciclos de un complejo panorama político, social y económico que les afecta.

Bajo el título "Tensiones del periodismo público frente al reto del conflicto", Ana Lucía Paz Rueda introduce el último caso, sobre la experiencia de este programa de la televisión regional que se propuso contribuir al análisis de la realidad social, política y económica del sur occidente colombiano mediante debates con académicos, miembros de ONG y representantes de Gobierno. Buscó formar escenarios de reflexión relacionados con el desplazamiento y problemas estructurales del conflicto y ser un espacio donde los desplazados y desaparecidos pudieran encontrarse con sus familias. Su dinámica se vio afectada por los vaivenes administrativos, políticos o de sintonía, que decretaron su terminación. Si bien no se podría esperar que tejiera redes sociales por la naturaleza del medio, tampoco generó alianzas con sectores claves vinculados a la temática que permitieran una eventual mayor permanencia del programa.

Finalmente cierra esta publicación un artículo, a manera de epílogo, realizado por Rafael Silva Vega, que introduce una serie de interesantes comentarios a partir de los casos expuestos desde un análisis de la ciudadanía en contextos tan complejos como los que enfrentan las iniciativas que se proponen aportar opciones a la construcción de la paz.

Esta publicación fue posible gracias al esfuerzo conjunto del CIES, Centro de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Icesi y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, soportado en el trabajo concienzudo del equipo de investigadoras e investigadores del Icesi que tuvieron el buen ánimo de traducir sus hallazgos en los artículos que aquí se presentan, y que incluyó extensas jornadas de trabajo, reflexión y, por supuesto, diálogo con las comunidades involucradas en este proceso. Las comunidades negras del área rural de Buenaventura, los jóvenes campesinos del centro del Valle, periodistas y realizadores que permitieron situar en la opinión pública regional el drama de las víctimas de la violencia degradada son, finalmente, no solo protagonistas de las importantes lecciones que se desprenden de su experiencia sino que tienen, también, de muchas maneras, gran responsabilidad en la coautoría de las reflexiones que ahora se comparten.

Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Bogotá, noviembre de 2009

Capítulo 1

Gobernabilidad y control territorial en el Pacífico colombiano

Rosa Emilia Bermúdez Rico

I. La re-invención de lo étnico como reivindicación política

Las dinámicas sociales y políticas adelantadas por diversos actores en el Pacífico colombiano, durante las dos últimas décadas, han redimensionado esta región del país en el contexto nacional. Esta región, de diez millones de hectáreas, cubierta de bosque tropical húmedo, reconocida como territorio ancestral de la población negra —descendientes de africanos esclavizados durante la Colonia— actualmente es uno de los escenarios estratégicos para entender las lógicas recientes en la disputa por el control territorial en la dinámica del conflicto armado en Colombia. Este proceso de cambio social ha sido agenciado por las comunidades negras del Pacífico colombiano, quienes han desarrollado, desde finales de los años ochenta y hasta la actualidad, un singular, complejo y denso proceso de reivindicación étnico-cultural.

Una primera etapa del proceso de reivindicación étnico-cultural se caracteriza por el desarrollo de un amplio debate en torno al reconocimiento de la propiedad colectiva de los territorios ancestralmente ocupados por las comunidades negras en el Pacífico colombiano, considerados áreas baldías por el Estado colombiano, con el propósito de exigir el derecho a la propiedad colectiva del territorio. Es en esta dinámica que se adelanta un intenso proceso organizativo en el que inicialmente se conforman algunas expresiones sociales de carácter local, como ODINCA, organización para la defensa de los intereses del río Cajambre.[1]

[1] Otra expresión organizativa de las comunidades negras por cuencas es Owira, de la cuenca del río Anchicayá.

La reivindicación étnico-cultural agenciada por las comunidades negras en Colombia tiene entre sus logros más significativos la inclusión del artículo transitorio 55 en la Constitución de 1991, mediante el cual se reconoce, por primera vez, a las comunidades negras del país como grupo étnico con derechos culturales y territoriales propios. Este artículo transitorio tuvo, posteriormente, su desarrollo legislativo en la Ley 70 de 1993, estableciendo garantías para los derechos territoriales colectivos de las comunidades negras en el Pacífico colombiano y, además, definiendo a los Consejos Comunitarios como formas legítimas de autoridad en el territorio.

A través de los mecanismos legales contemplados en la Ley 70, y del dinamismo de este proceso social, se titularon casi cinco millones de hectáreas de tierras para las comunidades negras en la costa Pacífica, lo que en la práctica representa la legitimidad de un orden social en esta zona del país y una política de reconocimiento étnico y cultural significativa.[2]

Una segunda etapa del proceso de reconocimiento étnico-cultural se desarrolla en el contexto del desplazamiento forzado interno que se ha presentado desde 1998, en las zonas de propiedad colectiva, mediante el cual se ha cuestionado y no en pocos casos despojado de sus territorios, a las comunidades negras del Pacífico colombiano. La intensidad del desplazamiento en esta región está asociada con la centralización del conflicto armado en esta zona del país desde mediados de los años noventa. Según estimaciones oficiales, el 30% de los desplazados en Colombia son afrocolombianos. Así, en esta segunda etapa se han configurado un sinnúmero de dinámicas que, en la práctica, han amenazado —y en muchos casos incluso revertido— la titulación colectiva implementada en el marco de la Ley 70. De esta forma, como ha sido señalado por Oslender (2004), se ha desarrollado un proceso de des-territorialización.

Por consiguiente, la actuación de las organizaciones sociales de las comunidades negras en el pacífico colombiano, y su ejercicio de autoridad local, está inmersa en la disputa territorial que en la región se desarrolla y se entrelaza con la reivindicación política de lo étnico-cultural que ha caracterizado su movimiento social en los últimos veinte años. Por tanto, consideramos que a partir del proceso desarrollado por parte

[2] De los 10 millones de hectáreas que se encuentran en el Pacífico colombiano, el 50% de estos corresponde a titulación colectiva. Oslender, Ulrich. "Des-territorialización y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: la construcción de geografías de terror". Ponencia presentada en el Seminario Internacional "(Des) Territorialidades y (no) lugares", INER, Medellín, 4-6 Noviembre, 2004.

del Consejo Comunitario del río Cajambre, como un caso ilustrativo, resulta pertinente reflexionar en torno al alcance y el sentido de la gobernabilidad construida, y el control territorial ejercido por estas formas de autoridad local, en el contexto señalado.

Es importante resaltar que la reivindicación étnico-cultural es un proceso no lineal, que ha oscilado entre el reconocimiento social y cultural, centrado en el reconocimiento formal de derechos sociales y políticos y, de otro lado, en la inclusión formal de una población estigmatizada durante siglos. En esta perspectiva, la titulación colectiva de tierras y la conformación de los consejos comunitarios como autoridades locales resulta altamente significativa. No obstante, el análisis de este proceso incluye también el impacto regresivo proporcionado por la incursión de las organizaciones violentas e ilegales que han limitado el alcance de los avances normativos y, por la vía de la violencia, han desestructurado el orden social establecido. Aunque desde hace una década se otorgó el estatuto formal a la titulación colectiva y se lograron avances significativos en este sentido, durante el mismo tiempo se ha presentado una intensa disputa por el territorio. De ahí el planteamiento que la gobernabilidad y el control territorial, en esta zona del país, se encuentran interpelados en la actualidad.

Por otra parte, este proceso social caracterizado por la reivindicación política de lo étnico en el país, y que ha sido agenciado por las comunidades negras e indígenas, establece de manera central la discusión en torno a la exclusión —e inclusión— en la estructuración de la democracia en Colombia, es decir, establece de manera central la reivindicación de derechos y la interlocución con el Estado. Desde esta perspectiva lo que se pone en juego son las dinámicas materiales y simbólicas de la desigualdad social. Estas dinámicas constituyen uno de los aspectos centrales en la comprensión del sentido que adquieren las reivindicaciones planteadas por estas organizaciones y las formas específicas como han sido asumidas por la población negra del Pacífico, particularmente, en torno al proceso de titulación colectiva y la legitimidad interna —endógena— que otorgan a sus organizaciones locales.

II. Gobernabilidad y autoridad local: imaginarios y representaciones

Los pobladores de la cuenca del río Cajambre se reconocen como negros descendientes de esclavos cimarrones. Para ellos, sus ancestros fueron esclavos fugitivos de las haciendas ubicadas al otro lado de la cordillera Occidental; y otros "llegaron a Cajambre con el amo Crisanto Barco, a explotar minas de oro, en el

año de 1786".[3] La afirmación de este pasado compartido es recreada de manera permanente por parte de la población y está en el centro de la reivindicación de su identidad cultural, que los constituye en una comunidad étnica y que sustenta la legitimidad de los derechos territoriales que se desprenden de este reconocimiento. Este aspecto fundamental de su auto-reconocimiento se ilustra en el documento que registra la fundación de la primera organización local:

> A casi 500 años de presencia negra en estas comunidades su situación es como en el primer día de la creación: caos, miseria, abandono y engaño. Un doble espectáculo conforma el panorama: marginación social y económica y marginación racial y cultural. La crudeza de esta realidad lacerante ha ido despertando la conciencia "pacificada" de sus gentes, que poco a poco han mirado la posibilidad de organizarse y luchar por sus derechos.

La cuenca del río Cajambre está habitada por cuatro mil habitantes distribuidos en doce caseríos. Estos son: Barco, Aragón, San Isidro, El Chorro, Silva, La Fragua, Boca de Brazo, Punta Bonita, Pital, Guayabal, Timba y Timbita. Esta población ha permanecido en condiciones de aislamiento y marginación, dada su ubicación geográfica entre la cordillera su única vía de comunicación es aguas abajo por el río, hacia la desembocadura al mar. Esta situación ha favorecido la conservación de sus costumbres y tradiciones y un fuerte vínculo con las comunidades negras que habitan en las cuencas cercanas en el andén del Pacífico colombiano. Esta historia común de las comunidades negras del Pacífico ha favorecido su participación conjunta en el proceso social de reivindicación de sus derechos como pueblo étnico, el cual se ha planteado como consigna central: luchar por el derecho a ser respetados en su dignidad y autonomía.

Este proceso comienza a gestarse en el año 1991 a partir del acuerdo, entre las distintas comunidades que componen esta cuenca, de "dar un primer paso en la unión y organización de las comunidades, a fin de encontrar caminos de lucha por sus derechos".[4] Inicialmente este propósito se hace tangible con la conformación del comité denominado CODINCA; un año después se cons-

[3] Conclusiones del Primer Encuentro de las Comunidades Negras del Río Cajambre, Silva, julio 6 y 7 de 1991. Documento constitutivo de la organización por la defensa de los intereses de los habitantes del río Cajambre, p. 1.

[4] Conclusiones del primer encuentro de las comunidades negras del río Cajambre. Silva: Comunidades Negras, 1991.

tituye la organización que permanece hasta la actualidad, ODINCA —Organización para la defensa de los Intereses del río Cajambre—.[5]

> A través de ODINCA comienza en el interior del río la socialización del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Nacional de 1991, y el establecimiento de contactos con los ríos vecinos cuyo propósito era de apoyar el proceso de reconocimiento social, cultural y económico de las organizaciones étnico-territoriales en la región del Pacífico, por el país y el Estado.[6]

Adicionalmente, el proceso organizativo desarrollado por ODINCA contó con el apoyo fundamental de la Iglesia, como agente institucional, quien a través de la Pastoral Social respaldó y acompañó de manera permanente las asambleas y los debates adelantados por las comunidades negras. De manera significativa, también se resalta el apoyo financiero que la Agencia de Cooperación Internacional Suiza —Swissaid— desarrolló desde la conformación de ODINCA y, también, su posterior apoyo al Consejo Comunitario de Cajambre.

La intensa dinámica adquirida por este proceso está estrechamente asociada con lo significativo que resultaba para estas comunidades lograr un reconocimiento como pueblos negros y, de esta forma, obtener la propiedad colectiva de la tierra. Así quedó expresado en los compromisos adquiridos en el primer encuentro de las comunidades del río Cajambre:

> La comunidad se compromete a estudiar el Artículo 55 de la nueva Constitución y de las leyes que amparan las minorías étnicas que las convierten en propietarias colectivas de la tierra y de las riberas; y especialmente de los recursos naturales.[7]

A inicios de la década de los años noventa los conflictos giraban en torno a la defensa del derecho de las comunidades sobre los recursos naturales y, de esta forma, a acciones para lograr la expulsión de los explotadores foráneos del oro, de los recursos madereros y de la pesca artesanal. Los pobladores argumentaban que: "la explotación foránea y sin control ha generado contami-

[5] Grupo focal integrantes del Consejo Comunitario del Río Cajambre. Buenaventura, abril 2 y 3 de 2008.

[6] Consejo comunitario del río Cajambre, Plan de Manejo Territorial, El Pital, 2006. p. 9.

[7] Conclusiones del primer encuentro de las comunidades negras del río Cajambre. Silva, 6 y 7 de julio de 1991, p. 5.

nación de las quebradas y del río, de las fuentes de vida, colocando en peligro el equilibrio ecológico, cada vez más amenazado".[8]

Con la promulgación de la Ley 70 de 1993 se inicia un proceso formal —en términos legales— de organización de las comunidades negras del Pacífico colombiano. En 1995, cuando se reconoce el sistema de gobierno propio mediante el Decreto 1745, inicia el proceso legal de conformación de los Consejos Comunitarios y el proceso de titulación colectiva. A partir de la Ley 70 de 1993, las comunidades negras se organizan en consejos comunitarios, actuando por tanto como las máximas autoridades del territorio colectivo. El Consejo Comunitario del Río Cajambre se conforma mediante asamblea general de la comunidad en noviembre del año 1997, momento en el cual se define su estructura organizativa interna y se elijen los representantes para ocupar la Junta Directiva y los órganos de gobierno.

> La Ley 70 exige que la gente se organice en consejos comunitarios entendidos como el conjunto de familias de ascendencia afro colombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.[9]

Los líderes de este Consejo Comunitario del río Cajambre se consideran pioneros en la gestión de la titulación colectiva de tierras, al haber logrado la propiedad colectiva de un territorio de 75.710 hectáreas, reconocidas legalmente por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora (ahora Incoder).[10] El Territorio Colectivo del Consejo Comunitario del río Cajambre se encuentra ubicado al suroeste del municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 60 Km. de distancia del puerto de Buenaventura.[11]

---

[8] *Ibíd*, p.6.

[9] Decreto 1745 de 1995 mediante el cual se reglamenta la Ley 70 de 1993 de la Constitución Nacional.

[10] Grupo focal líderes del Consejo Comunitario de Cajambre, Buenaventura, 3 de abril de 2008.

[11] El reconocimiento legal sobre la propiedad del Territorio Colectivo del río Cajambre fue otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, (ahora INCODER) mediante la Resolución No. 03305 del 29 de diciembre del año 1999. Inicialmente se logró por la Resolución INCORA No. 4916 del 29 de diciembre de 1998 pero ésta no fue avalada por el Consejo, en vista de que no se le reconocía la propiedad sobre los manglares, sistemas naturales vitales para las comunidades. Esta situación obligó a que el Estado reconsiderara su posición, y

De esta forma, el Consejo Comunitario logra el sueño tantas veces cantado por el pueblo cajambreño:

> Yo tengo un territorio que me lo quieren quitar, pero yo no, compañero, yo no me voy de aquí. Luchemos por nuestra tierra, que nos van a destruir, convénzase compañero, unámonos compañero, vamos juntos a luchar.[12]

Puede sugerirse que el proceso de reconocimiento étnico-cultural, adelantado por la comunidad de Cajambre, dialoga con organizaciones que difunden una agenda continental, que promueven el reconocimiento de reparaciones simbólicas, y con aquellas que proponen crear condiciones políticas y jurídicas para el reconocimiento de reparaciones sociales y políticas como expresión de justicia social contemporánea (Almario García, 2007). De esta forma, el proceso de las comunidades negras del Pacífico colombiano se encuentra conectado con el movimiento de afrodescendientes, no sólo regional, sino internacional, con aquellas organizaciones que reivindican la importancia de promulgar acciones compensatorias a la situación de desigualdad de orden histórico señalado.

No obstante, el avance logrado con la Ley 70, con respecto al reconocimiento de derechos se volvió un "arma de doble filo", en opinión de algunos de los pobladores de la región, porque al obtener la propiedad colectiva del territorio se sobrevino una agudización del conflicto armado en la región y, ahora, son territorios de guerra. En la última década, los territorios ancestrales habitados por las comunidades afrodescendientes se convirtieron en escenarios de violencia. Esta situación se presenta, especialmente, en los territorios que se le titularon colectivamente a las comunidades afrodescendientes del Pacífico y es el resultado de las confrontaciones entre grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares) y, de éstos, con la fuerza pública.

Las acciones armadas que se han intensificado en la región han ocasionado el desplazamiento y el destierro de familiares, amigos y paisanos. La amenaza permanente de ser víctima de la guerra ha generado una situación de tensión e incertidumbre en la vida cotidiana de los pobladores del Pacífico colombiano.

---

ampliara el área de titulación mediante la Resolución No. 03305 del 29 de diciembre del año 1999.

[12] Videograbación de la Asamblea Constitutiva del Consejo Comunitario de Cajambre, noviembre 22 y 23 de 1997.

Los pobladores del río Cajambre, manifiestan su desconfianza con esta situación, no entienden por qué los quieren "sacar de su territorio", y plantean: "nosotros creemos que hay algo allí atrás, porque claro, uno asustado, con temor, tiene que dejarlo todo, entonces por eso decimos, la Ley 70 es un reconocimiento, pero al mismo tiempo, desde ese momento, las cosas se volvieron más duras".[13] Esta percepción de los cajambreños se corresponde con los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo que señalan un impacto altamente negativo y concentrado en el caso de las comunidades negras en el contexto de la guerra en el país, como aparece en la siguiente cita:

> La Defensoría del Pueblo reconoce que en la actualidad, a pesar de los subregistros, los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos, en comparación con el resto de la población del país, soportan con una intensidad entre siete y diez veces mayor los embates del desplazamiento. Hacia 2003, los indígenas constituían 3.75% de la población expulsada de sus tierras en el país mientras los afrocolombianos eran 33%: aproximadamente, 83.650.[14]

Han sido diversos los planteamientos de carácter académico, social y político que se han referido acerca de la importancia de considerar las gravísimas consecuencias del conflicto interno colombiano sobre la gente negra e indígena, los territorios étnicos y sus organizaciones (Mosquera y Barcelos, 2007). De manera especial, se ha llamado la atención acerca del fenómeno del desplazamiento y lo que éste ha implicado, en términos de "*vaciar*" o desaparecer poblaciones, construir dinámicas que hablan de una cotidianidad del terror y del miedo y, más aún, del costo en términos de la desestructuración del tejido social y los procesos organizativos étnicos que han sido interrumpidos o interferidos (Almario García, 2007: 200).

En este contexto, el Consejo Comunitario de Cajambre ha desarrollado diversas estrategias para permanecer en el territorio, expresando con firmeza su derecho a mantener una posición de neutralidad en el conflicto. En este ámbito de análisis nos centraremos a continuación.

---

[13] Grupo focal de pobladores del río Cajambre, Buenaventura, 3 y 4 de abril de 2008.

[14] Defensoría, 2003, citado por Arboleda Quiñónez, Santiago; "Conocimientos ancestrales amenazados y destierro prorrogado: la encrucijada de los afrocolombianos", en: Mosquera, Claudia y Barcelos, Luiz Claudio (Ed.); *Afro reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*, Universidad Nacional de Colombia, CES, Bogotá, 2007, p. 471.

III. La sociedad civil frente a los actores armados: la exigencia a la libre determinación

El territorio colectivo de la comunidad del río Cajambre ha sido el escenario para diversos enfrentamientos entre distintos actores armados. Han sido múltiples las situaciones violentas entre la guerrilla y otros actores armados; sin embargo, la población señala a dos, en términos de su impacto, como las más significativas. La primera situación de violencia armada ocurre el 27 de julio de 2002, un enfrentamiento entre grupos al margen de la ley en la parte baja del corregimiento de El Pital. La segunda ocurre el 7 de agosto del año 2003, en la parte alta del río; la población quedó en medio de un bombardeo efectuado por el ejército de Colombia y unos artefactos, que no detonaron, reposan en el lecho del rio. En ambas ocasiones se presentaron desplazamientos de la población directamente afectada; en el año 2003, las familias desplazadas alcanzan el número de 150.[15]

De ahí que resulte válido preguntarse: ¿cómo el Consejo Comunitario del río Cajambre ha logrado construir capacidad para controlar, es decir, para ejercer como gobierno en el territorio y ser autoridad en medio del conflicto, planteándose una acción diferenciada con respecto a los actores armados y reivindicando autonomía como sociedad civil?

Las comunidades negras del Pacífico colombiano han manifestado una posición de neutralidad frente a los actores armados y han exigido se respete su autonomía, expresando su prioridad en la defensa de su territorio y de la vida, planteando su decisión de permanecer en sus territorios ancestrales. Para la comunidad de Cajambre esta opción se presenta con firmeza como una respuesta colectiva en el contexto de la guerra que se libra en su territorio, argumentando que ellos nunca decidieron participar en ella y que fueron los actores armados quienes se las impusieron.

La guerrilla aparece en el territorio del río Cajambre en el año 1997; para esta fecha ya se conocía que estaban en territorios cercanos. La guerrilla explica su arribo en la zona, argumentando la necesidad de intervenir en la solución de problemas de delincuencia y violación que se estaban presentando en la comunidad. No obstante, el Consejo Comunitario, recuerda que uno de los pobladores de la cuenca, les expresó con firmeza: "nosotros hemos vivido así, si hay problemas nosotros los solucionamos, pero no queremos que otros

[15] Entrevista No. 5, abril 3 de 2008, Buenaventura.

lo vengan a solucionar".[16] Este testimonio sugiere que de manera bastante temprana el Consejo Comunitario plantea su posición de rechazo con respecto a la interferencia de la guerrilla en el territorio colectivo. Más aún, el Consejo Comunitario reivindicó su autonomía frente a este actor armado: "nosotros nos reunimos con ellos, les decíamos que éramos autónomos y eso lo respetaron, no se metieron con el Consejo para nada".[17]

La firme oposición frente a la intromisión de la guerrilla también aparece con respecto a la presencia de los "paisas" en su territorio, a quienes asocian con los "paras" y con la coca. Lo anterior queda reseñado en el siguiente testimonio:

> […] cuando recién iniciaron se hizo una reunión donde se dijo que habían entrado los paras, porque en el Cajambre todos éramos negros, paisas no habían, entonces cuando nos dicen que estaban unos paisas y querían sembrar, entonces acá no íbamos a aceptar eso y se hace una reunión con ellos y ellos tuvieron que salir.[18]

Los enfrentamientos armados entre guerrilla y paramilitares ocurridos en el año 2002 en la cuenca del río Cajambre hacen parte de la intensificación del conflicto armado en la zona del Pacífico. En fechas muy próximas se habían presentado enfrentamientos y masacres de la población en la cuenca del río Naya y del río Yurumanguí, situaciones que habían alertado a la población, y habían hecho necesario el establecimiento de un sistema de coordinación entre la población, que definió una estrategia de desplazamientos internos en la zona para no abandonar el territorio y facilitar la implementación de estrategias de retorno, lo más pronto posible.

Los pobladores de Cajambre consideran que el desplazamiento es una política que se ha trazado en el país como un negocio de los actores que provocan el desplazamiento con el fin de usurpar sus territorios. Así, en el año 2004, el desplazamiento forzado, generado por la intensificación del conflicto armado en el departamento del Valle del Cauca, tuvo como consecuencia la concentración de 24.664 personas en esta situación, en el casco urbano del municipio de Buenaventura.[19]

---

[16] Entrevista No. 3, Buenaventura, abril 2 de 2008.

[17] *Ibíd.*

[18] *Ibíd.*

[19] Oficina de gestión de paz y convivencia. Gobernación del Valle del Cauca, "Diagnóstico de la población en situación de desplazamiento", presentada en Buenaventura, Cali, febrero de 2004.

Para los habitantes de Cajambre el desplazamiento es una estrategia de "destierro", y ellos, a pesar del riesgo que implica, han optado por quedarse, por permanecer en el territorio. Esta decisión de negarse a padecer la suerte del desplazado, es tomada porque:

> Cuando a uno lo sacan de la tierra natal donde uno vive, queda uno a la deriva, aguantar hambre, a pasar mala noche, a aguantar frío, yo a mi tierra natal la llevo en las venas, allí muero. El gobierno nacional que nos respete las tierras, que no nos haga salir de las tierras, a qué lo sacan a uno de sus tierras, esas tierras nos pertenecen.
> Frente al desplazamiento: Hay que aguantar, porque cuando uno pierde la tierra, pierde la vida.[20]

Más allá del conflicto armado, esta comunidad tiene un fuerte vínculo con sus tradiciones culturales y se presenta con un alto nivel de cohesión social. Este capital social y simbólico se pone en juego en el contraste entre la vida en el "territorio propio" y la alternativa de vida en la ciudad, tal como aparece en el siguiente testimonio:

> Yo digo que la idea no es desplazarse rumbo a la ciudad porque creemos —y lo hemos analizado— que no es la solución, el que se desplaza hasta el momento el gobierno no le ha dado tierra y yo considero que una persona que haya vivido más de 30 ó 40 años en un lugar, tiene asegurada ahí sus matas, su pancoger y venirse a encerrar en cuatro paredes y únicamente vivir del comprar, es duro. […] Es difícil adaptarse a recibir limosnas. La idea es que la gente pueda resistir y pueda continuar en su territorio. […] Creemos que el gobierno debería garantizarnos que podemos quedarnos en el territorio, la situación no estaría como está en este momento. No entendemos por qué tenemos que vivir en medio de tanta miseria, tanta gente en la ciudad, hacen esos censos y uno sabe que eso no es real, si a mí me toca, yo no me meto de desplazado, porque a mí no me suena esa palabra, yo no estaría en condiciones de registrarme como desplazado, porque cuando uno se desplaza es una persona sin derecho a nada y va a la deriva. Un desplazado, es la persona que en realidad se salvó de la muerte y dejó todo, ese es el negocio del desplazamiento, para quitarnos nuestro territorio.[21]

[20] Entrevista No. 5, Buenaventura, abril 2 de 2008.
[21] Entrevista No. 2, Buenaventura, abril 2 de 2008.

La visión compartida frente a la historia social y el territorio de las comunidades negras del Pacífico colombiano constituye un patrimonio colectivo. La comunidad del río Cajambre recrea este capital social en medio del conflicto y, de manera permanente, lo resignifican para fortalecer el proceso organizativo que han desarrollado en las dos últimas décadas. El Consejo Comunitario ha definido, como uno de sus esfuerzos centrales, articular a las actuales generaciones de jóvenes cajambreños para que se apropien y lideren en el mediano plazo el proceso adelantado. La firmeza de sus argumentos se acompaña de la memoria y de los recuerdos que fundamenta su arraigo territorial, como lo ilustra el siguiente testimonio:

> […] Uno se queda acá porque digo: acá nací y aquí muero, es decir, me sacan a pedacitos, y actualmente estamos reclamando nuestro derecho a cuidar este pedacito, porque el papá de uno le fue enseñando la dinámica de la organización, de cómo se ha venido haciendo el trabajo, de cómo llegar a esta unión, con las ideas de nuestros padres y el reconocimiento de nuestra historia. Siempre nos dieron esa voz de aliento, para que estuviéramos trabajando mancomunadamente y lucháramos por esta visión, para pelear por lo poquito que Dios nos dio, para cuidar de esto.[22]

IV. La gestión social del territorio: educar para la paz

La gestión social del territorio colectivo constituye una estrategia impulsada por el Consejo Comunitario del río Cajambre como alternativa para construir condiciones dignas de vida para sus pobladores, y así ofrecer garantías que permitan que la población permanezca en el territorio. Más importante aún, la gestión social del territorio se ha constituido en una práctica que ha permitido educar para la convivencia y enfrentar el conflicto.

En el proceso de las comunidades negras del Pacífico colombiano aparece con mucha fuerza la presencia institucional de la Iglesia a través de la Pastoral Social para comunidades negras. En la memoria de los pobladores aparece la figura del padre Gilberto Torres, oriundo de la zona y primer sacerdote negro, recordado por ser un símbolo de luz y esperanza, de valentía y compromiso, constituyendo un referente muy importante en el camino trazado por la comunidad.

[22] *Ibíd.*

También la figura del padre Joaquín Mallorga: porque les enseñó la importancia de apropiarse del territorio e impulsó a la comunidad para que participará de la formulación de la Ley 70 de 1993.[23]

De otro lado, la Fundación Suiza para la Cooperación y el Desarrollo —Swissaid— asesoró el proceso social adelantado por las comunidades negras del río Cajambre durante doce años seguidos, a partir del año 1993. Esta asesoría no sólo representó disponer de recursos económicos de cooperación sino que, en la práctica, posibilitó desarrollar una escuela de formación de líderes en la comunidad. Además, favoreció la continuidad del proceso organizativo y el fortalecimiento de la autonomía en las decisiones por parte de los pobladores de la cuenca del río Cajambre, en la definición de su destino. De hecho, la autonomía entendida como "el derecho a tomar nuestras propias decisiones y dirigir el rumbo del Consejo Comunitario según las aspiraciones e intereses de la comunidad",[24] aparece como el primer principio del Consejo Comunitario del río Cajambre.

A través de las experiencias de acompañamiento institucional se forjaron visiones compartidas, se aprendieron formas de trabajo en equipo y vínculos sociales comunitarios, se fortalecieron las identidades sociales y culturales, se establecieron redes de apoyo institucional con otros procesos sociales. Así, se pueda afirmar que el proceso social adelantado por la comunidad de Cajambre ha permitido establecer una capacidad de gestión con perspectiva social y política, en la que ha primado su proyecto cultural, su reivindicación étnica y la perspectiva de defender su derecho a la autonomía como pueblo con un proyecto social propio.

Tal vez, esta capacidad de resistencia y de lucha por un territorio propio ya está presente en su itinerario como palenqueros en exilio, cuando, huyendo de su condición de esclavos, escaparon y se refugiaron en la selva del Pacífico. Esta capacidad de resistencia reaparece, a inicios de la década del noventa, en la exigencia al Estado para que se les reconozca como pueblo, con identidad cultural. Y con su esfuerzo lograron que se incorporara en la Constitución de 1991. Podríamos afirmar que esta actitud de resistencia también está presente en la exigencia a los actores armados para que respeten su posición de neu-

[23] Grupo focal con líderes del Consejo Comunitario, abril 2 de 2008, Buenaventura.

[24] Consejo Comunitario del río Cajambre; "Principios del Consejo Comunitario del río Cajambre, memoria de la asamblea de constitución", Corregimiento de Silva, noviembre de 1997. Videograbación.

tralidad respecto del conflicto armado en el país, ya que ellos anteponen su derecho a no participar de una guerra impuesta y colocan como prioridad su opción de vivir bajo sus costumbres y tradiciones.

En esta perspectiva, el Consejo Comunitario adelanta proyectos desde tres ámbitos estratégicos en función de favorecer su permanencia como comunidad, ejerciendo control sobre el territorio y mejorando sus condiciones de vida. Los programas en ejecución están fundados en la obligación que tiene el Consejo Comunitario de ser gobierno local y en el ejercicio de sus atribuciones como autoridad territorial. A continuación presentamos el enfoque y rasgos sobresalientes de algunos de los programas adelantados por el Consejo Comunitario en los últimos años. Tal como está estipulado en la misión del Consejo Comunitario:

> El Consejo Comunitario propende por la mejora continuada de las condiciones de bienestar de las comunidades del río Cajambre, entendido como el fortalecimiento del gobierno propio, la conservación de los recursos naturales, el desarrollo de sistemas sostenibles de producción, el mejoramiento del bienestar social y recuperación de la cultura, mediante la acción participativa, la generación de espacios de aprendizaje, afianzamiento de la identidad, la articulación a procesos regionales y la participación en espacios institucionalizados de toma de decisiones.[25]

1. Conocimiento y aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales

El pueblo cajambreño se ha propuesto el desarrollo de acciones concretas que garanticen la permanencia de la gente en el río, mediante alternativas productivas a partir del manejo sostenible del territorio, la biodiversidad y los recursos naturales. A partir de la conformación del Consejo Comunitario, y fundado en la normatividad de la Ley 70, la formulación de un Plan de Manejo Territorial se plantea como una de las estrategias más importantes para que el ejercicio de la autoridad local tuviera eficacia en este sentido; es decir, pudiera ejercer un control real sobre el territorio colectivo.

Así, desde el año 1999, el Consejo Comunitario define la necesidad de elaborar el Plan de Manejo Territorial como "estrategia para el empoderamiento organizativo y territorial, proceso que se inicio con la formulación de sus

[25] Consejo Comunitario del río Cajambre; Plan de Manejo Territorial, Buenaventura, 2006, p. 15.

lineamientos, ejes estructurales y contenido".[26] En el año 2000, la Fundación Suiza de Cooperación y el Desarrollo —SWISSAID— y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en convenio con La Fundación World Wild Foundation —WWF— Colombia, apoyaron la elaboración de los Planes de Manejo en el pacífico vallecaucano.

La formulación del Plan de Manejo Territorial —PMT— constituye un ejercicio de aprendizaje y afirmación muy importante en la vida de la comunidad negra del río Cajambre. El pleno sentido de este trabajo queda sugerido en la siguiente argumentación sobre su importancia:

> Los miembros del Consejo Comunitario de la comunidad negra del río Cajambre queremos a través del Plan de Manejo Territorial reafirmar nuestros derechos inalienables e irrefutables, como la libertad, la vida, a la organización, la propiedad soberana sobre la tierra y los recursos, la neutralidad frente al conflicto armado y el deseo de superación y desarrollo social. Igualmente, queremos ratificar el compromiso para garantizar la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas, los recursos naturales, los bosques y toda la biodiversidad que encierran, porque son la base que da esencia a la vida comunitaria, desde la que aportaremos para que el Territorio se conserve y sirva de sustento a la población local, al igual que para brindar nuevas, mejores y crecientes oportunidades a las generaciones del río Cajambre.
>
> Adicionalmente, el Plan de Manejo Territorial trata de reflejar y sentar nuestra posición con relación a los temas políticos más controvertidos por sus implicaciones sobre las comunidades y sus derechos. Ante todo buscamos proteger la dignidad de nuestro pueblo frente a la soberanía territorial, en momentos en que diversos intereses amenazan con desconocer la forma como hemos preservado los ecosistemas y los recursos naturales, en una de las zonas más singulares del planeta como lo es el Pacífico Colombiano. Aquí hemos legitimado el aporte de nuestra cultura en su uso, conservación y manejo sostenible, donde el mundo se ha privilegiado más que nosotros mismos.
>
> En ese sentido, consideramos que el Plan de Manejo Territorial es un elemento de desarrollo y aplicación de nuestros derechos frente al Territorio Colectivo, legítimos de hecho y legales por la ley, que sienta las bases para enfrentar el futuro de nuestros bienes; la cuenca y sus recursos naturales, planeando lo que haremos sobre y con ellos, regulando las acciones humanas y defendiéndolo ante aquellos actores (el gobierno, entidades, empresas e in-

[26] Consejo Comunitario del río Cajambre; Plan de Manejo Territorial, Buenaventura, 2006.

> dustriales) que de una u otra forma quieren desestabilizar las organizaciones sociales en detrimento de su autonomía, soberanía y autoridad valiéndose de la creación de políticas, del capital y la guerra. Con el Plan queremos decirles que el Territorio del Consejo Comunitario del río Cajambre es y será siempre para el beneficio de sus comunidades.[27]

El Plan de Manejo Territorial establece un importante diagnóstico en las cuatro áreas abordadas: fortalecimiento organizativo, ordenamiento territorial, seguridad alimentaria y gestión e investigación. Éste se configura en un amplio balance de los recursos y sus usos, de las tradiciones y costumbres articuladas con el conocimiento.

La formulación del Plan de Manejo se adelantó con una amplia participación de la población del río Cajambre, se favoreció la realización de un amplio debate, realizando múltiples asambleas generales como máxima instancia de decisión del Consejo Comunitario, garantizando consenso en las decisiones tomadas. Por tanto, la formulación del PMT constituye, en sí mismo, una escuela de formación y concertación comunitaria con respecto a las posibilidades y límites del aprovechamiento de los recursos naturales, de las fragilidades del ecosistema y de conservación para la vida misma en el territorio.

Para la comunidad de Cajambre, el pacto social frente al uso y manejo de los recursos es el ejercicio colectivo para garantizar la sustentabilidad del territorio, fundado en los acuerdos producto de los diagnósticos y alternativas a cada una de las situaciones identificadas con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos y las necesidades de los diferentes grupos poblacionales: mujeres piangüeras, pescadores artesanales, artesanos de la madera, agricultores, productores de especies menores, entre otros. La importancia que adquiere este pacto radica en que:

> El conocimiento sobre el uso y manejo de la naturaleza comprende igualmente métodos y técnicas propias de aprovechamiento, que por tradición se han mantenido como estrategias de manejo y conservación de la biodiversidad. Con excepción de pocas prácticas culturales, estas han permitido que los recursos naturales y su base, los bosques, se conserven para el beneficio de las comunidades actuales y futuras. En ese sentido, la conservación de los recursos del río Cajambre es una cuestión de supervivencia y ahorro ambiental.[28]

[27] Consejo Comunitario del río Cajambre; Plan de Manejo Territorial, Buenaventura, 2006.
[28] Consejo Comunitario del río Cajambre; Plan de Manejo Territorial, Buenaventura, 2006.

Uno de los resultados más importantes del PMT lo constituye el reglamento interno sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de fauna, flora, hidro-biológicos y las actividades económicas y productivas asociadas dentro del territorio legalmente constituido de la comunidad negra del río Cajambre. La aprobación se realizó en una Asamblea General del Consejo Comunitario, con amplia participación de toda la comunidad, efectuada el 30 de septiembre de 2006. En el enunciado de la norma general, artículo 1° del Reglamento, se expresa el carácter legal y alcance de este documento, para ejercicio de la autoridad local, como expresión de un acuerdo social:

> Las comunidades integrantes del consejo comunitario tienen el derecho pleno a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales pertenecientes al territorio de propiedad colectiva en la cuenca del río Cajambre, éstos, están protegidos no solo con la presencia de las comunidades negras asentadas en el territorio sino por las formas de gobierno, sus usos, costumbres ancestrales, los derechos sociales y los mandatos que se expidan sobre ellos; los cuales son amparados por la legislación internacional, por la constitución nacional y la ratificados por los desarrollos legislativos en materia de bosques y comunidades negras.[29]

A partir de la formulación del PMT y el reglamento de usos de los recursos naturales se han impulsado procesos organizativos por actividades productivas. Así, en el año 2006, se conforma la Asociación de mujeres piangüeras, para ejercer un control colectivo de lo aprobado de manera colectiva para la cosecha y comercialización de la piangüa. De esta forma se garantiza el cumplimiento de los períodos de veda y se favorecen los vínculos comunitarios y la solidaridad gremial entre las mujeres que tradicionalmente han explotado este recurso de los manglares en la región. Lo anterior lo afirma el testimonio de una de las mujeres integrantes de la asociación: "cuando se conforma el grupo de mujeres piangueras nos sirvió porque así hemos buscado el medio de trabajo conforme al Plan de Manejo, respetando el descanso del manglar y de las vedas locales para así conservar nuestro recurso".[30]

[29] *Ibíd.*

[30] Entrevista a mujer integrante de la Asociación de mujeres piangueras, abril 3 de 2008, Buenaventura.

2. Estrategia de difusión y conservación de las tradiciones culturales con atención a jóvenes, niños y niñas en los ámbitos escolares y productivos

De otro lado, el Consejo Comunitario ha adelantado una serie de proyectos centrados en la atención a la población juvenil, identificada como altamente vulnerable por diversos factores. Entre ellos el más preocupante es la potencial vinculación de los jóvenes con los actores armados y las actividades delincuenciales. Con el establecimiento de proyectos centrados en ofrecer alternativas para la población juvenil, se busca incentivar la permanencia de los (y las) jóvenes en el territorio, ofreciendo mejores condiciones de vida para ellos y ellas, involucrándolos en las prácticas productivas y fomentando su participación en los procesos organizativos de la comunidad.

En esta estrategia se han articulado los docentes de las escuelas en la cuenca del río Cajambre. Este es un aspecto fundamental y novedoso ya que se busca aprovechar los recursos pedagógicos que se tiene en la región y colocarlos en función de los procesos sociales impulsados por el Consejo Comunitario, estableciendo así una dinámica de gobernabilidad en este ámbito estratégico de la formación. La concepción del programa se expresa en el siguiente fragmento de un documento institucional del Consejo Comunitario:

> La educación para la paz en las escuelas del territorio colectivo de la comunidad negra del río Cajambre, tiene entre sus funciones la construcción de un ideal educativo en los miembros de la comunidad, es decir, lo que este debe ser, tanto desde el punto de vista intelectual como moral. Con esta práctica pedagógica lo que pretendemos es trasformar la realidad que se vive en estos momentos en nuestras comunidades. […] Por educación para la paz entendemos un proceso social que involucra a toda la población puesto que permite a los participantes se acomoden a las buenas prácticas y valores predominantes en la comunidad.[31]

A través de este programa se han ido estableciendo compromisos del Consejo Comunitario con los (y las) docentes en la construcción de un perfil del docente que desarrolla una labor educativa articulada de manera central con el trabajo organizativo y comprometido con la perspectiva étnico-territorial

[31] Consejo comunitario de la comunidad del río Cajambre, *La cultura de paz en las escuelas del territorio colectivo de la comunidad negra del río Cajambre,* Río Cajambre, 2007.

adelantada por las comunidades negras para la defensa del territorio colectivo. En esta perspectiva: "un educador debe conocer y poseer la cultura del medio donde desarrolla sus funciones como docente, conocimiento que debe compartir con la comunidad, no sólo desde el conocimiento académico sino desde la parte cultural".[32]

De manera complementaria, se ha adelantado el proceso organizativo de los jóvenes, que se comenzó a gestar en el año 2003, impulsado por los líderes del Consejo Comunitario que alentaron a sus hijos e hijas a conformar una organización juvenil para fortalecer la defensa de sus intereses como comunidad juvenil negra en la región. La conformación del grupo juvenil ha sido muy importante porque ha activado la dinámica social, política y cultural en el conjunto de población, en toda la cuenca del río Cajambre.

V. Conclusiones

Claves que arroja esta experiencia para el aprendizaje de buenas prácticas en el contexto del conflicto armado

En primera instancia es importante resaltar, en este caso, la importancia que tienen los procesos socio-históricos en términos de su acumulado, para comprender las dinámicas sociales actuales. Es decir, el peso de la historia social en la actuación de los agentes, en su capacidad de respuesta a los eventos que enfrentan. El proceso de resistencia liderado por los Consejos Comunitarios frente a la presencia de los actores armados en sus territorios y, en particular, el proceso analizado de la comunidad del río Cajambre, no podría entenderse sin colocar de presente el movimiento negro en Colombia como proceso social emergente, en el que se pone de presente una re-invención de lo étnico como reivindicación política, recreando diversas estrategias de resistencia por parte de estas comunidades que han exigido su derecho a poseer un territorio colectivo que les es propio.

La reivindicación étnica por parte de las comunidades negras, persigue un reconocimiento que les otorgue un estatus diferente, que les ofrezca condiciones de ciudadanía y visibilidad. El desconocimiento de una ciudadanía para la población

[32] *Ibíd.*

negra en Colombia y el no reconocimiento del valor cultural de esta población, ha fundamentado la dominación y el lugar subordinado que han ocupado en la estructura social colombiana. Así, la forma como esta subordinación se ha presentado en el contexto regional, el proceso socio-histórico en juego, colocan de presente el peso de la historia social, en la comprensión de los procesos de cambio y continuidad que se adelantan en la actualidad.

Por ello, la resistencia a la injerencia de los grupos armados en los territorios colectivos, tiene sentido y legitimidad en tanto se trata de defender aquello que, por primera vez, sienten que los ha dignificado en su ciudadanía y lograron mediante su unidad como pueblo. Este capital simbólico, adquirido a través de su lucha, no están dispuestos a dejárselo arrebatar, no lo quieren perder. Incluso, en esta perspectiva adquiere mayor importancia el hecho de que se trate de un proceso con avances y retrocesos, en el que la cohesión social permanece y la legitimidad interna de las organizaciones sociales no decae.

En este caso, el proceso social analizado contempla una fuerte identidad territorial de los pobladores, construida durante siglos de ocupación del territorio en cuestión. Aquí cobran importancia las lógicas culturales asociadas con formas de producción "propias", que los diferencian de las formas estrictamente capitalistas que predominan en otros ámbitos. Este uso diferenciado del territorio y las formas de vida correlacionadas establecen un aspecto estratégico para la objeción cultural puesta en juego como reivindicación cultural étnica, y que fundamenta la exigencia y el derecho de las comunidades negras al territorio colectivo. Así, la defensa de este territorio es contra todo aquello que intente cambiar las formas de vida conservadas y en las que se pone en juego su identidad como pueblo.

Otro aspecto de singular importancia está relacionado con las posibilidades que ofrecen los avances normativos en el proceso de empoderamiento de los actores sociales. En este caso, las comunidades han logrado un conjunto de normatividades, derivadas de la Constitución Política de 1991, en su artículo transitorio 55, pasando por la Ley 70 de 1993, e incluyendo los Decretos Reglamentarios y los Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos por el Estado colombiano.

El conocimiento y aprovechamiento de este conjunto de avances jurídicos, hacen de ellos una herramienta para su objetivo de defender su derecho a permanecer en el territorio colectivo, en condiciones dignas, y con autonomía y control por parte de sus formas de gobierno legítimas. En particular, resulta interesante destacar las estrategias y esfuerzos del Consejo Comunitario en cuanto favorecen

el desarrollo del más amplio debate, implementando estrategias para beneficiar la participación de la comunidad para el conocimiento de estas normatividades y de las posibilidades para la defensa de los derechos de las comunidades negras.

Estrechamente relacionado con el carácter participativo del proceso social de las comunidades negras, está el tipo de liderazgo ejercido en el Consejo Comunitario del río Cajambre. Es un liderazgo de carácter colectivo, todas las personas de la comunidad tienen igual derecho de participar del proceso social, todas las personas en su condición de ser negros, afrodescendientes, están en igualdad de condiciones para ejercer roles y participar. Este liderazgo colectivo fortalece el proceso porque es un asunto de todos y todas, porque todos se sienten convocados y, todos y todas, están dispuestos a aportar a un proceso que sienten como propio.

Este liderazgo también se identifica por su carácter conciliador, siempre abierto al diálogo, dispuesto a llegar a consensos, a establecer pautas y normas mediadoras. Estos rasgos han generado un clima de credibilidad y confianza, de tal forma que se ha ganado en legitimidad y se ha construido una autoridad que es reconocida y aceptada, logrando el objetivo último perseguido por el proceso:

> Uno ha aprendido que con buenas palabras y sin peleas puede hacerse valer y, así hemos logrado permanecer en el territorio, esa es la misión del consejo: que todos sigamos viviendo en el territorio.[33]

La eficacia simbólica del proceso de las comunidades negras está fundamentado en el discurso que reivindica sus derechos; sin embargo, este proceso social ha logrado no sólo avances de tipo normativo, también ha logrado avanzar en logros de tipo material, mediante una gestión social del territorio, en el ordenamiento de las actividades productivas, garantizando e implementando programas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en armonía con sus usos y costumbres, demostrando, de esta forma, su capacidad de gestionar social y culturalmente en coherencia con su identidad como pueblo.

La pertinencia y sostenibilidad en los programas sociales y productivos liderados por el Consejo Comunitario están fundamentados en la orientación y sustentación que otorga disponer del Plan de Manejo Territorial —PMT—, en el cual se establece una visión estratégica construida mediante la concertación y el consenso, a través de un proceso de diagnóstico participativo que la

[33] Entrevista No. 10, Buenaventura, abril 3 de 2008.

comunidad considera legítimo y está dispuesta a hacer respetar –y a respetar. Este proceso es, sin lugar a dudas, una fortaleza indiscutible del proceso social adelantado, de la firmeza de las posiciones, de la certeza con respecto a los límites y de las posibilidades productivas que tienen como comunidad.

Bibliografía

- Archivo del Consejo Comunitario del río Cajambre:
- Video grabación Asamblea constitutiva del Consejo Comunitario de río Cajambre, noviembre 22 y 23 de 1997.
- Informes de proyectos ejecutados:
  - Memorias de asambleas comunitarias
  - Plan de Manejo Territorial —PMT— Consejo Comunitario del río Cajambre, Buenaventura, 2006.
  - Nuestras propias normas. Los reglamentos de acceso, uso, manejo y aprovechamiento sostenible del territorio y los recursos naturales. Consejo Comunitario de la comunidad negra del río Cajambre, CVC, Swissaid. s.f.

Entrevistas

- 8 entrevistas a pobladores de la cuenca del río Cajambre
- Grupo focal con líderes del Consejo Comunitario del río Cajambre
- 2 entrevistas con líderes del Proceso de Comunidades Negras del Pacífico colombiano
- 1 entrevista con una líder de la Asociación de desplazados de las comunidades negras del Pacífico colombiano

Bibliografía citada:

ALMARIO García, Óscar, "Reparaciones contemporáneas: de la memoria de la esclavitud al cuestionamiento de la exclusión social y el racismo", en: Mosquera, Claudia y Barcelos, Luiz Claudio (Ed.); *Afro reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*, Universidad Nacional de Colombia, CES, Bogotá, 2007, pp. 183-210.

ARBOLEDA Quiñónez, Santiago, "Conocimientos ancestrales amenazados y destierro prorrogado: la encrucijada de los afrocolombianos", en: Mosquera, Claudia y Barcelos, Luiz Claudio (Ed.); *Afro reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*, Universidad Nacional de Colombia, CES, Bogotá, 2007, pp. 467-486.

BERMÚDEZ, Rosa Emilia, "Megaproyectos de infraestructura y agrocombustibles en el pacífico colombiano", en: Censat agua viva-amigos de la

tierra Colombia y PCN; *Agrocombustibles. Llenando tanques y vaciando territorios*, Bogotá, 2008, pp. 167-178.

Consejo Comunitario de la Comunidad del río Cajambre, *La cultura de paz en las escuelas del territorio colectivo de la comunidad negra del río Cajambre,* río Cajambre, 2007.

MOSQUERA, Claudia y Barcelos, Luiz Claudio (Ed.), *Afro reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*, Universidad Nacional de Colombia, CES, Bogotá, 2007.

Oficina de gestión de paz y convivencia. Gobernación del Valle del Cauca, *Diagnóstico de la población en situación de desplazamiento presentada en Buenaventura*, Cali, febrero de 2004.

OSLENDER, Ulrich, "Des-territorialización y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: la construcción de geografías de terror". Ponencia presentada en el Seminario Internacional "(Des) Territorialidades y (no) lugares, INER, Medellín, 4-6 noviembre, 2004.

República de Colombia, Ley 70 de 1993, (en línea), consultado en junio 4 de 2008. Disponible en: <http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDTS_plan_integral_afro/LEY_70_1993_AFRO%5B1%5D.pdf>

Capítulo 2

Políticas espaciales y comunidades negras en el Pacífico colombiano[1]

Enrique Jaramillo Buenaventura

Introducción

Durante los primeros meses del año 2003 gran parte de la población que habita la cuenca baja del río Calima, en los límites entre el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Chocó, se vio forzada a desplazarse hacia distintos lugares de la región, especialmente hacia el casco urbano de

[1] Este estudio, realizado en el Pacífico colombiano entre enero y junio de 2008, es producto de la implementación de recursos propios de la investigación etnográfica, del análisis y revisión de fuentes documentales, el trabajo con grupos focales y representantes de la comunidad, y entrevistas semiestructuradas y en profundidad a actores directos e indirectos del proceso de retorno del Bajo Calima. Deseo dar gracias a Maritza Valencia Murcia por su colaboración en el trabajo de campo y en las etapas previas de redacción de este documento. Asimismo, agradezco a la población del Bajo Calima por su hospitalidad y coraje para reconstruir los momentos más decisivos del proceso y especialmente a Julio Cesar Gonzáles del consejo comunitario quién nos brindo la posibilidad de contrastar diferentes experiencias. En la elaboración de este artículo también han sido determinantes los comentarios y discusiones sostenidas con Luis Fernando Barón, Rosa Bermúdez, Ana Lucia Paz y Vladimir Rouvisnki. Deseo agradecer también a John Comaroff por sus valiosos comentarios a una versión resumida de este artículo presentado en el 13 Congreso de Antropología en Colombia. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad Icesi y a la financiación del PNUD, área de Paz y Reconciliación, Banco de Buenas Prácticas para superar el conflicto. La selección del caso en cuestión está precedida por un proceso de identificación colectiva adelantado por el PNUD en el que, junto con actores locales, se seleccionaron 300 iniciativas de cinco regiones geográficas del país: los departamentos de Cauca, Valle, Antioquia, Santander y en la Región de Los Montes de María.

Buenaventura, por los instigamientos y las acciones de guerra de grupos armados presentes en la zona.

Desde el momento mismo de su desplazamiento, la población, en su mayoría afrocolombiana, emprendió a través de su Consejo Comunitario acciones destinadas a la construcción de un proceso de retorno al territorio que culminó, en septiembre de 2004, con el regreso efectivo de la mayoría de los habitantes. A partir de ese momento se gestaron diferentes modos de agencia e intervención en la zona, todos articulados en mayor o menor medida al objetivo de generar condiciones e impulsar acciones que fortalecieran el proceso de retorno y garantizaran el mantenimiento de la población en su territorio. En cualquier caso, es evidente que todo el proceso constituyó en sí mismo una abrupta trasformación de los mundos ecológicos, económicos y culturales de las poblaciones del Bajo Calima.

Este trabajo tiene, en principio, un interés expositivo que pretende narrar la cadena de eventos, contextos y formas en las que se agenció el proceso de retorno y que hacen viable, o no, hablar de un fortalecimiento de la comunidad ante el conflicto. No obstante, en conjunto, la reconstrucción de este episodio debe permitir también identificar un contexto regional que ponga en relación las metodologías y prácticas emprendidas junto con las motivaciones y factores que las posibilitaron y determinaron. Esto significa rastrear el impacto del conflicto en el proceso organizativo de la comunidad negra de Bajo Calima, pero, también, la construcción del territorio como espacio de resistencia.

En todo caso, debe hacerse en este momento una advertencia importante. La forma de presentar el proceso, a partir de la construcción esquemática de eventos y secuencias, no debe conducir a pensar que se trata de unidades autónomas y reacomodables. Por el contrario, constituyen un todo inevitablemente interrelacionado. Tal como sostiene Oslender, el hecho mismo de hablar sólo en un momento determinado de 'desplazamiento forzado' no "expresa adecuadamente la experiencia de los pobladores rurales que han vivido en un contexto de amenazas, masacres y terror en sus tierras, mucho antes de que se volvieran 'desplazados' " (Oslender, 2004: 6). Lastimosamente debe entenderse que al tratar de exponer el proceso no podemos presentar los elementos de forma simultanea e interconectada como de hecho sucedieron. La contingencia y los detalles propios de la vida social tienden a desaparecer en el trabajo de reacomodación de una trama general y coherente. Las dolorosas escenas del conflicto, los desacuerdos, las motivaciones y las diversas estrategias personales, dan paso una estructura sospechosamente clara y aprensible.

Sin ánimo de justificar las limitaciones del presente trabajo, debe anotarse que ésta es una organización arbitraria que aunque fue discutida y negociada en diferentes sesiones de trabajo con grupos de la comunidad, sigue siendo una forma entre otras de relatar los hechos. Estas líneas escritas de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, poco tienen que ver con la red intricada de recuerdos y memorias que la tradición oral expresa. Si tales detalles no aparecen, por lo menos espero que se encuentren en este texto algunas buenas razones por las que sería importante trabajar con ellos.

El trabajo está estructurado en cuatro partes. En la primera se presentan algunos problemas específicos en torno al espacio, el lugar y la diferencia cultural en la antropología. Posteriormente, se introduce el contexto nacional y regional en el que se inscribe el caso, destacando antecedentes históricos, económicos, ecológicos y políticos. La tercera parte narra el episodio en cuestión, recopilando los eventos y actores directamente relacionados con el proceso. Finalmente, se proponen claves para interpretar el proceso y algunas consideraciones finales para el análisis.

I. Cultura y lugares antropológicos

Las formas de actuar y pensar sobre la identidad y la diversidad han estado estrechamente vinculadas con la historia del concepto de 'cultura' acuñado por la antropología. No se trata de que las palabras por sí solas sean capaces construir realidades a su voluntad, ni tampoco que no exista ninguna instancia prediscursiva en nuestros mundos social e históricamente construidos. Por el contrario, se trata más bien de una compleja tensión. Los discursos sobre la cultura emitidos en ciertos campos de poder no sólo constituyen un *juego de verdad* para quiénes habitan en ellos, y son interpelados por ellos, sino que, también, poseen una materialidad que se expresa tanto en las prácticas como en las relaciones en que son disputados, contestados y recreados.

Desde el surgimiento de la disciplina la construcción de la cultura como categoría analítica no sólo le garantizó un campo de estudio específico en la división social del trabajo intelectual, sino que, también, se convirtió rápidamente en símbolo de lucha contra el racismo y diferentes formas de etnocentrismo. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX numerosos autores han insistido en la idea de que la coexistencia y la interdependencia del proyecto antropológico y la invención misma de la diferencia cultural arroja, paradójicamente,

posturas tan comprometedoras como las mismas que pretendía cuestionar. Como lo menciona un conocido historiador de la antropología social británica, basta con estudiar en detalle el caso del *apartheid* en Surafrica para comprender de qué manera el concepto de cultura, tan caro a los antropólogos, puede convertirse, en sí mismo, en la piedra angular de una política de exclusión bajo el pretexto de la preservación de la diversidad étnica (Kuper, 2001).

Por largo tiempo la antropología tendió a representar las culturas como entidades discretas y homogéneas, incluso distantes en tiempo y espacio con respecto al área de influencia de la llamada 'cuna de la civilización'. Este procedimiento epistemológico no sólo le garantizó legitimidad a una disciplina que establecía su objetividad a través de la negación de la coetáneidad de sus sujetos de estudio (Fabian, 1983), sino que, también, correspondió con las limitaciones propias de un canon etnográfico que asumía que el espacio, el lugar y la cultura constituían automáticamente una unidad coherente y localizada (Gupta y Ferguson, 1997).

Diversas perspectivas contemporáneas han allanado el terreno para salir de esta concepción estática y microscópica de la cultura. Las inquietudes sociológicas de la escuela de Manchester, durante los años cincuenta en África Central, constituyeron un paso importante en el reconocimiento de la necesidad de atender a las comunidades no como fenómenos aislados (como sucedió con las imágenes de resguardos e islas remotas), sino como parte de una estructura social mayor que incluía a las autoridades coloniales y la situación política general de los demás grupos de la región (Kuper, 1973).

Durante los años setenta y ochenta, los movimientos por descolonializar la antropología (Hymes, 1974; Asad, 1973) y las influencias de la economía política reintrodujeron no sólo un sentido crítico frente al rol de la disciplina sino, también, un sentido de interconexión global que contribuyó a trascender los limites de la cultura como microcosmos (Nash, 1981; Roseberry, 1988; Wolf, 1982). Este cambio de enfoque, de los estudios convencionales de sociedades aisladas por la idea de un sistema político-económico de gran escala, permitió, además, un nuevo reencuentro con la investigación histórica como parte fundamental de la explicación antropológica.

Recientemente el examen del lugar de enunciación del etnógrafo y las relaciones de poder que su práctica entraña también han aportado a la resolución del problema enfocándose en la deconstrucción de categorías de análisis y en la cons-

titución discursiva de las realidades (Rabinow, 1977; Comaroff y Comaroff, 1992; Clifford, 2003). Aunque, en algunas latitudes estas críticas llevaron a privilegiar la escritura y la representación etnográfica en detrimento de un serio compromiso con las políticas de la cultura (Marcus y Fischer, 1986; Clifford y Marcus, 1986; Clifford, 1988), las aproximaciones post-estructuralistas a la sociedad y la cultura despertaron grandes cuestionamientos y abrieron la puerta a influencias determinantes. Más allá del mencionado repliegue textual de la llamada antropología posmoderna, que condujo a perder de vista la materialidad e historicidad de los fenómenos, el giro post-estructuralista permitió el cuestionamiento de las fuerzas bajo las cuales el 'lugar' y la identidad, al igual que la práctica antropológica misma, eran producidas (Fox, 1991; Gupta y Ferguson, 1997; Escobar, 1993). Esto significaba, entre otras cosas, enfrentar el hecho de que la antropología no sólo era etnografía y trabajo de campo. La preocupación por las estrategias retóricas y la reflexividad no debían descuidar las luchas culturales, ni dar por sentado las nociones sobre las que se sustenta nuestro propio conocimiento.[2]

Por su parte, el contexto de aparición de los estudios culturales forjó un camino distinto para la comprensión de un nuevo concepto de cultura. Mientras que algunos enfoques en ciencias sociales seguían insistiendo en un culturalismo acrítico, las articulaciones propiciadas por los estudios culturales repensaron la cultura a partir de las relaciones de poder que se tejen parejo a los procesos de significación. Para recordar uno de los ejemplos más citados: las novedosas intersecciones entre raza, género y clase de la escuela de Birmingham contribuyeron tanto a marcar un rotundo distanciamiento de la teoría clásica de la identidad, como a cuestionar los límites disciplinarios que las ciencias sociales habían defendido con tanta vehemencia.

En el caso de la antropología colombiana —si se me permite hablar de ella en su conjunto— es posible rastrear desde la década de los setenta, con las discusiones sobre la pertinencia del conocimiento, una creciente conciencia del lugar y las condiciones sociales de producción, al igual que una mirada crítica frente a los modelos y las orientaciones metropolitanas de la disciplina (Arocha y Friedemann, 1984; Barragán, 2001; Collazos, 2007; Pineda, 1999). Como argumenta la antropóloga Myriam Jimeno, mucho antes de la actual preocupación en los países 'desarrollados' por las relaciones de poder entre investigadores e

[2] Para citar un ejemplo relevante para el caso en cuestión la idea de espacio y diferencia social ya no se tomo como algo dado, sino que se reconoció su carácter histórico y social producto de relaciones politico-económicas específicas.

investigados, la antropología en Colombia, y en otros países de Latino América, había incluido casi desde sus inicios una ineludible vocación crítica, propia de la vecindad sociopolítica, con los sujetos de estudio (Jimeno, 2005 y 2007). Este estilo confluye en la década de los noventa en una decidida apuesta por una política de la antropología que examine los presupuestos epistemológicos y teóricos sobre los que se ha sustentado la identidad disciplinaria:

> Frente a la tradición de una 'ciencia de la cultura' que representaba al otro como una entidad discreta, aislada y autocontenida —que en el mejor de los casos se explicaba sólo en sus propios términos—, la antropología contemporánea comenzó a explorar nuevas formas de representación e intervención que cuestionaron abiertamente esta visión escencialista (Restrepo y Uribe, 2000).

La deconstrucción del desarrollo (Escobar, 1996) y el auge de los debates sobre la globalización asestaron el golpe final generando una nueva sensibilidad etnográfica hacía las formas en la que los tradicionales *lugares antropológicos* eran reformulados por los flujos de información, personas y mercancías (Appadurai, 1996), pero a la vez, también, por las restricciones y separaciones dibujadas por nuevos ordenamientos sociales. Las complejas y desiguales interacciones entre lo local y lo global, la aparición de nuevos repertorios para la imaginación y la producción, los cambios en los procesos de identificación y la transformación del Estado-nación en su versión decimonónica, desterritorializaron la cultura y socavaron la seguridad antropológica depositada en la observación de una situación local como única garantía de acceso a un conocimiento cultural profundo.

En esta escala y condiciones la autosuficiencia del método y la posibilidad misma de seguir haciendo etnografía fueron seriamente cuestionadas. Pero antes que proclamar su fin, o pedir por una etnografía decididamente deslocalizada, este trabajo insiste en el valor de la etnografía y su capacidad reflexiva e imaginativa de capturar "la especificidad de la producción del lugar y de la cultura" (Escobar, 2005: 166), pero también en su capacidad de "exponer la naturaleza y los efectos de los procesos sociales, económicos y políticos de gran escala" (Comaroff y Comaroff, 2003). En este sentido, el 'retorno al lugar', que se analiza en este estudio de caso, no es el retorno a un 'lugar de origen' intacto y ancestral, ni mucho menos el de la imaginación de una nueva localidad más allá del lugar mismo —como algunos teóricos de la globalización proponen—, es por el contrario la oportunidad de profundizar un proyecto político, organizativo y cultural

a través de una nueva forma de re-territorialización que no necesariamente asume el espacio como fijo, inmutable y estrictamente geográfico.

> Esto no significa que las anteriores críticas a la noción de cultural o el giro hacía su desterritorialización en un mundo global no sean productivos epistemológicamente, ni analíticamente. Los enfoques interdisciplinarios y el surgimiento de la etnografía multisituada, por mencionar sólo algunos ejemplos, han constituido opciones importantes para responder al reto de rastrear "la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un tiempo-espacio difuso" (Marcus, 2001: 111). El problema, como argumenta Kamala Wisweswaran cuestionando la tesis de Appadurai, es que ladesterritorializaión sea estudiada no para entender las poderosas fuerzas de la opresión desatadas por ella, o de las cuales ella misma es desatada, sino para ilustrar las formas en las que la imaginación opera. ¿Cómo, entonces, se entiende el dolor de los desterritorializados, aquellos constantemente en transito? [...] es difícil discernir en este esquema si los sujetos escogen la desterritorialización, o si por el contrario la desterritorialización escoge sujetos particulares. [...] Desde mi punto de vista la desterritorialización se asocia muy fácilmente con un tipo de trasnacionalismo trascendente usualmente encontrado en varias versiones de cosmopolitanismo. En efecto, el objetivo de Appadurai es avanzar en una doble visión de estudios culturales trasnacionales y lo él denomina "prácticas etnográficas genuinamente cosmopolitas", como consecuencia en el proceso los "nativos" son reinscritos sin mayores cuestionamientos como cosmopolitas (Wisweswaran, 1994: 109-111. La traducción es mía).

Todo indica, que precisamente, cuando las críticas feministas y las teorías sobre movimientos sociales están hablando de la necesidad de "espacializar la resistencia" —para utilizar la expresión del geógrafo Ulrich Oslender— tanto en la materialidad de los cuerpos como del lugar, una parte de la teoría social dominante todavía le da la espalda con un constructivismo descarnado y una desterritorialización despiadada.[3]

En este sentido, el debate expuesto anteriormente no debe interpretarse ni como una negación de la existencia de coordenadas espaciales y temporales, ni tampoco como un exclusivo interés por el impacto del capitalismo y los procesos globales en

[3] Para una discusión más completa sobre la marginalización del lugar en la teoría social véase Escobar, 2001.

otras sociedades —como sucedió en una primera versión de la economía política (Ortner, 1984). Repensar la antropología implica no sólo afrontar los procesos y los flujos transnacionales sino, también, poner en marcha debates y perspectivas que historicen nuestras prácticas; que dimensionen tanto las condiciones de producción en las que trabajan los antropólogos, como las particularidades políticas, económicas y ecológicas en las que se agencian nuevas fronteras y localidades en un mundo global.

En el caso que se expone a continuación la construcción de la identidad y el 'lugar' han sido y son determinantes para entender la reacción frente a los efectos de des-localización que trae consigo la irrupción del desarrollo y el terror del conflicto armado. De acuerdo con Arturo Escobar:

> [...] se sostiene que el desplazamiento forma parte integrante de la modernidad eurocéntrica y de la manifestación que ésta ha revestido después de la Segunda Guerra Mundial en Asia, África y América Latina, es decir: el desarrollo. Tanto la modernidad como el desarrollo son proyectos espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de territorios y pueblos, así como su transformación ecológica y cultural en consonancia con un orden racional logocéntrico (Escobar, 2005:48).

Como se argumenta aquí, de nuevo la forma en la que entra la experiencia de la modernidad en América Latina es por la vía de la conquista. Y en este caso, sobre la cuenca baja del río Calima, a través del desplazamiento forzado.

II. El lugar entre lo local y lo global

Poblamiento de la cuenca baja del río Calima

La cuenca baja del río Calima hace parte de la región pacífica colombiana, una franja entre el océano Pacífico y la cordillera Occidental, que se extiende desde la zona fronteriza con Panamá hasta los límites con el Ecuador, en el sur. La historia del poblamiento de esta zona registra asentamientos tempranos de grupos indígenas waunana ubicados en la parte baja del río San Juan. Hasta fines del siglo XVII estas poblaciones resistieron la colonización haciendo prácticamente "[...] imposible todo establecimiento minero" (Uriel, 1994: 231). Esta situación cambiará a partir del siglo XVIII con el incremento de centros para la explotación aurífera. Las consecuencias son una rápida disminución de la población indígena y la consecuente incorporación de mano de obra esclava negra proveniente de

África: primordialmente de las costas de Guinea, Congo, Sudan y Angola. Según señala Beatriz Castro (1994: 145), tales centros mineros fueron convirtiéndose, consuetudinariamente, en "centros de población esclava", siendo importantes tres de estos: la hoya de los ríos San Juan y Atrato; el Distrito de Barbacoas; y las partes altas y medias de los ríos entre Buenaventura y Guapi.

Dentro de ese primer "centro de población", señalado en la hoya del río San Juan, se puede ubicar la conformación del área de Bajo Calima que, específicamente se ubica en la parte sur de la región del río San Juan y del río Calima, a una distancia aproximada de 40 km del Puerto Marítimo de Buenaventura (Valle del Cauca). Se encuentra clasificada como un bosque húmedo tropical, con una temperatura media anual de 27.3 °C y ha sido representada, recientemente, por los saberes técno-científicos como una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo.

A partir de los años cuarenta, con el posicionamiento del puerto de Buenaventura, que para mediados de esta década ya "exporta e importa la misma cantidad de mercancías que los puertos de la costa norte y más de la mitad del café del país" (Rodríguez y Sánchez, 2002: 45), es posible identificar un consistente proceso de poblamiento afrocolombiano que se consolida con la fundación del poblado La Colonia en Bajo Calima, el 16 de julio de 1940.

Su nombre obedece, principalmente, a una estrategia de colonización impulsada por el gobierno colombiano, y apoyada por la Iglesia, con la que se promueve el desarrollo de colonias agrícolas y plantacionales, al igual que la construcción de puertos y poblados ribereños (Rodríguez y Sánchez, 2002). Para el caso de Bajo Calima se trata fundamentalmente de familias provenientes del Chocó, Cauca y Nariño (Marmolejo y Zúñiga, 1996).

Dinámicas globales y proyectos de desarrollo

El Pacífico colombiano ha sido objeto de diferentes planes de desarrollo que desde la década del ochenta han pretendido, a través de la combinación de capital, tecnología y mercado, garantizar su acceso definitivo a la modernidad. En palabras del expresidente Virgilio Barco, quien propuso oficialmente en su gobierno, el primer Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica (PLADEICOP), el objetivo de este cambio era ajustar al país a las nuevas realidades internacionales:

> La política exterior ha realizado una apertura hacia el Pacífico. Esta región concentra en la actualidad a la mayor parte de la población del mundo, y allí se ubican economías de gran dinamismo. El auge del intercambio y las actividades

> productivas en los países situados en la Cuenca del Pacífico, de la cual forma parte Colombia, ha llevado a que se considere que estamos entrando al "Siglo del Pacífico". Este Océano, del cual hemos vivido de espaldas, es para Colombia un gran reto y una gran oportunidad (Barco, 1989: 26).

Este discurso privilegió la apertura de la región y el país a un mercado global, haciendo hincapié en la necesidad de infraestructuras para convertir la zona en un corredor de bienes y servicios. No obstante, pronto las consecuencias sociales y culturales de estas políticas desarrollistas, implantadas desde fuera, comenzaron a evidenciar que las poblaciones no eran el objetivo principal de estos proyectos, como había sido demandado por parte de las organizaciones locales, sino tristemente el obstáculo a superar.

En concreto, la experiencia desarrollista se hace presente en el Bajo Calima con la introducción de nuevas tecnologías para la agricultura, nuevas vías de acceso y, especialmente, con la introducción de relaciones comerciales que involucran entidades extractoras avaladas por concesiones territoriales que otorga el Estado en su proyecto modernizador.

El caso que mejor ejemplifica este proceso fue la concesión otorgada a Smurfit Cartón de Colombia que desde el año 1959 hasta 1994 explotó la zona por medio de su filial PULPAPEL (Marmolejo y Zúñiga, 1996: 22-23). La escogencia de este lugar obedeció tanto al cambio de sede que experimentó la empresa, trasladando su planta de pulpa desde Barrancabermeja al norte de Cali —por motivos de orden público—, como a la posición geoestratégica de la región del bajo Calima en función de su vocación forestal y su cercanía a la vía principal que une a Buenaventura con el centro del país.

La concesión se justificó, por parte del Estado y la Empresa, en el contexto del desarrollo de una economía nacional que permitió la sustitución de importaciones, y con el pretexto del aprovechamiento de un suelo y un bosque que, según las investigaciones, sólo eran útiles para la fabricación de pulpa (Marmolejo y Zúñiga, 1996: 22). Por su parte, las comunidades de la región manifiestan que, a partir de ese momento, el equilibrio ambiental se puso en riesgo.[4]

[4] Paralelo al comienzo de la explotación maderera, desde 1959 (ley 2ª) la región hace parte de la reserva forestal "Costa pacífico Urabá". La última concesión firmada en 1974 para el aprovechamiento durante 30 años distribuye las 54.000 hectáreas adjudicadas de la siguiente manera: 4.000 h. de resera natural, 14.000 de bosques inaccesibles y predios titulados y

De igual manera, cabe anotar que las carreteras y las vías de acceso abiertas por este sistema de explotación introdujeron, en la zona, nuevos pobladores e intercambios que generaron transformaciones en las relaciones de producción y subsistencia de las comunidades locales: en este momento es tan grave la situación que tan pronto un árbol está del tamaño de una escoba lo cortan para venderlo y comprar arroz.[5]

Al discurso del desarrollo se le sumó, en la década del noventa, una variación de corte ecologista que defendió las ideas de sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. De este periodo sobresalen los proyectos Plan Pacífico y Biopacífico. En ellos el énfasis recayó en la capacidad energética de la región y en el capital biológico y genético de sus poblaciones y especies.[6] De allí que, antes que infraestructura, estos planes privilegiaron la construcción de inventarios sobre biodiversidad y la zonificación ecológica de la región.

Aunque, en principio, la superposición de estos discursos con las secuelas desarrollistas generó cierta desconfianza, también es cierto que permitieron la apropiación por parte de las comunidades de un repertorio ecológico y conservacionista que se convertirá, a partir, de entonces en un recurso determinante para las reivindicaciones de las poblaciones negras e indígenas de la región. Igualmente, como se observará más adelante, los cambios en la organización social y política irán de la mano del aprendizaje alcanzado para acceder a la gestión y ejecución de créditos de financiación, y fondos de cooperación internacional.

En resumidas cuentas, las implicaciones ambientales y sociales de las iniciativas macroeconómicas en Bajo Calima son diversas y complejas. Principalmente se trata de una transición de una "economía de subsistencia", en la que se alternaban la agricultura y la caza con esporádicos trabajos de minería y tala rudimentaria, a una integración económica forzada por las dinámicas de un comercio de extracción de materias primas y la implementación de monocultivos. Más importante aún, la lógica de la producción para el intercambio introdujo también, en un

36.000 para explotación (Jaramillo citado en Marmolejo y Zúñiga 1996:23). Actualmente dadas las características de su gran biodiversidad se adelantan estudios de potencial frutícula (Universidad del Tolima).

[5] Entrevista a Francisco Paredes. Coordinador del proyecto de intervención denominado "Acciones para la implementación de un modelo de gestión para el desarrollo humano y la convivencia con población retornada y acogida en la cuenca baja del río Calima en el municipio de Buenaventura (departamento del Valle del Cauca)"

[6] Para un análisis discursivo de estos planes y su impacto en la región véase: Escobar (1997).

espacio plagado de seres míticos que habitaban ríos y bosques, una forma de representación de la naturaleza como un lugar a dominar y explotar; como un lugar propicio para desarrollar la obra conquistadora del hombre. Justamente un acto de develar que Heidegger adjudica a la técnica moderna:

> El develar imperante en la técnica moderna es un provocar que pone (*stellt*) a la naturaleza la exigencia de suministrar energía que, en cuanto tal, puede ser acarreada y acumulada. [...] La tierra se devela ahora como coto de carbón, el suelo como yacimiento de mineral (Heidegger, [1953] 1986:54).

Esto se constata para el caso del Bajo Calima en la forma como el espacio se devela bajo la técnica como opuesto y separado de lo social y lo político. Un espacio neutral e indiferente, muy lejano a las formas de relación que relata el conocimiento local. No obstante, este provocar como explotación también es un provocar que expone a la naturaleza como depósito. Esto quiere decir que la técnica no sólo devela la energía que hay en la naturaleza, no sólo la muestra como tal, sino que también la acumula y la hace conservable para un disponer ulterior. El espacio se transforma así de territorio a depósito de recursos y de 'naturaleza' a 'medio ambiente' para la conservación (Oslender, 2000: 202).

Ahora bien, aunque esta espacialización del poder sobre el territorio, los saberes y los cuerpos gestó un contexto de competencia poco o nada propicio para las comunidades locales, también habría que decir que produjo una coyuntura que dinamizó recursos políticos y económicos que se instrumentalizaron para al fortalecimiento de las organizaciones y sus reivindicaciones.

No es mi intención aquí profundizar en el debate sobre el desarrollo como régimen de representación, ni en la coproducción de discursos que mantienen en tensión múltiples sentidos de 'etnicidad' y 'naturaleza' (Escobar, 1999; Pardo, 1998; Wade, 1999). Sin embargo, a partir de la deconstrucción operada tanto por los movimientos sociales, como por las críticas de los años noventa al modelo desarrollista, se presenta actualmente una renovación de las estrategias políticas que intentan imaginar nuevas prácticas y 'espacios de representación' que articulan las imágenes de biodiversidad, con la historia de un espacio habitado y significado como lugar de identidad y resistencia. Como veremos a continuación, la organización de las comunidades negras ha permitido pensar la región, no sólo como un escenario donde compiten diferentes discursos sobre la naturaleza —unos ciertamente con mayores efectos de verdad que

otros— sino, también, como un territorio que contesta y negocia formas de producción alternativas, a la par que resiste nuevas formas de ocupación.

El proceso organizativo de las comunidades negras

El proceso organizativo que condujo hasta la conformación del Consejo Comunitario del Bajo Calima tiene raíces tanto en la politización de las comunidades negras —que podría remontarse hasta las rebeliones del periodo colonial, pero que toma cuerpo en los años setenta con organizaciones como Cimarrón—, como en las reivindicaciones gremiales de los agricultores negros que buscaban asegurar el derecho a la tierra y la defensa del territorio desde finales de los años 80 y la década de los 90 (Wade, 1997: 410). No es este el lugar para exponer los detalles del proceso de negociación, ni las particularidades de la legislación,[7] por motivos expositivos me limitare a tomar como ejemplo las tres grandes fases que el antropólogo Eduardo Restrepo identifica como determinantes para entender esta "revolución o reforma étnica" en el Pacífico sur colombiano (Restrepo, 2005).

Con la aprobación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 comienza lo que se puede denominar, siguiendo a Restrepo, como la fase de la "pedagogía de la alteridad". Un periodo donde la declaración de Colombia como nación multicultural y pluriétnica dio paso a una instrumentalización estratégica de la identidad que comenzó a cristalizarse en la conciencia de pertenecer a un grupo étnico diferenciado con estrechas relaciones entre territorio, cultura y memoria. Para el caso del Bajo Calima los innumerables talleres y asambleas destinadas a divulgar el mensaje del Articulo Transitorio encontraron eco en la conformación de la primera organización étnico territorial llamada ONCAPROTECA.[8] Organización que, como muchas otras iniciativas similares emprendidas por las comunidades negras en el proceso de reivindicación étnica, funciona aún hoy como respaldo y garantía de un proceso de titulación de tierras que sienten por momentos incierto y difícil de sostener en el tiempo.

La segunda fase comienza con la promulgación de la Ley 70 de 1993. Es la época, también, del surgimiento del Proceso de Comunidades Negras (PCN) como red de organizaciones y como proyecto político. Aquí el discurso de la discriminación positiva, o acción afirmativa, se consolida y se reglamenta en la

[7] Para ampliar este tema véase, entre otros, Grueso, Rosero y Escobar (1998); Restrepo (1998) y Agudelo (2004).

[8] Organización de campesinos para la protección del río Calima, fundada en 1991.

definición legal que reconoce como grupos étnicos con derechos especiales a las comunidades negras del país. En concreto el capítulo III de la Ley, respecto a la titulación colectiva de tierras, fue el más apremiante y el que más roces desató con los llamados proyectos de desarrollo y con los intereses económicos de los grandes empresarios. Los principios organizativos acordados mencionaban, además del derecho al territorio: el derecho a una identidad negra; al manejo del territorio como espacio de identidad; un cierto grado de autonomía; y el derecho a proponer visiones alternativas de desarrollo.

En el Bajo Calima, al igual que en gran parte del Pacífico colombiano, el resultado de este periodo fue la creación de los consejos comunitarios y el comienzo de las negociaciones y concertaciones necesarias para la titulación colectiva. El Consejo empezó a posicionarse hasta comprender a la fecha diez comunidades: cinco de ellas ubicadas en la cuenca (La Esperanza, San Isidro, La Trojita, El Ceibito y Agua Blanca); y otras cinco ubicadas a lo largo de la carretera de acceso que conecta la vía principal Cali-Buenaventura con *La Colonia* a orillas del río (La Colonia, Kilómetro 9, Las Brisas, La Estrella, Villa Estela). En conjunto, el corregimiento del Bajo Calima alcanza hoy, aproximadamente, las 77.777,27 hectáreas de tierras de titulación colectiva y se estima que, en el área, habitan alrededor de 7500 personas (Oficina de Gestión de Paz, 2008).

Aquí es importante mencionar, también, el espacio que logró ganar el conocimiento local de las comunidades frente a las demandas de desarrollo sostenible y de conservación que pretendía introducir el Proyecto Biopacífico sin mayores negociaciones. De allí provienen las luchas por la inclusión de la cultura y el territorio en la idea despolitizada de biodiversidad, que sostenía el proyecto técno-científico. El sentido de 'lugar' de las comunidades como una unidad que comprende cultura, naturaleza y territorio implicaba un proyecto de vida diferente que necesariamente se iba a recomponer y a coproducir, a la par que el Pacífico era convertido en objeto de desarrollo y depositario de diversidad cultural y biológica.

Por último, la fase que comienza a finales de los años noventa en la que los consejos comunitarios adquieren su mayor relevancia como agentes de cambio y gestión, coincide con la incorporación, en la zona, de nuevos actores que entran a competir por las tierras y el control de las vías. En efecto, podría decirse que este proceso de territorialización y organización política negra entró en competencia no sólo con los propósitos del Estado que empezaba, por aquella época, a ver la región Pacífico como un área de especial interés para

el 'crecimiento' nacional, sino, también, con la economía del narcotráfico que comenzaba a descubrir el potencial de una nueva zona por colonizar. Como lo anota Libia Grueso: "la contradicción central se da entre el Pacífico como área estratégica en la apertura económica vs. territorio región de grupos étnicos con su propia visión de futuro"(Grueso, 1997: 12).

En este sentido, las políticas de 'desarrollo' y, como veremos a continuación, las dinámicas del conflicto trajeron consigo no sólo nuevas prácticas y tecnologías de transporte y producción sino, también, nuevas "representaciones del espacio", para adoptar la expresión de Lefebvre (Lefebvre en Oslender, 2000:196), que organizaron, de forma contundente, la invención de un Pacífico tanto biodiverso como geoestratégico. En resumidas cuentas, al Pacífico, como territorio-región, lo producen inevitablemente una serie de procesos locales y globales.

III. Desplazamiento y estrategias de resistencia

Escalamiento del conflicto armado y desplazamiento forzado

El Pacífico colombiano estuvo por largo tiempo al margen del conflicto armado que ha caracterizado buena parte de las demás regiones del país (Agudelo, 2005; Restrepo, 2005; Escobar, 2005). A excepción del Urabá, en el extremo norte de la franja, las formas de violencia asociados a los procesos históricos, sociales y políticos del conflicto no desencadenaron en la región los complejos escenarios de guerra que hoy padece. Por el contrario, era recurrente escuchar una representación del Pacífico como un "paraíso de paz" (Arocha, 1993), en donde la esporádica presencia de grupos armados y las primeras dinámicas del narcotráfico parecían resolverse en una especie de "laboratorio de convivencia pacífica".

Desde luego, el cambio de esta situación se explica de formas diferentes dependiendo de los factores que se tengan en cuenta y dependiendo de la posición desde la cual se organice la interpretación. Para el caso del pacífico nariñense Eduardo Restrepo identifica al menos tres grandes interpretaciones que "van desde aquellos asociadas a los funcionarios o a las instituciones del aparato estatal hasta las que operan entre los académicos, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones étnico-territoriales o étnico-culturales" (Restrepo, 2005: 12).

En el primer caso, el aumento de los cultivos ilegales y su impacto en la economía y las relaciones sociales de la región son denunciados como una de las principales razones que explican los enfrentamientos armados por el control de su producción

y comercialización. En concreto, en el Bajo Calima el conflicto empezó a ser algo más que *un rumor* a finales de los años noventa. El ataque a un puesto de policía de la zona fue uno de los primeros indicios de que la vida cotidiana de la cuenca cambiaría drásticamente.[9] Para las fuentes de inteligencia de las fuerzas armadas nacionales (Tercera Brigada, DAS), el bajo río Calima es un corredor utilizado por el 30 Frente de las FARC hacia el río San Juan, en el Chocó.[10] Se argumenta la existencia de grandes laboratorios de coca en la zona y el flujo de múltiples mercancías, entre ellas armas, municiones, explosivos e insumos para el procesamiento de alcaloides. La posición geográfica, junto con la intrincada red de ríos, manglares y esteros justifica, a los ojos de las fuerzas armadas del Estado, la disputa de la zona como un territorio estratégico para la salida de estupefacientes hacia el mercado internacional. Por su parte las FARC, según revela una entrevista a su entonces comandante general, también reconoce la existencia de un "interés estratégico [...] por controlar la zona marítima del sur del país" (Agudelo, 2005: 215).

Según estos datos, la introducción y posterior expansión de los cultivos ilícitos en la región constituye la puerta de entrada al conflicto armado. Pero, para otros analistas es la puesta en marcha del Plan Colombia, con las fumigaciones y erradicación de cultivos en el departamento del Putumayo, a partir del año 2000, lo que explica la reorganización espacial del conflicto y el cambio de estrategias en la actuación de los grupos armados (CODHES, 2003).

Para algunos miembros de la comunidad las razones que convierten al Bajo Calima en un nuevo foco para el cultivo van más allá de las características estratégicas antes mencionadas. Los estragos medioambientales de la explotación maderera y las difíciles condiciones socioeconómicas (agravadas por la precariedad de las vías de comercialización y la falta de apoyo estatal para desarrollar proyectos productivos alternativos) hacen de la cuenca un lugar vulnerable y propicio para que los cultivos ilícitos se asienten como una opción arriesgada, pero efectiva de procurarse ingresos económicos. La escasa o nula presencia estatal, sumada al aislamiento geográfico, permiten el florecimiento de toda una serie de actividades propias de la cadena productiva del narcotráfico: desde la búsqueda de financiación por parte de los grupos insurgentes y paramilitares, hasta la economía legal que se beneficia de las tecnologías e inversiones que llegan a la zona.

[9] Grupo Focal 1. Marzo 9 de 2008. La Colonia. Bajo Calima.

[10] Diario *El País*, sección B5, Cali, 23 de junio de 2001.

Si bien, los datos del SIMCI,[11] sobre las hectáreas de cultivos de uso ilícito, revelan que el porcentaje de la región aún es relativamente bajo con respecto al total nacional, desde principios del siglo XXI las dinámicas del narcotráfico comienzan a ejercer verdadera presión en el área amenazando, en concreto, los territorios de propiedad colectiva de las comunidades negras.

Para un gran número de académicos la construcción de estas 'geografías del terror' (Oslender, 2004) "apunta a revertir de hecho los alcances de los reconocimientos territoriales y a una inserción por la fuerza a un proyecto de nación que supone el borramiento de las condiciones de existencia de la diversidad cultural y biológica de la región" (Restrepo, 2005). La región Pacífica colombiana se enfrenta así, no a los efectos colaterales de un conflicto, sino a nuevas formas de colonización. Esta vez, difícilmente celebradas por la historia como ejemplo de emprendimiento y progreso, y, más bien, explícitamente dirigidas a producir una especie de contrarreforma agraria por parte de grupos interesados tanto en el narcotráfico, como en la acumulación de tierras de gran riqueza en biodiversidad y con posibilidades de inversiones de capital a través de megaproyectos. Precisamente, la llegada de grupos paramilitares a diferentes zonas del Pacífico se ha asociado a la expansión de intereses industriales como el cultivo de la palma africana y al establecimiento de impuestos y trabajos forzados o la completa des-territorialización y re-poblamiento de áreas enteras para facilitar la producción. De hecho, como sostiene Arturo Escobar en *La invención del Tercer Mundo,* para algunos académicos "esta voluntad de poder espacial es uno de los rasgos esenciales del desarrollo" (1996: 30).

La llegada de grupos Paramilitares (Bloque Calima AUC) al Bajo Calima es registrada por la prensa local en el mes de junio del año 2001.[12] Esta presencia, sumada a los frecuentes actos de delincuencia común y la intimidación con pintadas y anuncios de "limpieza social", es destacada por la comunidad como una de las principales razones que da lugar a alertas tempranas de posibles desplazamientos masivos al puerto de Buenaventura. A lo anterior se suman los primeros señalamientos por parte de las Fuerzas Militares a miembros de la población por supuestos contactos o vínculos con la guerrilla.

[11] SIMCI, Sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Tabla de cultivos de coca por departamento en Colombia 2001-2006. Fuente: Atlas de Paz y Convivencia. Octubre 8 de 2007.

[12] Diario *El País*, sección B5, Cali, 23 de junio de 2001.

Los temores de la comunidad se hacen realidad en marzo de 2003, con el enfrentamiento armado entre grupos de la guerrilla de las FARC y Paramilitares. Este suceso genera el primer desplazamiento masivo de aproximadamente 900 personas del Bajo Calima hacia Buenaventura.[13] Los pobladores relatan que fue necesario abandonar todos los bienes y pertenencias sin poder preparar el viaje ni las condiciones de alojamiento en los lugares de destino (Buenaventura, Palmira y Cali, principalmente): "Ese día en la chiva de las cuatro parecíamos racimos de chontaduro colgando por los costados".[14]

Desde ese momento los relatos y los silencios están marcados por recuerdos de abandono y sensaciones de frustración e impotencia. No sólo se deja atrás una casa y una parcela, sino que también se deja un territorio construido simbólicamente por la propiedad colectiva y la reivindicación étnica conquistada con la institucionalización de la Ley 70.

Por su parte, los diferentes organismos de atención, relatan que el desplazamiento del Bajo Calima fue en cierto sentido atípico. Manifiestan que, si bien los desplazamientos se dieron en grupos relativamente organizados, las víctimas no declararon al llegar su situación de manera conjunta ante las entidades:

> Cuando te desplazan, es que te toca ir a la Personería o a cualquier entidad del ministerio público que haya en tu ciudad y rendir una declaración. Esa declaración la mandan a los coordinadores y ellos miran si cumple con los cinco puntos que incumple la ley. Después te pasan a una base de datos que se llama Sistema de Información Para la Población Desplazada, y pasan a una base de datos a nivel nacional y ahí hay una base de datos de toda la población del país que están incluidos por el gobierno y estos entran a tener todo lo que la ley dice.[15]

Por el contrario, fue un proceso en el que algunas familias tomaron la inactiva y, paulatinamente, las demás se fueron sumando. Así justifican algunos la falta de reacción de Acción Social, que tardó en reconocer la situación de emergencia que vivía el Bajo Calima. En efecto, a partir de los lineamientos de la Ley 387 de 1997, y sus principios rectores frente al desplazamiento interno, el conocimiento y la intervención de este fenómeno en el territorio colombiano tuvo un comienzo

[13] Diario *El País*, sección B5, Cali, 29 de marzo de 2003.

[14] Grupo Focal 1. Marzo 9 de 2008. La Colonia. Bajo Calima.

[15] Entrevista a Ex-asesor de la oficina de Gestión de Paz y Convivencia. Gobernación del Valle del Cauca, 2008.

controvertido y no siempre ágil en todas las regiones. Para el caso en cuestión, la población del Bajo Calima experimentó un paso lento y traumático del total desconocimiento de su situación por parte de las entidades públicas, a una precaria visibilidad sólo como víctimas del desplazamiento con todos los efectos de objetivación y estigmatización que trae consigo esta denominación (Aparicio, 2005). Así, la comunidad identifica a la Cruz Roja y la Pastoral Social como las instituciones que realizan la primera intervención humanitaria, con mercados y dinero para rentar un lugar dónde vivir. No obstante, denuncian muy temprano que la asistencia por parte de las instituciones gubernamentales, como la Red de Solidaridad Social, no se presta de manera oportuna y adecuada. En sus relatos expresan que les dejaron a sol y agua en espera de un mercado, o que no les atendieron por sospechas de que su cédula pudiera ser falsa.

Debe tenerse en cuenta, que para ese momento, en el municipio de Buenaventura la situación de emergencia por desplazamientos, en relación con la atención alimentaria, vivienda y salubridad pública del casco urbano, ya superaba la capacidad de respuesta de la Administración. Para la época el puerto había alcanzado el primer lugar del departamento en los índices de recepción de desplazados. En 2003 se contabilizaban más de 28.000 personas desplazadas en Buenaventura, cifra que según los datos de Acción Social variará gradualmente hasta alcanzar en 2006 los 45.257, seguida por la ciudad de Cali con 38.851.

La primera comisión humanitaria que visitó la zona después de la emergencia estuvo conformada por delegados del Ministerio del Interior, la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Gestión de Paz del Valle, la Red de Solidaridad Social, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el Municipio y la Pastoral Social de la Iglesia. Estas entidades confirmaron que los hogares de Bienestar Familiar, las escuelas y el hospital estaban abandonados. Había escasez de alimentos y cortes en el suministro de agua. Igualmente, reportaron que 250 personas se habían resistido a dejar sus viviendas por temor a minas antipersonas. El defensor regional del pueblo Hernando Sandoval denunció inmediatamente la situación de desatención y manifestó que: "es una lastima que ante la confrontación, el único apoyo que perciba la población afectada sea el del Ejército".[16]

[16] Diario *El País*, sección B5, Cali, 29 de marzo de 2003.

Visibilización del conflicto y agenciamiento del apoyo institucional para el retorno de la población

Con la intensificación de los enfrentamientos, y la salida del Ejercito Nacional, los desplazamientos forzados continuaron a lo largo del mes de abril hasta consolidar un total de 1563 personas desplazadas del Bajo Calima hacia Buenaventura. Esta cifra fue reportada por la oficina de la Red de Solidaridad Social. Bajo esta difícil situación, la comunidad desplazada, convencida de que la vuelta al territorio era la única solución aceptable, contactó al personero local Arlington Agudelo y al Consejo Comunitario para demandar la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Gestión de Paz.[17]

Para la comunidad la clave estuvo además en el diálogo y contacto con otras comunidades en situación de desplazamiento, como las del río Naya, Cajambre, Anchicayá y Dagua. Estas alianzas no sólo contribuyeron a la visibilidad de la dimensión regional del problema, sino que, también, sirvieron a las personas como una forma de solidaridad que alcanzó dimensiones internacionales, y fueron recibidas como una voz de aliento y confianza en lo que podían conseguir como grupo étnico-territorial. [18]

En ese momento se da inicio, formalmente, a un proceso de prevención y protección de la población desplazada cuya prioridad es el diseño de un plan de retorno al 'lugar'. Sin embargo, las autoridades locales se enfrentan a serios problemas presupuestales para la atención de los desplazados y la ejecución de los programas necesarios para el retorno. Para la fecha es evidente que el Estado, por sí solo, no contaba con los recursos necesarios. La Oficina de Gestión de Paz insistió en la necesidad de que todas las entidades involucradas

[17] Es importante anotar que aunque El Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, creado en el año 1998 y coordinado en ese entonces por la Secretaría de Gobierno, solía ser la entidad encargada de afrontar estas solicitudes. A partir del año 2001 la responsabilidad de atender el desplazamiento forzado le fue asignada a la Oficina Gestión de Paz y Convivencia. Posteriormente hacia el 2002, conjuntamente con funcionarios de la Red Solidaridad Social, se da inicio al proceso de información y coordinación de acciones. De allí resultará la construcción de un Plan Integral Único Departamental del Valle del Cauca (PIUD) que finalmente tras sumarse la participación de instituciones y representantes de la Población en Situación de Desplazamiento, el apoyo técnico de la OIM en 2004 y los recursos de USAID ve la luz en 2007.

[18] En estos procesos de trabajo en red la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), creada en 1999, ha tenido un papel determinante.

(municipales, regionales y naciones, incluyendo las organizaciones no gubernamentales) participarán de manera comprometida en el proceso para garantizar un retorno exitoso.[19]

En cualquier caso, aunque se llegarán a garantizar algunas necesidades básicas referidas a infraestructura, alimentación, recomposición del sector institucional, creación de puestos de salud, reactivación de escuelas y atención humanitaria del Estado, entre otros, lo más apremiante para la comunidad seguía siendo lograr compromisos por parte de los actores armados para garantizar la seguridad. La Oficina de Gestión de Paz venía trabajando desde el año 2000 en la construcción de una agenda de carácter humanitario con los grupos armados cuyo fin era atenuar las consecuencias del conflicto. Para el 2001 este proceso había arrojado ya los primeros resultados logrando acuerdos y compromisos por parte de los actores armados para el respeto de la vida y los bienes de la población; y con ello la posibilidad de negociar con el Estado respuestas efectivas al desplazamiento.

Sin embargo, con el rompimiento de los diálogos de paz y la finalización de la zona de despeje, que durante la presidencia Pastrana (1998-2002) permitió un relativo marco de diálogo y negociación, la continuidad de estas iniciativas encontró una seria dificultad añadida. Para no pocos de los gestores del proceso, el plan de "Seguridad democrática" implantado por el nuevo gobierno privilegió la solución militar antes que los acuerdos humanitarios y condenó drásticamente las acciones de diálogo con los grupos al margen de la ley: Al gobierno le interesaba que la seguridad del proceso de retorno no fuese los acuerdos humanitarios de paz.[20] De hecho, para algunas entidades como Acción Social la seguridad de los procesos de retorno era concebida sólo en términos de presencia de la fuerza pública.

A pesar de las dificultades, la Oficina de Gestión de Paz y Convivencia y las principales autoridades políticas de la región continuaron impulsando la agenda de carácter humanitario. Antes del proceso del Bajo Calima ya se habían emprendido alrededor de 20 procesos de retorno en el Valle, garantizados por este esfuerzo.[21] Esta férrea convicción de que solo un acuerdo de tal naturaleza podía garantizar el retorno fue lo que le otorgó mayor solidez al proceso.

---

[19] Diario *El País*, sección B4, Cali, edición del 3 de julio de 2003.

[20] Entrevista Ex-gestor de Paz. 2008

[21] Oficina de Gestión de Paz y Convivencia; *Tiempos de esperanza! Nuestra agenda humanitaria: una travesía hacia el retorno*. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2003. p. 53.

Agenciando el apoyo de la Defensoría Regional del Pueblo, la Oficina de Gestión de Paz, la Red de Solidaridad Social, las autoridades locales y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el consejo logró los primeros pasos para preparar el retorno. La intención decidida de los miembros de la comunidad de regresar a sus casas y parcelas se hace explícita en la audiencia celebrada el 16 de septiembre de 2003 donde las entidades comprometidas, en conjunto con la comunidad, exigen al gobierno el cumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de acción trazado en mayo de 2001.[22]

A finales de 2003 la participación de la población a través de su Consejo Comunitario y el trabajo de las entidades oficiales y cooperantes fue creciente, pero sólo hasta el año siguiente los funcionarios de la administración municipal, Gobernación del Valle y Defensoría del Pueblo lograron confirmar que estaban dadas las condiciones para el retorno.

Esta situación favorable coincide con diversas iniciativas que, por aquel momento, se estaban gestando propiciadas por los debates sobre las políticas públicas ante el desplazamiento. Un ejemplo de ello son las acciones de tutela que diferentes ciudadanos y ciudadanas colombianas emprendieron ante la justicia colombiana para que se hicieran efectivos y se garantizaran los derechos humanos en su condición de desplazados internos. En respuesta, la Corte Constitucional ordenó implementar un plan de acción que respondiera a las necesidades de la población afectada en los siguientes términos:

> [...] a más tardar el 31 de marzo de 2004, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia habrá de precisar la situación actual de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente. [Además debe] fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que es necesario para cumplir con la política pública encaminada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados; […] definir el porcentaje de participación en la apropiación de recursos que corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la cooperación internacional; […] indicar el mecanismo de consecución de tales recursos, y prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que tales faltantes sean compensados con otros medios de financiación.[23]

[22] Diario *El País*, sección B4, Cali, edición del 7 de mayo de 2004.

[23] Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. T 025 de 2004, del 25 de febrero.

Otro ejemplo desde el ámbito institucional es la decisión de la Fundación Foro Nacional por Colombia de impulsar la realización de la Campaña *El Desplazamiento forzado: un reto a la Solidaridad,* en el marco del programa institucional "Fortalecimiento de la participación Ciudadana y Derechos Humanos", apoyado por la Fundación Heinrich Boell. Esta iniciativa, que expresaba como objetivo principal contribuir a la consolidación de un proyecto de sociedad basado en la inclusión y la equidad social, el respeto por los derechos humanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía, se desarrolló en la ciudad de Cali entre marzo de 2004 y julio de 2005. El resultado más importante para el proceso de Bajo de Calima fue consolidar definitivamente un espacio de encuentro, que hasta ese momento había sido imposible, entre la Gobernación y la población desplazada de la cuenca.

En el contexto de estas apuestas ante la comisión del Plan de Desarrollo Económico y social de la Asamblea del Valle, se propone discutir y proyectar un programa regional de Cultura Democrática, Paz y Convivencia dentro del plan de desarrollo del departamento. Allí se contempla el establecimiento de un Observatorio de paz regional, la creación de 19 comités de atención a los desplazados y el fortalecimiento de jueces de paz en 42 localidades.

En concreto para el puerto de Buenaventura se reporta, para mediados del 2004, la creación de mesas de trabajo para la identificación de proyectos y la canalización de las acciones administrativas en favor de la población afectada. De esta manera, se logran los primeros compromisos por parte de la administración municipal prometiendo realizar obras en la zona y prestar atención las víctimas. En ese momento diferentes entidades intervienen. La Red de Solidaridad se compromete a colaborar con el sostenimiento entregando víveres a cada familia. La Organización Internacional de Migraciones, la Corporación Minuto de Dios y la Alcaldía prometen asesorar en proyectos productivos y de mejoramiento de vivienda.

Negociación y ejecución de proyectos de atención e intervención social

A partir de la base de datos de desplazados del municipio, la Oficina de Gestión de Paz identificó las cabezas de hogar pertenecientes al Bajo Calima y con la colaboración del Consejo comunitario se convocó a las personas, a través de la radio y el canal local, para que se prepararan para el retorno. Aún bajo el constante marco de incertidumbre social e institucional, el apoyo de las comunidades negras de la región y el coraje de los resistentes en el territorio fue determinante para obtener una respuesta masiva a este llamado.

Por lo menos 1349 personas, integrantes de 225 familias desplazadas de Bajo Calima, atendieron el llamado y emprendieron el regreso en el mes de septiembre del año 2004. A su llegada la comunidad encuentra un territorio desolado. Casas derruidas por los enfrentamientos, otras consumidas por la vegetación y, en general, experimentan en esos primeros meses una situación de zozobra en la que cualquier señal o indicio les recuerda imágenes de terror: "no podía ni oír caer una hoja, hasta escuchar el agua hirviendo me recordaba las balas y las explosiones".[24]

En estas condiciones la población intenta acomodarse beneficiándose de apoyos económicos esporádicos que empiezan a hacerse efectivos desde diversas instituciones. En principio la presencia de la Alcaldía y la Gobernación, que financiaron el transporte y gastos de la olla comunitaria el día del retorno, generó grandes expectativas en la población pero, rápidamente, se hizo evidente que la ayuda de estos primeros meses no se prestaba de forma coordinada, y que no se contemplaba seriamente la participación de la comunidad: "estuvimos un año solos […] la oficina era la única haciendo presencia".[25]

Entre las primeras acciones se cuenta la donación de paquetes agropecuarios con semillas, herramientas y aves de corral. Las fallas de estas ayudas se hicieron evidentes cuando la comunidad se enfrentó, entre otros problemas, a las dificultades de comercialización y sostenimiento de los animales: "incluso era necesario vender algunos animales para poder pagar el alimento de los demás […] vender un pollo en una situación en la que todos teníamos de lo mismo era casi imposible".[26]

Por otra parte, algunas iniciativas parecían funcionar bien en su diseño, pero atendían sólo los asuntos relativos a la seguridad alimentaria sin considerar la generación de ingresos. Finalmente, con el espíritu de la Sentencia de la Corte se plantea por parte del Consejo Comunitario, con el apoyo de fundaciones como *FORO,* la necesidad de incluir a la población desplazada y a sus organizaciones en la toma de decisiones y en establecer un conjunto de acciones que permitan el fortalecimiento de sus organizaciones y redes.

De esta manera, la asistencia que inicialmente solo fue humanitaria y de emergencia, empieza a focalizarse, gracias a las acciones y participación de la comunidad, en la estructuración y desarrollo de proyectos en salud, educa-

[24] Grupo focal 1. Corregimiento Villa Estela. Bajo Calima. 2008.
[25] Grupo focal 2. Corregimiento San Isidro. Bajo Calima. 2008.
[26] Grupo focal 2. Corregimiento San Isidro. Bajo Calima. 2008.

ción, fomento empresarial y vivienda entre otros. De los proyectos de este periodo se destacan la intervención de la Fundación Amigos y Hermanos, las intervenciones de la Fundación Foro y una serie de proyectos cofinanciados por la Secretaría de Vivienda y Desarrollo del Departamento, al igual que por organizaciones internacionales (OIM, Comunidad Hábitat y finanzas CHF, Solidaridad Internacional de España).

En el caso de la Fundación Foro lo más significativo son las estrategias denominadas *Acción marimba* y *minga por gobernabilidad*. Estas iniciativas adelantadas, principalmente, a través de talleres con la comunidad pretendieron fortalecer la identidad cultural, la convivencia pacífica y democrática, la gobernabilidad y la promoción de los derechos humanos. En cuanto a la Secretaria de Vivienda, se reportó en el año 2005 la entrega de 38 subsidios para igual número de familias que habitan en el sector con el apoyo del Banco Agrario, el Departamento y la Alcaldía de Buenaventura.

Con respecto a los proyectos de vivienda, los convenios de cooperación internacional atrajeron recursos significativos. La Organización Internacional para las Migraciones OIM, con una colaboración menor del Departamento y la Alcaldía, atendieron a 220 familias. Estos proyectos ejecutados por operadores externos, de acuerdo con los criterios de la entidad financiadora, contaron por lo menos con la participación de la comunidad en la identificación de las prioridades y diagnóstico previo, al igual que con la vinculación con mano de obra.

En medio de esta diversidad de actores y multiplicidad de enfoques, la comunidad expresa aún hoy tener serios problemas en identificar algo más que operadores y ejecutores. Por el contrario, la figura del Consejo Comunitario siempre es visible como una instancia con capacidad de gestión y representación que, por lo demás, supo aprovechar la oportunidad política para convertirse en un agente dinámico y de alta legitimidad dentro de la comunidad.

Actualmente el programa líder que se encuentra operando en la zona, es financiado con dineros de la Unión Europea. Su duración es de tres años, desde el 1° de septiembre de 2006 hasta el 30 de agosto de 2009, y el propósito central es trabajar en cinco componentes: mejoramiento de las condiciones de vida, fortalecimiento organizativo de las comunidades, la reconstrucción del hábitat, el desarrollo productivo sostenible y la recuperación de dinámicas y prácticas culturales. Los destinatarios directos de la acción son 1.124 familias, 4.335 personas, que hacen parte tanto del grupos de retornados como de la

comunidad resistente y de acogida. Se espera que el impacto del proyecto pueda así mismo beneficiar indirectamente a cerca de 7.500 habitantes del área.[27]

En definitiva, se sostiene que el objetivo es volver a reconstruir el tejido social que se había roto con el desplazamiento y darle un impulso adicional, no sólo en términos de gestión de recursos sino, también, en la construcción de una identidad cultural que sea la base para la toma de decisiones y de una apuesta a largo plazo. Las escuelas de convivencia trabajan, en este sentido, con una participación mayoritaria de la población, desde la selección y formulación de las prioridades de atención hasta la construcción y vigilancia de los presupuestos.

La ejecución del proyecto está a cargo de la Gobernación, la Fundación FORO, la Fundación Trópico y el Consejo Comunitario. Estas entidades han sido las encargadas de operar en el terreno, pero ha sido recurrente encontrar problemas en el desembolso de los dineros prometidos y en el cumplimiento de todas las etapas propuestas. Algunas comunidades del río manifiestan incluso que la ayuda no ha llegado hasta ellas, que todo se ha concentrado en la Colonia y las comunidades de carretera.[28]

Por ello mismo, puede constatarse que el impacto de esta cadena de proyectos, que se desata desde finales de 2005, ha estado más allá de los elementos señalados sobre infraestructura, salud, procesos productivos, etc. La experiencia de agenciar y negociar proyectos, de mantener viva en la opinión pública los estragos del conflicto y las necesidades de inventar una especie de era posdesarrollo, como la denomina Arturo Escobar, han fortalecido a la comunidad y sus reivindicaciones, pero también han generado el surgimiento de nuevos "liderazgos" en detrimento de otros más tradicionales.

Una vez lograda la 'revolución étnica' que condujo a la ley 70 y a la organización cultural y política de las comunidades negras, todo indica que los nuevos líderes se están posicionando en un contexto donde lo que predomina es la negociación de proyectos de intervención social y el desarrollo de estrategias para sobrellevar el conflicto. Aunque ninguna organización está exenta de los cambios propios de los relevos generacionales, es evidente que para la comu-

[27] Durante las etapas finales de publicación de este artículo la comunidad manifestó públicamente el incumplimiento del proyecto demandado a la Gobernación la ejecución en los términos negociados.

[28] A la fecha de publicación de este trabajo la comunidad se movilizo y protesto ante la gobernación por el incumplimiento en la ejecución del proyecto.

nidad del Bajo Calima, la irrupción del conflicto y el desplazamiento forzado tendrán un impacto decisivo tanto en el reacomodamiento de fuerzas, como en el proyecto étnico inicial.[29]

Como ejemplo de estas transformaciones las preocupaciones actuales de la población se relacionan con quién tiene derecho a qué y quién decide los derechos de posesión de la tierra, y bajo qué condiciones: ¿quién es "calimeño"(del Bajo Calima)?, ¿cómo se adquiere esta identidad y cómo se afronta la presión de los colonos?[30] En este sentido, puede constatarse que existen también estrategias complejas que adelantan ciertos miembros de la comunidad para sacar provecho de la situación y el marco legal. Como lo relata un antiguo operador del proceso de retorno:

> Otro problema es que ellos le vendan la mejora a 'paisas', por ejemplo, sabiendo que el negocio de ellos son los cultivos ilícitos, son los que llevan los vicios, pero es que también es una comodidad para ellos, porque son los que les hacen los viajes, etc. No es un asunto ingenuo. Otra cosa es que ellos se echen un discurso acá: ' no es que nos están apoderando de la tierra'. [...], es que se da el caso que por ejemplo venden la tierra, y se van y se declare como desplazado o se van a otro lugar colectivo y arman la cosa allá. Pero entonces qué va a ocurrir, va a haber presiones frente a los 'paisas' para que desocupen, ellos primero le venden y luego cuando ya los quieren sacar empiezan a decir: 'no, es que nos están invadiendo los 'paisas'. Entonces es un problema de doble moral. Claro ya es otro cuento cuando llegan los grupos armados, pero este dominio es temporal, tiene determinado tiempo, por ejemplo, si hoy vienen los paramilitares entonces ellos emiten las normas de la gente y ahí llega el asunto, si llega la guerrilla, igual. El problema es que luego empiezan disputas entre ellos, acusaciones que los enfrentan.

Como es de esperarse las estrategias individuales no están libres de contradicciones, pero los espacios de mediación del consejo hacen un esfuerzo importante por mantener viva la memoria del proyecto colectivo de comunidades negras. Atrapados entre las demandas de la comunidad, los intereses y

[29] Para una descripción detalla del tipo de impactos y cambios que trae el conflicto para el proceso organizativo de las comunidades negras puede acudirse al caso del Pacífico nariñense que anticipa algunos de estos rasgos mencionados, véase Restrepo (2005).

[30] Reunión del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Bajo Calima, celebrado el domingo 9 de marzo de 2008.

presiones externas, las promesas de prestigio y de dinero fácil que el narcotráfico expone y los ideales del proyecto étnico, se encuentran en cierta manera en un momento donde los conflictos ya no pueden ser absorbidos por el sistema sin cambios estructurales.

En resumidas cuentas, el proceso ha dejado en la comunidad una imagen confusa en la que su tragedia de vida empieza a ser entendida como el precio a pagar por una contradictoria integración en la sociedad nacional. Necesidades que habían estado presentes desde mucho antes de cualquier manifestación del conflicto armado (carencia de servicios de salud, de necesidades básicas: alcantarillado, acueducto, energía, etc; infraestructura de escuelas, viviendas, etc.) sólo son tenidas en cuenta ahora que su condición de desplazados ha puesto la atención de los medios y la comunidad internacional a trabajar en su favor. Como concluye una mujer de la comunidad:

> [...] en parte hay cosas que benefician y otras que perjudican, porque Calima era un pueblo que nunca se pronunciaba, como que no existía en el mapa y después del desplazamiento Calima es conocido a nivel nacional, a nivel internacional y eso es una ventaja [...].[31]

IV. Consideraciones finales

Si bien la atención ante el desplazamiento y el posterior retorno comprende una serie de acciones y programas con aportes y enseñanzas importantes para afrontar el contexto conflictivo de la región, el caso del Bajo Calima tiene sus logros más significativos en la resistencia y defensa del 'lugar' a través del fortalecimiento de su organización política, de su capacidad de acción colectiva y de trabajo con redes que trascienden lo estrictamente local.

El proceso de reconocimiento y reinvención étnica propiciado por el marco jurídico y político de la Constitución de 1991 es una de las condiciones específicas que explica las formas solidarias de pertenencia y agencia de la comunidad del Bajo Calima ante el conflicto. La población calimeña como parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN), tiene una plataforma política, organizativa, territorial e identitaria que constituye en sí misma una acción colectiva determinante a la hora de hacer frente a un momento decisivo como el conflicto y el desplazamiento forzado.

[31] Grupo focal 2. Corregimiento San Isidro. Bajo Calima. 2008.

No obstante, deben hacerse algunas anotaciones que matizan las proporciones de este contexto. Es importante aclarar que la dimensión 'étnica' es todavía para estas comunidades una construcción académica 'artificial y confusa'.[32] Si bien, para el caso podríamos hablar, en la perspectiva de identidad compartida, de un repertorio añadido que ha permitido a la comunidad interpretar el drama social como un acto confirmatorio que reafirma los valores compartidos y renueva los lazos de confianza preexistentes, es recurrente en los grupos focales una mayor referencia al evento del retorno como u nuevo hito fundacional que les otorgó una cohesión y sentido.

En consecuencia, aunque la identidad compartida que fortalece hoy por hoy a la comunidad del Bajo Calima es en gran parte producto del proceso organizativo étnico-territorial de los noventa, no se puede desestimar el papel que el conflicto armado ha jugado en este proceso. Ante la inminente perdida del territorio y la institucionalidad lograda por las reivindicaciones, las diferentes veredas han interactuado en esferas de interés común redoblando esfuerzos para visibilizar una situación social que sobrepasa las definiciones administrativas del desplazamiento. Por ello la insistencia de no pocos académicos en la idea de que las comunidades negras del Pacífico no pueden entenderse sin atrapar el contexto global; lo que nos lleva a ver a los desplazados no como campesinos desplazados, sino como sujetos envueltos en un sistema económico y geopolítico más amplio.

Esta visibilidad y representación que han luchado —primero como víctimas, luego como beneficiaros y ahora potencialmente como agentes de su propio desarrollo— es un logro para el emprendimiento y sostenimiento de acciones relevantes ante el conflicto y la desatención general del Estado en el que la organización local en cabeza del Consejo Comunitario tiene gran parte del crédito. Allí la resignificación promovida por el Proceso de Comunidades Negras de la noción de 'desplazamiento' ha sido determinante:

> El desplazamiento para los grupos étnico es toda imposibilidad individual o colectiva para permanecer, moverse o mantener control sobre sus territorios, producido por el conflicto armado, la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario" (PCN en: Restrepo, 2005: 26).

[32] Para mayor profundidad en este tema ver: Urrea, Ramírez y Viáfara (2004).

Sin embargo, este aprendizaje organizacional dinamizado por la Constitución del 91 y la ley 70 muestra en el tema de la espacialización de la diferencia y en el tema de la participación ciudadana algunas de sus contradicciones internas. En el primer caso la visión escencialista de la cultura delimitada a un territorio específico —propia de la retórica del multiculturalismo— puede convertirse tanto en una "prisión" para las comunidades como en un elemento de exclusión social hacía otras poblaciones, e incluso habría que decir que también ha abierto oportunidades políticas que no en todo los casos coinciden con los ideales del proyecto étnico inicial.

Por otro lado, los nuevos lenguajes de los proyectos, la burocracia y el protagonismo de ciertas figuras no han permitido una activa y crítica participación de la base en los procesos de decisión sobre los destinos de la comunidad. Las asambleas y reuniones del Consejo cuentan siempre con una gran afluencia de personas, pero su relación con las intervenciones y acciones aún responde a un cierto paternalismo que mina los espacios de participación de la comunidad. Sin embargo, hay que mencionar la existencia de esfuerzos importantes en educación, patrimonio cultural, derechos humanos, género y alternativas productivas que trabajan por el desarrollo de una ciudadanía cualificada con formación política y claridad sobre las posibilidades y límites de las construcciones étnicas operadas por las intervenciones sociales.[33] Es en esos espacios donde se consolida un fortalecimiento participativo de la comunidad de la cuenca (jóvenes, niños, mujeres y hombres) promoviendo la responsabilidad frente a la llegada de nuevos procesos de intervención, pero también frente a la comprensión de las diferentes concepciones e imaginarios del proceso de comunidades negras.

Esta oportunidad de profundizar el proyecto político, organizativo y cultural a través de una nueva forma de reterritorialización también ha permitido el salto de la idea de una comunidad cerrada y autocontenida, a la idea de una red interrelacionada con la esfera nacional e internacional por fuera de la que nunca han debido de ser pensados. Aunque, ciertamente, hay que anotar, como expone Restrepo, que:

> las transformaciones en este sustrato económico-social del proyecto definido por el proceso de comunidades negras han sido tales, que se ha sugerido (Escobar 2004, Villa 2003) que la integración a un proyecto moderno de nación

[33] Se destacan aquí los tres encuentros "deportivos, recreativos y educativos" organizados entre las comunidades de río y carretera y que han incluido la participación de los grupos indígenas de la región bajo la consigna "cultura para legar".

> que no se había logrado desde la independencia colonial y en lo que habían fracasado innumerables proyectos de desarrollo diseñados en las últimas tres décadas para la región, se ha consolidado en unos cuantos años mediante la triste combinación de "*plomo, coca, palma y plata*" (Restrepo, 2005: 24).

A pesar de lo negativo que este escenario pueda parecer, el capital social adquirido en este encuentro traumático con la nación también le ha garantizado a la comunidad cierta autonomía respecto a los actores armados, negociando pactos y aprendiendo nuevas reglas de juego en un contexto siempre cambiante. Cambiante porque el conflicto es dinámico. Hoy por hoy, los desplazamientos ya no son masivos sino selectivos. La expansión en la región Pacífico de los monocultivos lícitos, como la palma africana, trae a la memoria los estragos de la explotación maderera. Las presiones sobre el territorio se generan de formas menos visibles, las amenazas se mantienen, la presión de los colonos crece y la situación económica y ambiental empeora. En este último punto, el choque de competencias político-administrativas y ambientales en el territorio entre los diferentes actores locales (Consejos Comunitarios, CVC, Alcaldía Municipal, etc.) no permite vislumbrar un escenario de intermediación claro.

En cualquier caso, el liderazgo innovador del Consejo Comunitario, que se hace evidente a lo largo de todo el proceso, ha logrado mantener activo un precario *orden social* que ha permitido contener en forma relativamente estable los efectos del conflicto y garantizar a la comunidad acceder a ciertas necesidades básicas en salud, educación y vivienda. En estas condiciones la permanencia y resistencia de la mayoría de la población es ya un logro relevante. Sin embargo, todavía algunas de las organizaciones y funcionarios que realizan intervención en la zona no someten a negociación los elementos básicos que pueden fortalecer la comunidad y, por tanto, desvían los enfoques que requiere la población para ajustarlos a los requerimientos internos de las entidades financiadoras. Estas distorsiones entre lo que es pertinente para la comunidad y lo que es mandatorio para las entidades, mella la legitimidad y replicabilidad de los procesos.

Hoy en día no se puede decir que el retorno ha sido exitoso porque la gente esté restablecida en condiciones sociales y humanitarias plenas, ni porque las intervenciones institucionales hayan logrado contrarrestar por completo los efectos del conflicto social y armado; ha sido exitoso porque se han restaurado los lazos con el territorio a través de redes que lo trascienden. En este sentido, la base de

este relativo éxito de permanencia se halla más allá de los proyectos o agendas de las diferentes instituciones, en los recursos informales de la memoria y las prácticas organizativas de las comunidades que en su día a día logran desarrollar para hacer frente a los contextos cambiantes del conflicto.

En síntesis, aunque los programas de atención y protección han tenido fallas y dificultades de sostenibilidad, y aunque los actores armados no han respetado en todas las ocasiones los pactos alcanzados, la sutura que ha logrado salir al paso para mantener a la comunidad en su lugar ha sido la conciencia colectiva de una comunidad que ha podido constatar el poder que tienen como organización étnico-territorial, beneficiada no sólo por las políticas del reconocimiento sino, también, por los redes y lazos de solidaridad que han logrado construir a lo largo del tiempo.

Bibliografía

AGUDELO, C. E. 2005. *Retos del multiculturalismo en Colombia: política y poblaciones negras*, Medellín: La Carreta Ed.

APPADURAI, Arjun. [1996] 2001. "Paisajes étnicos globales: apuntes e interrogantes para una antropología transnacional". En: *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*, pp. 63-79. México: Fondo de Cultura Económica.

APARICIO, Juan Ricardo. 2005. "Intervenciones etnográficas a propósito del sujeto desplazado: estrategias para (des) movilizar una política de la representación". En: *Revista Colombiana de Antropología*, ICANH. Vol. 41, ene – dic, pp. 135-169.

AROCHA, Jaime; DE FRIEDEMANN, Nina S. y otros. 1984. *Un siglo de investigación social: antropología en Colombia*, Bogotá: Etnos.

AROCHA, Jaime. 1993. "Chocó: paraíso de paz" En*:* Astrid Ulloa (ed.), *Contribución africana a la cultura de las américas*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología-Biopacífico.

ASAD, Talal (ed.), 1973, *Anthropology and the colonial encounter,* New York: Humanities Press.

BARRAGÁN, C.A. *Antropología colombiana: del Instituto Etnológico Nacional a los programas universitarios (1941 - 1980):* el caso del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes*,* tesis de pregrado 2001.

BARCO Vargas, Virgilio. 1989. "Política Exterior para una Colombia Nueva", en *Revista Colombia Internacional* , número 7, julio – septiembre, pp. 22-32

BARZELAY, Michael y CORTAZAR VELARDE, Juan Carlos. 2004. *Una guía práctica para la elaboración de estudios de caso sobre buenas prácticas en gerencia social.* Washington: INDES, BID.

CASTILLO, Ruiz Carlos. (Compilador). Sociedad y Economía: el Valle del Cauca y Colombia. 30 años del CIDESE. Cali: Universidad del Valle, 2007.

CASTRO, Beatriz; "El poblamiento de la costa Pacífica". En: *Historia del Gran Cauca*. UNIVERSIDAD DEL VALLE. Cali: 1994.

CENTRO FORESTAL TROPICAL BAJO CALIMA. CFT. Programa Forestal para Ecosistemas Húmedos Tropicales. Universidad del Tolima. 2004 Disponible en <ut.edu.co/fif/cft/index.html>

CLIFFORD, J. y MARCUS, G. (eds). 1986. *Writing culture: The poetics and politics of ethnography.* Berkeley, CA: University of California Press.

CLIFFORD, J. 1988 *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*. Cambridge: Harvard University Press.

CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), 2003. "Balance del Plan Colombia en la frontera de Colombia con Ecuador", Bogotá.

COLLAZOS Morales, María Alejandra *El desarrollo de la antropología como carrera profesional : tres experiencias femeninas de vida***.** Bogotá : Uniandes, 2007 Tesis (Magíster en Antropología), Universidad de los Andes.

COMAROFF, J. y COMAROFF, J. 2003 "Ethnography on an awkward scale Postcolonial anthropology and the violence of abstraction"*, en: Ethnography,* Vol 4(2): 147–179.

Corte Constitucional Colombiana; *Sentencia T 025 de 2004*, del 25 de febrero.

Diario *El País*. 2001 'Paras' llegaron al Bajo Calima, sección B5, Cali, 23 de junio.

Diario *El País*. 2003. 900 personas han salido del Bajo Calima, sección B5, Cali, 29 de marzo.

Diario *El País*, 2003. Desplazados se alistan para volver a sus parcelas, sección B4, Cali, edición del 3 de julio.

Diario *El País*, 2004. Al puerto llega el mayor número de desplazados, sección B4, Cali, edición del 7 de mayo.

ESCOBAR, Arturo. 1993. "The Limits of Reflexivity: Politics in Anthropology's Post-Writing Culture Era". *Journal of Anthropological Research* 49: 377-391.

———— 1996. *La Invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo.* Bogotá: Editorial Norma.

———— 1997. "Cultural Politics and Biological Diversity: State, Capital and Social Movements in the Pacific Coast of Colombia", En: *Culture and Social Protest: Between Resistance and Revolution*. Orin Starn y Richard Fox, (eds.) New Brunswick: Rutgers University Press, pp. 40-64.

———— 1999. "After Nature: Steps to an Anti-essentialist Political Ecology", en: *Current Anthropology,* 40 (1): 1-30.

———— 2001. "Culture Sits in Places. Reflections on Globalism and Subaltern Strategies of Globalization.", en: *Political Geography.* 20 (2001): 139-174.

FABIAN, J. 1983, *Time and the other: how anthropology makes its object*, New York: Columbia University Press.

FOX, Richard (ed.), 1991. *Recapturing Anthropology*. Santa Fe: School of American Research.

GARCÍA Villegas, Mauricio; "Acción Colectiva Contestataria en Contextos de Conflicto Armado en Colombia". En: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. *Sociedad de Emergencia: Acción Colectiva y Violencia en Colombia*. Oficina para la Coordinación de la Atención al Desplazamiento Forzado. Bogotá. s.f..

GRUESO, Libia Rosario. 1997. *El proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico Sur Colombiano*. Tesis (Maestría Estudios Políticos). Universidad Javeriana. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

GRUESO, L. y ROSERO, C. ESCOBAR, A., 1998. "The Process of Black Community Organizing in the Pacific Coast of Colombia" . En: *Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin American Social Movements*. S. Alvarez, E. Dagnino and A. Escobar, eds, pp. 196-219. (Boulder: Westview Press).

GUPTA y FERGUSON (eds.). 1997. *Culture, Power, Place. Explorations in critical Anthropology*. Duke University Press.

HEIDEGGER, M. [1953] 1986 "La pregunta por la técnica", en: *Revista Universidad de Antioquia* (Medellín), Vol. LIII, Nro. 205, (Jul-Set), pp. 46-68.

HYMES, D. (ed.) 1974. *Reinventing Anthropology*, NY: Vintage Books.

JIMENO, M., 2005, "La vocación crítica de la antropología en Latinoamérica", en: *Antípoda, Revista de Arqueología y Antropología*, Universidad de los Andes, No. 1 julio-diciembre, pp. 43-65.

_____ 2000 "La emergencia del investigador ciudadano: estilos de antropología y crisis de modelos en la antropología colombiana", en: Tocancipá, Jairo (ed.), *La formación del Estado Nación y las disciplinas sociales en Colombia,* Popayán, Taller editorial, Universidad del Cauca, pp. 157-190

KUPER, Adam, 1973, *Antropología* y *antropólogos*: la Escuela Británica: 1922-1972 . Barcelona: Editorial Anagrama.

_____, 2001, *Cultura. La versión de los antropólogos*, Barcelona, Paidós

MARCUS, George. [1995] 2001. "Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía Multilocal", en: *Alteridades* 11 (22): 111-127.

MARCUS, G., y FISCHER, M. [1986] 2000. *Antropología como crítica cultural,* Buenos Aires: Amorrortu ed.

MARMOLEJO, María Fernanda y ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, José Idaldo. *Algunas implicaciones socioeconómicas de la presencia de Cartón de Colombia en el caserío del bajo Calima* (Buenaventura-Valle del Cauca). Monografía (Licenciado en Ciencias Sociales). Universidad del Valle. Facultad de Humanidades, 1996.

NASH, J. 1981, "Ethnographic Aspects of the World Capitalist System", en: *Annual Review of Anthropology*, Vol. 10, pp. 393-423.

Oficina Gestión de Paz y Convivencia. 2008. *Acciones para la implementación de un modelo de gestión para el desarrollo humano y la convivencia con población retornada y acogida en la cuenca baja del río Calima en el municipio de Buenaventura (departamento del Valle del Cauca).* Cali: Gobernación del Valle del Cauca.

Oficina de Gestión de Paz y Convivencia. Gobernación del Valle; *Tiempos de esperanza! Nuestra agenda humanitaria: una travesía hacia el retorno*. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2003.

ORTNER, S. 1984. "Theory in Anthropology since the Sixties", en *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 26, No. 1. (Jan.), pp. 126-166.

OSLENDER, Ulrich. 2000 "Espacializando resistencia: perspectivas de espacio y lugar en las investigaciones de movimientos sociales", en: Restrepo, E. y Uribe, M. V. (eds.), *Antropologías transeúntes*, pp. 191-221. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

————————, 2004. "Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas". En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*, pp. 33-50. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

PARDO, Mauricio. 1998. "Construcción reciente de elementos de liderazgo en el Pacífico". En: *Modernidad, identidad y desarrollo*. Maria Lucia Sotomayor, pp. 51-72. Bogotá: ICAN.

PINEDA Giraldo, Roberto. 1999. "Inicios de la antropología en Colombia", en: *Revista de Estudios Sociales*. Bogotá. No.3 (Jun.), pp. 29-42.

RESTREPO, E. y URIBE, M. V. (editores) 2000. *Antropologías transeúntes*, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

RESTREPO, E. 1998. "La construcción de la etnicidad: comunidades negras en Colombia", En: Maria Lucía Sotomayor (comp.) *Modernidad, identidad y desarrollo*. Bogotá: Ican. 1998, pp. 341-359.

———————— 2001. "Imaginando comunidad negra: Etnografía de la etnización de las poblaciones negras en el Pacífico sur colombiano". En: Mauricio Pardo (ed.), *Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano*. Icanh-Colciencias, pp. 41-70. Bogotá.

———————— 2005. "De refugio de paz a la pesadilla de la guerra. El conflicto

armado y el proceso organizativo en el Pacífico nariñense". En: <http://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/coflicto-borrador-restrepo.pdf> (también publicado en: *Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales*. Universidad del Cauca. 9 (13-14): 5-26).

RODRÍGUEZ, Enrique y SÁNCHEZ, José Fernando. "Imágenes de región y procesos de construcción de ciudad: los casos de Buenaventura y Tumaco". En: Revista *Sociedad y Economía*. UNIVERSIDAD DEL VALLE. V. 2. (Abril 2002).

ROSEBERRY, Willian., 1988, "Political Economy", *Annual Review of Anthropology* 17: 161-185.

ROXANA, Yockteng y CAVELIER, Jaime. "Diversidad y mecanismos de dispersión de árboles de la Isla Gorgona y de los bosques húmedos tropicales del Pacífico colombo-ecuatoriano". En: *Rev. biol. trop*. [online]. mar. 1998, vol.46, no.1 [citado 30 junio 2008], Págs. 45-53. Disponible en: <http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77441998000100005&lng=es&nrm=iso>.

SIMCI, Sistema de monitorio de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Tabla de cultivos de coca por departamento en Colombia 2001-2006 Fuente: Atlas de Paz y Convivencia. Octubre 8 de 2007.

TURNER, V. *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*, NY: PAJ Publications paperback, 1982.

URIEL ZULUAGA, Francisco; "Conformación de las sociedades negras del pacífico". En: *Historia del Gran Cauca*. UNIVERSIDAD DEL VALLE. Cali: 1994. p. 231.

URREA, RAMÍREZ y VIÁFARA. "Perfiles sociodemográfico de la población afrocolombianas en contextos urbano-regionales del país a comienzos del siglo XXI". En: *Panorámica Afrocolombiana*, Pardo, Mauricio; Mosquera, Claudia; y Ramírez, María Clemencia (Ed.); Bogotá: ICANH 2004, págs. 213-268.

VISWESWARAN, Kamala. 1994. *Fictions of Feminist Ethnography*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

WADE, Peter. 1997. *Gente Negra Nación mestiza*. Bogotá : Siglo del Hombre Editores.

———— 1999. "The Guardians of Power: Biodiversity and Multiculturality in Colombia", en *The Anthropology of Power. Empowerment and Disempowerment in Changing Structures*, Angela Cheater, ed. London and NY: Routledge. Págs 73-87.

WOLF, Eric. 1987. *Europa y la gente sin historia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Capítulo 3

Tierras y territorios en conflicto [1]

Luis Fernando Barón Porras

I. Introducción

> En mi carácter de Secretario de Industrias y Agricultura no he vacilado en plantear de manera concreta, la inmediata solución de este tremendo problema que existe en el Valle del Cauca, entre el propietario y el colono o agregado agrícola. Dicho conflicto tiene múltiples fases, que es necesario estudiar y resolver con un alto criterio de justicia social y de sentido humanitario para ambas partes. No se trata de erigir el sistema de expoliación por el propietario ni la invasión arbitraria por el colono. No es la fuerza intimidante de los fusiles la que debe dirimir esta clase de choques y antagonismos, que son fácilmente solucionables con los recursos legales […] (García Vásquez, 1993: 10-11).

La propiedad, distribución y uso de la tierra siguen apareciendo como factores centrales en el origen y desarrollo de los conflictos sociales, políticos y simbólicos del país. Como lo muestra la cita anterior, éstos no son asuntos nuevos ni mucho menos poco trabajados. Sin embargo, siguen irresueltos y continúan desatando disputas en las que se impone el uso de la violencia.

[1] Agradezco la colaboración de Lady Otálora, Comunicadora Social, que trabajó en este estudio como Asistente de Investigación. También agradezco el apoyo brindado por el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca y CENCOA, en particular de César Medina, Ximena Porras, Olver Arenas y Luz Adriana Ramírez, que nos ayudaron con información, ubicación de fuentes y con el trabajo de campo.

Este documento presenta la experiencia del programa de Jóvenes Agricultores del Valle del Cauca (JAV) desarrollado por el Comité Departamental de Cafeteros del Valle, en asocio con la Cooperativa de Centrales Agrarias del Valle del Cauca (CENCOA). El estudio de caso hace énfasis en los aportes y claves locales de esta experiencia para la superación del conflicto armado de acuerdo con los marcos metodológicos y de referencia desarrollados por el Banco de Buenas Prácticas del PNUD.[2]

El programa de Jóvenes Agricultores nace en medio de la crisis del café de mediados de los años noventa, la cual se recrudece por la desaceleración económica nacional de 1999, y surge como respuesta a dos problemas identificados por el gremio cafetero: el bajo relevo generacional en el sector y la migración de los jóvenes campesinos hacia la ciudad. Es así como en 1997 surge el Programa como una propuesta de *modelo experimental de reforma agraria integral* en zonas rurales del departamento.

Las tierras y territorios del Valle del Cauca han estado históricamente en manos de pocas personas y organizaciones. El suroccidente del país es una de las regiones donde se produce un significativo aumento de concentración de la propiedad rural durante el período 1984-1996. Esta situación coincide con la tendencia nacional, que muestra cómo en 1996 el 0,4% de los propietarios (para predios mayores a 500 hectáreas) poseían cerca del 44,6% del área rural y para 2001, el mismo porcentaje de propietarios (0,4%) controlaban el 61,2% de la superficie, mientras que los pequeños propietarios tienden a la atomización. Es decir, un proceso en el cual el número de hectáreas de los predios de rangos bajos no varía significativamente, mientras aumenta el número de propietarios, lo que implica que cada vez más individuos deban repartirse menores cantidades de tierra (García y Muñoz, 2007).

Estas tendencias se dan en medio de lo que Héctor Modragón (2002) denomina *relatifundización* —uso especulativo de la tierra, unido a la expansión de la ganadería extensiva, disminución de cultivos transitorios, incremento de los permanentes y de plantación—, y de la imposición de un esquema caracterizado por Absalón Machado (1999) como bimodal: de desaparición de los medianos propietarios.

Las relaciones y confluencia de estos fenómenos siguen expulsando a los campesinos hacia zonas de colonización de las fronteras agrícolas, hacia los cultivos

[2] Ver en la introducción del libro las características de los estudios de caso sobre buenas prácticas seleccionadas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Área de Paz y Reconciliación, *Banco de Buenas Prácticas para superar el conflicto.*

de uso ilícito y a los centros urbanos, aumentando el desempleo y su vulnerabilidad frente al reclutamiento de los actores armados ilegales y su vinculación con actividades ilícitas y criminales. Todo lo anterior en medio de los fracasos en el desarrollo e implementación de una reforma agraria de carácter nacional.

Este trabajo aborda estos contextos y situaciones y la manera como la experiencia de los Jóvenes Agricultores del Valle (con sus problemas y carencias, pero también con sus logros y fortunas) ha construido pistas para afrontar problemas tan complejos y de largo aliento para Colombia, como: el desarrollo de proyectos rurales incluyentes, eficientes y articulados a las condiciones del mundo global.

El documento está organizado en cuatro partes. En la primera se presentan elementos del contexto del departamento que tienen relevancia para el programa de Jóvenes Agricultores: la historia de los conflictos por la tierra en el Valle del Cauca, el desarrollo de la violencia y del conflicto armado desde los años setenta a la actualidad, y datos sobre el reclutamiento forzado en la región. En la segunda, se muestra el surgimiento y trayectoria del Programa y las transformaciones que ha vivido como resultado no sólo de los ajustes y respuestas a las situaciones que ha enfrentado sino, también, por la participación de los jóvenes y las familias que han hecho parte del mismo. En la tercera parte, se presentan los logros y dificultades de la experiencia. Y, en la cuarta y última parte, se presenta un grupo de claves y aprendizajes surgidos de la experiencia, relacionados con la búsqueda de alternativas pacíficas al conflicto armado y la construcción de paz en la región.

Para el desarrollo del estudio se hicieron entrevistas en profundidad con directivos del Comité Departamental de Cafeteros, con coordinadores del Programa, con representantes de la Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle —ASOJAV—, y con integrantes del programa JAV. También se realizaron entrevistas y conversaciones con asesores técnicos y se hicieron grupos focales con seis proyectos y un grupo focal con personas de una de las comunidades donde se desarrolla el Programa de jóvenes agricultores.

Además se realizó una juiciosa revisión de archivo: proyectos, informes (financieros y de gestión), actas, correspondencia, evaluaciones y material audiovisual, y una pesquisa bibliográfica sobre el desarrollo del sector cafetero en el departamento (principalmente la crisis del café y la crisis económica vivida en 1998); sobre la propiedad, distribución y usos de la tierra; y sobre el conflicto armado y el desplazamiento en el Valle del Cauca.

II. Apuntes sobre violencia y paz en el Valle del Cauca

Desde antes de la creación del departamento, las violencias en el Valle del Cauca han estado articuladas al problema rural, tanto de la propiedad y uso de la tierra como de sus proyectos agrarios y agroindustriales. La propiedad y dominio de la tierra, y el poder económico legal e ilegal, son la base del dominio político y del control social local y regional que, a la vez, han servido de soporte para conquistar relevancia y figuración en el poder nacional. El dominio territorial ha permitido la definición de reglas y acuerdos (institucionales y no institucionales) para el mantenimiento del poder político y social.

Darío Betancourt y Martha L. García (1999: 24-26), muestran cómo la historia de los conflictos agrarios en el Valle del Cauca es diferente a la de otras regiones, pues en el departamento no hubo conflictos colectivos con influencia de agrupaciones políticas diferentes a los partidos tradicionales. La mayoría de los pleitos fueron individuales o en grupos que no reivindicaron acciones políticas distintas al bipartidismo como sucedió con los denominados "pájaros", que eran en su mayoría liberales, organizados para "conservatizar" las cordilleras. Además, para estos autores, el factor común en las guerras civiles, en la violencia de los treinta y en la violencia de los cincuenta, no está constituido por la descomposición campesina, sino por el manejo electoral gamonal y de caciques políticos de las luchas de los colonos y arrendatarios. Es decir, se trató de la manipulación partidista del conflicto agrario.

El auge migratorio —campo-ciudad— producido por las diferentes violencias, y que desbordó en el crecimiento de numerosas ciudades del país, tuvo en el Valle un impacto menos conflictivo, pues la existencia de por lo menos cinco ciudades estratégicamente ubicadas posibilitó una distribución poblacional más equilibrada, sobre todo a partir de 1951 (Ibíd.: 39-43). Sin embargo, a finales de los años sesenta, en el norte del Valle se dio la confrontación de las cuadrillas liberales y las agrupaciones de los "pájaros". Después de la salida el "El Cóndor" de Tuluá, y luego de la dictadura de Rojas Pinilla, los "pájaros" se fueron desarticulando y transformando cada vez más en matones sin identidad partidista. Según Betancourt y García, esta red se mantuvo vigente hasta 1965, pero no desapareció. Por su parte, las cuadrillas liberales se transformaron en bandas con ánimo de lucro, perdiendo el respaldo de sus antiguos protectores y fraccionándose, a diferencia de otras regiones del país donde estas cuadrillas se convirtieron, más tarde, en guerrillas con un proyecto político.

1. Sobre las violencias de los años ochenta y noventa

De acuerdo con Álvaro Guzmán y Renata Moreno (2007: 167 a 171), a mediados del siglo XX, el Valle se consolida como una región con renglones productivos propiamente urbanos, industriales y comerciales muy prósperos y con una fuerte presencia de empresas multinacionales. El desarrollo de la agroindustria del azúcar dio paso a un departamento económicamente diferenciado y complejo, con uno de los índices más elevados de desarrollo en el país. Durante los años setenta el naciente narcotráfico del Valle desarrolla grupos de seguridad privada y de limpieza social que actúan con modalidades de sicariato. En la década de los ochenta, la influencia del narcotráfico genera una nueva fase de crecimiento económico y de modernización fundada en una economía ilegal apoyada en el uso reiterado de la violencia, configurando al narcotráfico, según Fernando Urrea, como actor empresarial y factor determinante en las transformaciones culturales y económicas entre las élites regionales del Valle del Cauca (Urrea, 2002: 252).

Para la década de los noventa, el narcotráfico muestra poder económico y busca reconocimiento como sector de clase dominante y participante del ejercicio hegemónico local. Al respecto comentan Guzmán y Moreno:

> A finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, la mafia valluna, que busca tierras y asegurar el control de zonas de interés, también se enfrenta con la guerrilla, con sectores de izquierda y grupos populares; en sus acciones predomina el interés por lograr controlar tierras y expulsar a la población. […] De tal modo, se gestan y desarrollan variantes de grupos paramilitares dirigidos contra la resistencia campesina y contra la presencia de grupos guerrilleros (ELN y M-19), que desde inicios de la década del ochenta se habían establecido allí. Aunque en principio se trató de pequeños grupos de exterminio controlados por terratenientes y la mafia, paulatinamente se convirtieron en organizaciones delincuenciales mayores cuya dinámica desbordó la acumulación de tierra (2007: 172).

Por su parte, Gustavo Duncan muestra que en varias zonas del Valle los narcotraficantes fueron capaces de desarrollar sus estructuras armadas alrededor de asesinos a sueldo y guardaespaldas (2006: 30). De esta manera, podían ejercer un control territorial e incluso disputar zonas con la insurgencia, como ocurrió entre 1989 y 1993 cuando estructuras armadas del norte del Valle irrumpieron en el Cañón de las Garrapatas, realizando una serie de homicidios dirigidos

a quitar el apoyo que el ELN había logrado establecer en la base campesina, consiguiendo el repliegue de este grupo subversivo —especialmente del frente Luis Carlos Cárdenas.[3]

Estos procesos se dan en medio de la omisión y, a veces, de la complicidad de sectores dominantes de la sociedad vallecaucana y de alianzas y la penetración del narcotráfico en las fuerzas armadas, en las instituciones de administración de justicia y en la vida y las redes políticas del departamento.

De acuerdo con la información de desplazamiento que maneja Codhes, en el periodo 1985-1994 el Valle del Cauca expulsó 2.1% y recibió el 5% del total de población desplazada en Colombia, lo cual muestra su condición principal de departamento receptor en ese momento. Por su parte, la Conferencia Episcopal Colombiana identificó para este mismo período un total de 22.512 personas desplazadas en el Valle del Cauca, ubicándose en el octavo departamento receptor con el 3.84% del total nacional. Además, esta institución encontró que 14.539 personas fueron desarraigadas del Valle del Cauca, ubicándose a nivel nacional como el decimocuarto departamento expulsor, con un 2.48% del total de la población. Durante este periodo se registró una tasa promedio mensual de recepción y expulsión de población desplazada de 187 y 121 personas respectivamente. Es decir, que en estos diez años el departamento del Valle recibió mensualmente en promedio a 187 personas y expulsó a 121 (Salcedo, 2001).

2. De mediados de los noventa al 2004

Después de la lucha librada contra el Cartel de Medellín y de la muerte de Pablo Escobar, el Estado colombiano enfila su lucha contra Cartel de Cali durante el gobierno de Samper. En 1995 captura a los hermanos Rodríguez Orejuela y propina un golpe muy fuerte a esta organización criminal. Sin embargo, rápidamente se desarrollan procesos de reorganización que llevarían al tránsito *de capos a traquetos,*[4] entrando en una competencia interna por el mercado, el predominio sobre las zonas de control y los corredores, así como por el mando sobre las demás estructuras.

[3] Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, *Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle,* Bogotá, Julio de 2006, pág. 24.

[4] Tránsitos a los que de manera extensa se han referido Álvaro Camacho, Andrés López y el mismo Gustavo Duncan. Ver estudio de la Vicepresidencia de la República.

Los sectores de la economía legal del departamento también sufren cambios a raíz de la fuerte crisis económica nacional —mucho más fuerte en el Valle—, la cual tocó fondo en 1999. Adicionalmente, la caída en el precio internacional del azúcar (Guzmán y Moreno, 2007: 174) del café —segundo producto agrícola del Valle—, y de los demás productos de la economía campesina afectan gravemente al departamento. De igual manera desde 1998 los gobiernos territoriales entran en crisis administrativa y financiera y la inversión en obras públicas se desploma.

Respecto a la crisis del café, es importante tener en cuenta que la caficultura se desarrolla en 39 de los 42 municipios del Valle (no hay en Buenaventura, Candelaria y Zarzal), lo que representa alrededor de 22.000 caficultores en el departamento.[5] Y, ante la ruptura del Pacto Mundial del Café en 1989, los precios internacionales empiezan a bajar como hacía muchas décadas no sucedía. En 1994, los precios internacionales como los nacionales comienzan a aumentar, producto de las heladas en Brasil. Sin embargo, la crisis en el país continuó por la no existencia de suficiente volumen del grano y problemas de calidad en el que había (Santa y Pérez, 1997: 27-33). En este período el Valle también experimenta el mayor deterioro del mercado laboral nacional entre 1996 y 1999, su tasa de desempleo pasó de 13.4% a 22.3% (Urrea, 2002: 255).

Entre 1996 y 1999 también se produce una expansión de la guerrilla de las FARC-EP en la cordillera Central, la Occidental y el Pacífico. Este período se corresponde con una baja en la tasa de homicidios en el departamento debido a los operativos militares del gobierno Samper, el sometimiento a la justicia de los capos del Cartel de Cali y los procesos de construcción de nuevas hegemonías entre las organizaciones de narcos.[6]

> Es en este contexto de una actividad ilícita altamente segmentada y con referencias territoriales locales, una actividad económica legal altamente golpeada por la recesión, un Estado en crisis fiscal y con problemas de gobernabilidad y una guerrilla que expande su presencia territorial que en 1999 las AUC llegan al Valle del Cauca (Guzmán y Moreno, 2007: 175).

[5] La información de los 22.000 caficultores fue ofrecida por Héctor Fabio Cuéllar, Director Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca, en entrevista el 15 Julio de 2008.

[6] Para más información sobre las acciones de los actores armados ilegales, ver la tercera parte del documento de la Vicepresidencia de la República.

La llegada de los paramilitares al departamento produce un profundo giro en la dinámica del conflicto al aumentar, de manera exponencial, los asesinatos y los desplazamientos. De acuerdo con Guzmán y Moreno, entre 1999 y el 2004 la tasa promedio de homicidios departamentales estuvo muy por encima de la tasa promedio nacional. Las ciudades con mayores índices son: Buenaventura, Cartago, Tuluá, Jamundí, Yumbo y Florida.

Boris Salazar, María del Pilar Castillo y Federico Pinzón (2007: 337-370) plantean que la guerra es ante todo un mecanismo violento para redistribuir y localizar población de acuerdo a los objetivos estratégicos de los contendientes. El desplazamiento forzado es, por esta razón y sobre la base de una distribución violenta, el mecanismo más efectivo de redistribución de la población para lograr un control territorial.

Según los autores, la distribución territorial de los actores armados en el Valle sigue la forma de U invertida: las FARC se localizan en la cordillera Central y Occidental, en la zona que rodea al corredor del plano central y la zona selvática o montañosa de Buenaventura; también actúa en la zona urbana del municipio y mantiene la guerra con las AUC, las fuerzas regulares del Estado y el crimen organizado. Las AUC actúan en las zonas urbanas y las fuerzas regulares del Estado controlando la actividad guerrillera en las zonas rurales y manteniendo la seguridad en las zonas urbanas. La zona de la frontera agrícola del Valle del Cauca, que se extiende hasta las cordilleras, es vinculada nuevamente a la guerra debido a la violenta irrupción de las AUC entre 1999 y 2000 tenía como objetivo excluir a las guerrillas de las zonas de alto valor económico.

Aunque los homicidios disminuyeron en el departamento desde 2002 las tasas siguen siendo superiores a la media nacional. Una de las consecuencias de este intrincado conflicto armado, como se vio en el apartado anterior, es el desplazamiento forzado, que implica vulneración simultánea de varios derechos. El Valle del Cauca se sigue caracterizando por ser principalmente receptor. No obstante, a partir del 2000 se intensificó la expulsión de desplazados: entre 1998 y 2006 hubo 82.782 expulsiones y 116.329 recepciones; entre 2000 y 2001 fue uno de los principales departamentos expulsores del país, para caer a la séptima posición en 2002. En 2003 fue el departamento del país con más recepciones, y el tercero en 2006. Las comunidades afrocolombianas e indígenas han sido las más afectadas por el desplazamiento (De Roux, 2008).

3. Entre el 2005 y la actualidad

La desmovilización de los bloques Calima y Pacífico de las AUC, como sucedió en otras zonas del país, no fue total ni definitiva. Los vínculos de estas organizaciones con el narcotráfico en la región hicieron posible el restablecimiento, el fortalecimiento o la creación de otras organizaciones criminales. Sin embargo, la desmovilización le dio un nuevo aire a las FARC-EP en su intento por recobrar el dominio que tenía en varias zonas del departamento, principalmente en las zonas montañosas del centro y noroccidente el departamento, en el Cañón de las Garrapatas y las cercanías del municipio chocoano de San José del Palmar.

Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se ha incrementado la presencia de la Fuerza Pública y de sus operaciones en el departamento, principalmente en el norte del Valle y, en particular, en el Cañón de Las Garrapatas. Sus acciones se han concentrado en la persecución de los narcotraficantes a los que se han propinado fuertes golpes, impactando sus finanzas, su aparato militar y su capacidad de movilidad.[7] Estas acciones llevaron a la captura de Diego Montoya ("Don Diego") y a la muerte de Wilber Varela ("Jabón"), y a un duro golpe a sus organizaciones criminales: "Los Machos" y "Los Rastrojos", respectivamente. Además, se ha producido una importante recuperación del territorio, interrumpiendo algunos corredores, desmantelando campamentos y manteniendo combates contra los grupos subversivos.

Sin embargo, en el la zona del Pacífico y especialmente en Buenaventura se han incrementando de forma exponencial los homicidios y acciones de terror como resultado del enfrentamiento de organizaciones de narcotraficantes, grupos paramilitares y guerrilleros, sin que las instituciones del Estado ni su fuerza pública hayan logrado controlar la situación.

De acuerdo con el "Plan Integral Único Departamental", de la Oficina Gestión de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca, retomando información de la Red de Solidaridad Social, se muestra que para el año 2005 el Valle ocupa el quinto puesto en recepción de población en situación de desplazamiento y Cali se configura como el principal receptor de este tipo de población. Para diciembre de 2006 el municipio que presenta mayor población en situación de desplazamiento, incluyendo retornados, es Buenaventura con 45.257, seguido por Cali con 38.851 personas. Y, según datos del Observatorio

[7] Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, *Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle,* Bogotá, Julio de 2006, *op. cit.,* pp.. 54-62.

para la Paz, se estiman en 46.000 las personas que residen en zonas en riesgo de desplazamiento.[8]

Según Codhes, Consejería para los derechos humanos y el desplazamiento, en el primer semestre de 2008 el Valle del Cauca recibió 14.229 personas desplazadas. Cali ocupa el cuarto lugar en recepción en Colombia con 7.819 personas; Buenaventura el puesto 27, con 2.997 personas; Tuluá el puesto 52, con 692 personas; Palmira el puesto 78, con 505 personas y Jamundí el puesto 88, con 398 personas.[9]

En este período es importante destacar que las acciones de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe han conducido a un nuevo repliegue de las FARC-EP. Este hecho está acompañado del desprestigio y rechazo general hacia esta organización, producto de acciones como la bomba ubicada frente al edificio de la Policía en Cali en abril de 2007, atribuido a esta guerrilla; y del asesinato, en junio de 2007, de 11 de los diputados que esta organización tenía secuestrados desde abril del 2002, entre los hechos más destacados.

4. Notas sobre el reclutamiento forzado

En el informe exploratorio "Prisioneros combatientes" de abril de 2008, Natalia Springer muestra el sustantivo incremento del uso y reclutamiento de niños y jóvenes en el conflicto armado de Colombia, como parte de una agresiva respuesta al planteamiento de las Fuerzas Armadas. Entre los departamentos que registraron los más altos niveles de riesgo y vulnerabilidad de uso y reclutamiento se encuentra el Valle del Cauca, al lado de Putumayo, Arauca, Meta, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Antioquia, Guaviare y Cauca. Aunque el reclutamiento y uso de niños y jóvenes actualmente se está urbanizando, se trata de un fenómeno mayoritariamente rural, relacionado con la crisis del agro en el país.

La mayoría de los padres de los niños y jóvenes, consultados en el estudio citado, se dedicaba a la agricultura (66,1%), aunque muy pocos reportaron propiedad sobre la tierra que trabajaban. Las madres generalmente se desempeñaban como amas de casa (59,6%) y muchas cumplen con dobles funciones o asumen actividades adicionales para obtener ingresos extras para la familia.

[8] Plan Integral Único Departamental. Oficina Gestión de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca, Cali, Octubre de 2007

[9] Codhes informa. Boletín Informativo No. 74, Bogotá 25 de septiembre de 2008

En el nivel del combate, el 68,7% de la muestra eran hombres y el 31,3%, mujeres, pero las proporciones se invierten al nivel de la milicia, auxilio y cooperación. Los niños y jóvenes, por lo general, ingresan a una organización que les es conocida porque sus integrantes circulan por la zona o porque, entre ellos, hay amigos o familiares. La mayoría pertenecen a familias numerosas, de extracción campesina, cuya estructura medular cambia regularmente por cuestiones de supervivencia económica, situando a los niños y jóvenes en una situación de alto riesgo. La experiencia de desplazamiento eleva exponencialmente el riesgo de reclutamiento (Springer, 2008: 5-9).

III. Semillas de desarrollo y paz, descripción de la experiencia

1. Antecedentes

Antes de iniciar el programa de Jóvenes Agricultores (JAV), las organizaciones de cafeteros venían preocupadas por los bajos niveles de relevo generacional en el sector y la migración de los jóvenes caficultores a las ciudades. Después de salir de la escuela o de las Concentraciones de Desarrollo Rural de la Federación, los jóvenes eran prácticamente expulsados a la ciudad al no encontrar opciones laborales en el campo. Para contrarrestar esta situación, el Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca adelantó diferentes iniciativas como las siguientes:[10]

- *Proyectos productivos en el interior de las Concentraciones de Desarrollo Rural.* En las granjas se crearon las condiciones para que los jóvenes estudiantes desarrollaran proyectos productivos. Se les ayudaba a gestionar créditos para el cultivo y la cosecha para que los jóvenes ganaran afecto por el trabajo del campo y tuvieran entradas extras de dinero. Esta iniciativa no prosperó porque, según los motivos expresados por la institución, los profesores no estaban muy comprometidos con la experiencia.
- *Proyectos productivos en fincas familiares (cesión de tierras*). Con esta iniciativa se lograron acuerdos para que los padres de familia cedieran parte de su terreno a los jóvenes para el cultivo de tomate, cebolla, ají o café. La Federación gestionaba créditos para que los jóvenes sacaran adelante

[10] Entrevista con Roberto Pizarro Mondragón, antiguo director del Comité Departamental de Cafeteros y actual director de la Fundación Carvajal. Abril 15 de 2008.

> la siembra y la cosecha. En este proceso nacional se crearon las AFA: (Asociaciones de Futuros Agricultores de Colombia). Sin embargo, este proyecto tampoco se mantuvo porque se presentaron conflictos familiares, como celos y desconfianza entre padres e hijos, relacionados con la entrega de los terrenos.

De acuerdo con los relatos de los jóvenes del programa, al salir de estudiar de las concentraciones sólo algunos de ellos "contaban con la suerte" de quedarse trabajando en el campo haciendo, según sus palabras, lo que más les gustaba: trabajar la tierra. Se empleaban como recolectores de fincas vecinas o ayudando en las labores de las parcelas familiares. En otras ocasiones trabajaban manejando ganado o, en pocos casos, como administradores de fincas.

Pero lo anterior sólo sucedía en el mejor de los casos, pues la crisis en el gremio era bastante fuerte, y muchos de ellos tuvieron que desplazarse a las cabeceras municipales en busca de mejores opciones laborales, en donde desarrollaban trabajos en la construcción, o de bodegueros, mensajeros, aseadores y en actividades similares.

> […] estuve trabajando seis meses en una empresa de construcción. Yo salí egresado de un colegio comercial de La Cumbre. Entonces, pues me salió un trabajo allá y me fui a experimentar. Y la verdad es que no me fue bien… yo me crié acá en el campo y no me acostumbré a la ciudad, así que volvía al campo. Allí fue donde empecé a trabajar de cuenta mía, y la experiencia en la ciudad no fue muy buena.[11]

> […] yo me ganaba $25.000 semanales y ya tenía una esposa, y tenía que pagar arriendo. La verdad, los primeros dos años viví con la ayuda de familiares. Después me fui despegando y con algo de conocimiento de la ciudad ya manejaba moto. Pero era muy duro, comenzaba a las 5 a.m. llevando unos niños a una guardería. En la tarde iba a recogerlos, luego llegaba a trabajar en la noche y terminada a las 9 ó 10. A lo último el patrón de verme volteando ya se compadeció y me aumentó un poquito, ya eran $50.000 a la semana. Pero igual yo añoraba volver al campo.[12]

[11] Joven agricultor, 1, La Cumbre.
[12] Joven agricultor, 2, Jamundí.

Otra de las opciones posibles era vincularse a organizaciones armadas: el ejército, la guerrilla, los paramilitares, o entrar a trabajar en actividades ilícitas del narcotráfico.

> Me regresé para la finca y tampoco había empleo, mi papá estaba muy mal económicamente. La violencia estaba recrudecida allá, todo el mundo andaba saliendo, todo el mundo quería dejar todo botado. Gracias a Dios nosotros no nos habíamos visto envueltos en problemas de esos pero sí estaba el temor de los paramilitares, porque la guerrilla estaba acordonando la zona para no dejar entrar los paramilitares, y se decía que venían combates. […] y ya por el miedo de que la guerrilla estaba reclutando gente porque tenían que enfrentar a los paramilitares, ya se me llenó la cabeza de muchas cosas, de que la guerrilla ya estaba ahí, a cada rato los veía pasar y atacaron el puesto de policía que había en Villa Colombia y eso fue horrible. Y empecé a ver que los muchachos se estaban yendo, unos para la ciudad, otros a raspar coca, y entonces al no haber plata, al no haber como ayudar a mi familia, me convidaron de otro pueblito a irnos para el Cauca a trabajar con coca […].Entonces, todo el mundo dice: no, hágale, y no habiendo más soluciones, yo arranqué.[13]

Pero después de haber crecido y vivido tanto tiempo en el campo y de haber probado suerte en la ciudad —costosa, ajena, peligrosa—, los jóvenes confirmaron que su futuro estaba en el campo:

> […] uno está enseñado en el campo a que usted vive aquí y no tiene que ir a comprar todo. En la ciudad si usted no tiene plata se jode, usted para salir tiene que tener plata, si va a comprar cualquier cosa, todo es plata. Uno está enseñado en el campo que usted va donde el vecino, si usted necesita un racimo de plátano va donde el vecino y él le hace el café, es muy diferente.[14]

> Yo me crie en el campo, con mi papá en el tema del café y luego me salí a la ciudad para ver que salía, pero las cosas allá son muy difíciles, si uno no está bien preparado académicamente es muy difícil. Entonces, me devolví para la finca.[15]

[13] Joven agricultor, 1, Jamundí.
[14] Joven agricultor, 2, Jamundí.
[15] Joven agricultor, 3, Jamundí.

Las memorias y testimonios de los jóvenes muestran, por una parte, una gran movilidad entre el campo y la ciudad, no sólo en municipios y regiones cercanas sino también en otras más distantes, pero dentro del país. Por otra parte, subrayan el anhelo y deseo permanente de los hombres de volver al campo.

2. Diseño y establecimiento del programa Jóvenes Agricultores

En el marco de la crisis cafetera de 1997 y 1998, que no se esperaba fuera tan larga y profunda, se da el inicio del programa Jóvenes Agricultores del Valle del Cauca (JAV), con los siguientes objetivos: buscar que los jóvenes del campo se quedaran allí; contribuir a la disminución de los niveles de migración hacia los centros urbanos y adoptar ofertas tecnológicas por parte de los mismos, mediante la implementación integral de un modelo de reforma agraria en las zonas rurales cafeteras del Valle del Cauca.[16]

Ese así como para 1997 se crea un modelo experimental que involucra familias jóvenes campesinas para otorgarles tierras productivas para el cultivo del café.[17] Las fincas son distribuidas entre los beneficiarios con un promedio de cinco hectáreas por familia y, desde un comienzo, la granja es habitada de manera compartida por los jóvenes con sus respectivas familias. Pero el Programa no se limita a entregar la tierra, sino que brinda asesoría técnica, social y administrativa por medio del apoyo y acompañamiento permanente de trabajadores sociales e ingenieros agrónomos, con el fin de crear altos niveles de convivencia y de realizar las acciones necesarias para la puesta en marcha de una unidad productiva competitiva. El acompañamiento se mantiene por un tiempo prudencial mientras los nuevos caficultores pueden hacerse cargo de sus fincas. Este período de tiempo ha variado dependiendo de la fase en que se encuentre cada proyecto.

El Programa se inicia con las fincas cafeteras de "La Castilla", en La Cumbre, y "El Mirador", en Buga, con un total de siete familias beneficiarias. En el momento de realizar el estudio el programa estaba presente en 15 municipios

[16] Federación Nacional de Cafeteros. Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca. Proyecto Jóvenes agricultores. Enero 2000. Pertenece al Archivo de CENCOA. Código 340B2. Proyecto Jóvenes Agricultores – General. Año: 1999-2002 (224).

[17] Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales —CRECE—. Programa Jóvenes Agricultores. Evaluación de impacto socioeconómico. Informe final para discusión. Manizales, Colombia, 2004.

del Valle del Cauca distribuidos en 28 grupos, los cuales atienden un total aproximado de 155 familias. Aunque la mayoría de los programas son de cultivos de café, existen 95 hectáreas de caña en Sevilla y Ansermanuevo repartidos en cinco grupos y beneficiando a un total de 20 familias (ver anexo 1, página 98).

Luz Adriana Ramírez, una de las asesoras sociales del proyecto y quien era la persona con más tiempo en el programa JAV, cuenta que las primeras fincas fueron conseguidas por la Federación con caficultores que tenían deudas con ellos. Así era mejor para los caficultores quienes veían el trato como la venta de la tierra y no como una medida del Comité que afectaba sus fuentes de trabajo.[18] Roberto Pizarro Mondragón, el entonces director del Comité de Cafeteros, cuenta de donde surgió tal idea:

> […] los agricultores empezaron a atrasarse en los pagos con los bancos y arrancó un proceso de búsqueda de alternativas para que pudieran pagar […]. Y un día se me apareció un caficultor de La Cumbre, un viejo líder, entró a mi oficina con la señora, cerró la puerta, se me sentó y se derrumbó y me dijo: yo estoy quebrado […]. Y yo le dije, espere a ver qué hacemos. Y empezamos a ver. Él tenía dos fincas y la conclusión a la que llegamos era vender una finca, entregársela al banco. No la podía vender porque nadie se la compraba en esa crisis. Porque si no lo hacía así los intereses le iban a absorber la otra también. Pero además, a los bancos, por principio, no les gusta recibir fincas porque no es el trabajo de ellos […]. Entonces, yo inmediatamente, como teníamos a flor de piel lo de los muchachos, le pedí una cita al presidente del Banco Cafetero.

Pizarro también es claro al mostrar que, debido al conflicto existente sobre la tenencia y uso de la tierra en el Valle, este proyecto no se podía realizar en terrenos costosos cercanos a los grandes centros de distribución, sino que debía hacerse en zonas más marginales. César Medina, coordinador del Programa, comenta que una hectárea en el Valle del Cauca puede costar entre 10 y 20 millones de pesos, y con los precios tan elevados es muy difícil "qué un proyecto productivo legal se puede aplicar para que se recupere el costo de inversión".[19]

---

[18] Entrevista con Luz Adriana Ramírez, asesora social de CENCOA y la funcionaria más antigua del programa Jóvenes Agricultores. Febrero 29 de 2008.

[19] Entrevista con César Medina, Coordinador del Programa Jóvenes Agricultores, funcionario de CENCOA. Febrero 20 de 2008.

Anexo 1: Cuadro Informativo Constitución del Programa de Jóvenes Agricultores*

Anexo No. 1									
PROGRAMA JOVENES AGRICULTORES									
MUNICIPIO	GRUPO	No. Familias	Propietarios	Arrendatarios	Año de inicio		ETAPAS		
						Tipo de Cultivo	Conformación	Desarrollo	Autonomía
ANSERMA-NUEVO	La Selva	8	X		2002	Café			X
	La Primavera	8	X		2002	Café			X
	El Roble	4		X	2003	Café			
ARGELIA	Los Naranjos	6	X		2004	Café			X
BUGA	Santa Lucía	9	X		1999	Café			X
	El Mirador	3	X		1999	Café			X
CAICEDONIA	Las Ninfas	10	X		2001	Café			X
	La Graciela	8	X		2002	Café			X
	San Gerardo	4	X		1999	Café			X
DAGUA	La Arabia	6		X	2005	Café			
EL AGUILA	El Rocío	4	X		2002	Café			X

EL CAIRO	Chinchiná	4	X		2003	Café			X
	Albán	5	X		2007	Café	X		
JAMUNDÍ	La Lorena y Borinquen	3	X		2004	Café		X	
LA CUMBRE	La Castilla	4	X		1998	Café			X
	La Morelia	15	X		2008	Café	X		
OBANDO	La Esperanza	4		X	2004	Café			
SEVILLA	Higuerones	6	X		1999	Café			X
	San Marcos	3	X		1999	Café			X
TRUJILLO	La Sirena	8	X		2003	Café			X
TULUA	Samaria	3	X		2004	Café		X	
VERSALLES	La Unión	1	X		2000	Café			X
YOTOCO	Santa Polonia	5	X		2003	Café		X	

***** Además de 24 grupos que trabajan con cultivos de caña (para un total de 95 usuarios).
Datos actualizados a marzo de 2008.

Acompañamiento social y técnico

El acompañamiento depende administrativa y técnicamente del Comité de Cafeteros, pero la coordinación social la realiza CENCOA, quien hace parte del Programa de Fomento Cooperativo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Hay dos tipos de asesores para cada grupo: uno técnico y otro social. Por ello no se trata de un estricto acompañamiento técnico, sino algo que ellos denominan *acompañamiento de extensión*, el cual busca generar un proceso de desarrollo de las comunidades de todo tipo.

> No es que estemos amarrados solamente a la transferencia de tecnología, eso es solamente un componente de la metodología que nosotros llamamos de extensión, esa es la diferencia en lo que tradicionalmente es el acompañamiento técnico.[20]

El seguimiento y acompañamiento permanente y de mediano plazo es considerado por la mayoría de los participantes de este proceso como garantía para su buen desarrollo y éxito. Sin embargo, esta perspectiva no se ve que corresponda con las políticas y prácticas de las instituciones del Estado, que no apoyan este tipo de estrategias y se concentran en la siembra y producción.

> […] el problema no es sembrar, es hacer agricultores. La siembra es algo que hace parte del proceso. El factor crítico es el acompañamiento decreciente. Lo de nosotros es claro, al año dos o tres ya nos vamos yendo porque hay que irse para otro lado. Y así tiene que ser para que la gente se vaya empoderando y el Comité esté de salida.[21]

Actualmente, tras reformas hechas al programa, la asesoría y asistencia técnica, administrativa y financiera se realiza con mayor intensidad en las primeras etapas del proyecto, disminuyendo gradualmente al 50% en los 3 y 4 años y el 25% en el último año, como una estrategia para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.[22] En el acompañamiento social se trabajan los siguientes componentes:[23]

---

[20] Entrevista con César Medina.

[21] Entrevista con Roberto Pizarro Mondragón.

[22] Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales -CRECE. Programa Jóvenes Agricultores. Evaluación de impacto socioeconómico. Informe final para discusión. Manizales, Colombia, 2004.

[23] CENCOA, Unidad de Desarrollo – Área Social. Evaluación planes de acción año 2006.

- *Medio ambiente y desarrollo*: se trabaja por medio de estrategias de sensibilización sobre la importancia del cuidado y preservación de medio ambiente y la gestión de proyectos y manejo de conflictos ambientales.
- *Desarrollo socio–empresarial*: las estrategias acogidas por este eje incluyen la implementación de proyectos productivos con las familias beneficiarias, así como la estimulación a la producción de alimentos y al aprovechamiento de los mismos.
- *Convivencia y participación*: en este componente se desarrollan estrategias de promoción y posterior participación de los jóvenes en instancias de participación comunitaria, social y política, a la vez que se trabaja en la capacidad de gestión en el campo asociativo, cooperativo y gremial en procura del fortalecimiento del tejido social. También se trabaja en la creación de reglamentos de convivencia en el interior de los grupos, así como en el fortalecimiento de la recreación y la comunicación en el interior de las familias.
- *Desarrollo con perspectiva de género:* este se ha concentrado en el fortalecimiento del proceso grupal de las mujeres promoviendo el desarrollo de sus potencialidades colectivas e individuales para la consolidación del componente de género en el programa.

Existen seis asesores técnicos y seis asesores sociales para los programas Jóvenes Agricultores en el Valle del Cauca, quienes mensualmente deben pasar informes sobre las actividades desarrolladas en cada uno de los grupos.

3. Implementación y desarrollo del programa

Por tratarse de un modelo experimental de reforma agraria, con el paso del tiempo y de las experiencias y aprendizajes construidos, se han realizado varias modificaciones. Los objetivos, etapas, metodología y perfil de los beneficiarios han cambiado debido a múltiples factores como la experiencia y las necesidades de los diferentes grupos, la relación con entidades externas y la evaluación desarrollada al proyecto por parte del Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales, CRECE, en el año 2004. En general, los participantes del proceso identifican tres etapas en el desarrollo del Programa, que se corresponden con los procesos de integración de los grupos de jóvenes:

Etapa I: 1997-2001

En esta primera fase los procesos son mucho más largos, pues al ser pioneros en un modelo experimental indiscutiblemente se presentan dificultades que no se habían anticipado. En este momento el 100% de la tierra la debe pagar el beneficiario y su fiador es el Comité Departamental de Cafeteros. De acuerdo con la política del Programa, los beneficiarios deben pagar los préstamos que se les hacen, porque nada allí es regalado. Sin embargo, el tema financiero fue uno de los asuntos que más problemas generó en esta primera etapa. En este período el programa trabaja alrededor de tres fases: *conformación, consolidación y desarrollo.*

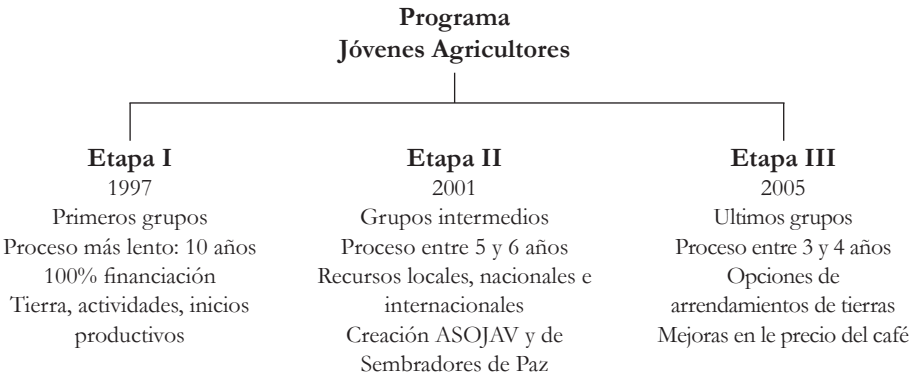
Etapa II: 2001-2005

En el año 2001 ingresaron nuevos grupos al programa. La experimentación permitió modificar aspectos de la metodología, por lo cual el proceso total de los grupos puede durar entre cinco y seis años. Por otra parte, el tema de la financiación, que fue tan relevante en la fase anterior, se atenuó con la búsqueda de recursos externos nacionales e internacionales, estos últimos no reembolsables. En esta etapa se produce la creación de ASOJAV, la Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle (creada en el año 2001 con 34 asociados miembros de diferentes grupos del programa) y en el 2002 se diseña e implementa el Proyecto de Sembradores de Paz con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación internacional —AECI—, a través de la Fundación Cánovas del Castillo.

Etapa III: 2005 hasta la fecha

Esta fase es considerada como de consolidación y reajuste del programa. En este período y gracias a los aprendizajes de los grupos pasados, los procesos se han acortado a tres y cuatro años. Frente a las dificultades de compra de tierras, se recurre a la opción de arrendamiento, que implica el manejo conjunto de un predio a 12 años, el cual tiene como objetivo la generación de empleo. En esta etapa hay un cambio sustantivo en la metodología donde las tres fases se ajustan alrededor de la: *conformación, desarrollo y autonomía.*

La mirada de este estudio a la experiencia de Jóvenes Agricultores se concentra en las etapas II y III, por tratarse de los períodos en los que el programa asume un papel en la superación del conflicto en el Departamento y en evitar el reclutamiento armado ilegal.



El informe del CRECE plantea que el programa ha tenido tres fases en relación con su financiación.[24] En la primera fase (1997-2000) la coordinación y financiación estuvo a cargo del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca. En la segunda (2001-2002), la coordinación estuvo en manos del Comité con una cofinanciación por parte del INCORA. En la tercera, el programa contó con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación internacional para ejecutar el Programa "Sembradores de Paz". Es de resaltar que la cooperación financiera internacional incluyó la capacitación y asistencia técnica y social para los beneficiarios del programa en sus anteriores fases.

4. Mirada en detalle a las etapas II y III

Mientras en la primera etapa (1997 y 2001) el énfasis del programa estuvo en el relevo generacional y en la generación de empleo, desde la segunda, éste se caracteriza por el reconocimiento de sus aportes a la construcción de la paz. En esta línea hay tres aspectos que se destacan: a) el reconocimiento de la importancia del conflicto y el desarrollo del proyecto de Sembradores de Paz; b) el interés en implementar una dimensión de género y c) la decisión de trabajar con una modalidad de arrendamiento de tierras, frente a la dificultad de compra de nuevos predios.

El proyecto mantiene su propósito de desarrollar un proceso de aplicación del modelo de reforma agraria que dé solución al problema de la pequeña y mediana caficultura; y el objetivo de convertirse en alternativa de empleo y desarrollo para

[24] CRECE, *op. cit.*, p. 96.

hombres y mujeres jóvenes del campo, con resultados efectivos en las siguientes áreas del desarrollo: social, técnico, económico, administrativo y ambiental.[25]

Con los grupos más recientes se ha adoptado una nueva metodología, en donde la fase de autonomía marca un proceso menos paternalista. Por otra parte, se encuentra la financiación externa, nacional e internacional, de la cual se genera una evaluación de impacto socioeconómico por parte del CRECE en el año 2004.

Para el Comité Departamental de Cafeteros y CENCOA, el conflicto armado no fue una de las causas que generó el proyecto, pero a medida que éste se desarrollaba, se daban cuenta de su incidencia en la prevención del reclutamiento y del desplazamiento. Al tiempo que propone alternativas de empleo frente a los cultivos ilícitos.

> No podríamos decir que el objetivo principal fue disminuir o darle oportunidad a las personas involucradas en el conflicto armado, pero si a través de los procesos de selección uno se va dando cuenta que esto es una oportunidad para prevenir el reclutamiento de los jóvenes. Hoy estamos pensando que el programa ayuda a evitar el reclutamiento y a abrir espacios para que los jóvenes tengan otras opciones de vida.[26]

> Si uno revisa el contexto, que tiene que ver con grandes desplazamientos en el Valle del Cauca, si uno tiene un arraigo tan grande alrededor de la caficultura, y la organización gremial se constituye en un interlocutor y el acompañamiento social y técnico hace que el grupo se cohesione, de tal forma que permanezca y sea capaz de administrar buena parte de las dificultades que hay alrededor del conflicto, sin querer decir que no hay gente que se tuvo que desplazar, yo diría que fueron unos pocos los que se desplazaron en las zonas cafeteras en el Valle.[27]

Este enfoque se hace mucho más claro en el momento en que a Jóvenes Agricultores se vincula el programa Sembradores de Paz de la Federación Nacional de Cafeteros, el cual busca atender poblaciones rurales pobres campesinas e indígenas

[25] Federación Nacional de Cafeteros. Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca. Programa Jóvenes agricultores. Santiago de Cali, 2005. Pág. 2, 5.

[26] Ximena Porras, coordinadora social del proyecto Jóvenes Agricultores, funcionaria de CENCOA. Febrero 20 de 2008.

[27] Entrevista Héctor Fabio Cuéllar, Director Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca, Julio 15 de 2008.

con el objetivo de mejorar su calidad de vida en cuanto a educación, nivel de ingresos, necesidades básicas y la implementación de acciones educativas y productivas que aporten a la construcción de una cultura de paz.[28] Dentro de este programa, el enfoque sobre el conflicto es indispensable.

> A mí me tocó hacer programas en zonas crítica y ex profeso nos metimos allí […]. El problema de las zonas críticas de violencia es que, todo el mundo empieza a salirse. Nosotros nos metimos allá y buscábamos tierra donde había problemas, donde habían paramilitares, guerrilla porque era la única forma de sembrar. Ese programa una parte lo financió el gobierno español, y se llamó Sembradores de Paz, porque tenía esa connotación. Nosotros necesitábamos sembrar paz en las zonas críticas.[29]

Como se puede observar el programa les ha servido a los jóvenes como "blindaje" para evitar integrarse a las filas de grupos armados ilegales, e incluso, para abandonarlas. Un ejemplo de esto se vivió en La Cumbre en medio del robo de gasolina del oleoducto que pasa cerca del municipio. Según comentan los participantes, algunas familias cafeteras se desplazaron por la violencia que se vivía en el lugar, puesto que los paramilitares llegaron a sacar de la zona a la guerrilla. Sobre el robo de combustible, ellos comentaron:

> Si usted se ganaba 80 mil pesos semanales aquí metiendo el hombro y uno de ellos ganaba 100 o 200 mil pesos la noche, entonces la gente decía, o me voy a echar el abono o me voy a ganármela en una noche también.[30]

> Es que nosotros trabajando aquí sin trabajadores en ese tiempo, trabajando hasta más tarde para poder cumplir con las labores y uno veía que la plata estaba allí al frente. Es que allí cargaban y descargaban, allí dejaban las tinas, los tarros, eran tarros de galón.[31]

Con la llegada de los paramilitares a esta zona la situación se hizo más complicada. Otro joven expone cómo el Programa los protegía del conflicto:

---

[28] Federación Nacional de Cafeteros. Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca. Programa Jóvenes agricultores. Santiago de Cali, 2005. Pág. 104-108.

[29] Entrevista Roberto Pizarro.

[30] Joven agricultor, 2, La Cumbre.

[31] Joven agricultor, 1, La Cumbre.

> […] Cuando hubo el enfrentamiento que dicen los muchachos fue cuando aparecieron los paramilitares. Entonces llegaron a pelear la zona y ahí si fue cierto… igual cayó mucha gente de la zona que era buena gente y cayeron acusados de colaboradores. Eso fueron dos, tres años muy duros. La ventaja fue que nosotros gracias a Dios por ser del proyecto nunca nos metimos con ellos ni ellos con nosotros, eso fue una ventaja. […] Por ejemplo, a mí si me dijeron una vez que les prestara la moto y yo sí les dije a uno de los jefes de la guerrilla, nosotros no podemos prestar la moto porque nosotros pertenecemos al proceso de acá con la Federación, y nos perjudicaban, y gracias a Dios en esta finca nunca se llevaron una moto ni se vinieron a quedar acá, porque ellos llegaban y se quedaban en cualquier parte. […] Gracias a Dios por ser del proyecto de Jóvenes Caficultores nosotros les hablábamos y siempre nos respetaron.[32]

Otro joven plantea que la disminución de las agresiones es producto del diálogo directo con los actores armados y que las vallas ubicadas fuera de las fincas, que identifican al programa "Sembradores de Paz", daba mayor claridad de que el proyecto era apoyado por la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que los actores armados reconocen y respetan:

> […] les decíamos que ellos nos perjudicarían a nosotros porque si nosotros hacíamos un asentamiento acá nos podrían sacar del proyecto por colaboración o alguna cosa y eso fue lo que siempre les explicamos y ellos siempre respetaron eso. Y también la Federación para esa época sacó esas vallas que tenemos allí al frente, que dice que no es una finca de un particular sino que es de un proyecto, porque en la finca de mi papá a cada rato llegaban y amanecían y hacían de todo. Y aquí no… de aquí para allá los veíamos pasar pero aquí en la finca gracias a Dios no.[33]

Los muchachos explican que desde hace cuatro años la situación en la zona ha mejorado y ya no existe tanta violencia ni zozobra. Plantean que el proyecto es una opción para evitar el reclutamiento:

> Este proyecto como tal ha servido mucho porque aquí cosechan 30, 40 familias que están gozando de trabajito y son dos, tres meses, prácticamente 6 meses en el

[32] Joven agricultor, 2, La Cumbre.
[33] Joven agricultor, 3, La Cumbre.

> año cuando hay cosecha […]. Este proyecto como tal y el que se abrió arriba ha servido mucho para emplear a la gente. El hecho de que la gente esté empleada trabajando no le da tiempo de ponerse a pensar en otras actividades… pero se pegaron de ese bendito tubo y en dos años el municipio se volvió nada. Pero ha vuelto como a recuperar la tranquilidad.[34]

Otro joven del Programa, quien trabajó como *raspachín* (recolector) de hoja de coca para un hacendado que tenía ubicada su finca en una zona dominada por la guerrilla, plantea que su decisión no fue completamente voluntaria, sino que fue forzada por las condiciones del campo. Él mismo plantea que su ingreso en el Programa le salvó la vida:

> Muchas de las zonas cocaleras y de las zonas que están dañadas es porque el campesino no ha tenido otra opción, no le han dado otra oportunidad, usted sabe que la coca es lo más fácil para uno ganar plata, si usted se mete al cultivo del café es a luchar contra viento y marea, contra todo, y no va tener las mismas ganancias, mientras que usted siembra una mata de coca por ahí, así sea que la limpie no más, no le hace nada y ahí le está dando. Si el campesino se pone a meterse en cultivos largos lícitos, el gobierno lo deja abandonado o le trabaja a los intermediarios y ellos son los que se la llevan todo, en cambio con lo ilícito, entre comillas "hay muchas ventajas", porque si usted quiso vendió la hoja o como quiera y ya no tiene más nada que ver. Y la verdad muchas cosas que han pasado en los campos es porque han faltado unas políticas de seguridad social a fondo y que de verdad haya inversión social, haya acompañamiento por parte de todas las entidades.
>
> Una vez aquí en una reunión con el trabajador social me preguntaron, usted cómo se vería en este momento si no estuviera en este programa. Yo le dije a eso le puedo dar dos respuestas: en este momento, tendría el doble de plata de lo que tengo ahora, menos responsabilidad y estaría con mucha plata o estaría muerto ya, porque ese es un negocio muy arriesgado. [35]

Este interés del Comité de Cafeteros y CENCOA sobre el conflicto armado se puede ver reflejado en una "Propuesta de formación y capacitación de liderazgo campesino en el marco del proyecto Jóvenes agricultores", del año 2002, en el que se planteaba lo siguiente:

[34] Joven agricultor, 1, La Cumbre.
[35] Joven agricultor, 1, Jamundí.

> De acuerdo con un análisis de los trabajadores sociales y participantes del programa, se detectó que existe necesidad de formación en aspectos políticos y de formación ciudadana. Lo anterior debido a que el conflicto en la zona rural tiende a recrudecerse. Es así como se plantea este programa cuyo objetivo es proporcionar a los jóvenes herramientas teórico-prácticas para el análisis y la gestión de desarrollo local con énfasis en el manejo del conflicto social.[36]

Las temáticas que se proyectaron abordar fueron: liderazgo juvenil; participación ciudadana, política, social y comunitaria; democracia y derechos humanos; las políticas de descentralización; formulación de proyectos y la gestión de financiación; la familia y la comunidad en el contexto del conflicto; los jóvenes y el conflicto armado en Colombia; partidos políticos; región y localidades; la violencia en Colombia; la pobreza en Colombia; y resolución de conflictos. Aunque no se tiene conocimiento que se haya implementado esta propuesta de formación, la definición y planeación da cuenta de cómo el tema del conflicto armado hacía parte de las preocupaciones del programa en esta época.

Características del Programa

Como se vio más atrás, la primera etapa del proyecto tuvo tres fases: Selección de predios y beneficiarios, sensibilización y consolidación, pero estas etapas no proponían un distanciamiento claro de los asesores. Fue así como se planteó la necesidad de una reformulación, que incluyera un proceso decreciente de asesorías. En el año 2006, cuando el proceso se encontraba más adelantado, el equipo del área social del proyecto estableció unas características necesarias para que los jóvenes ingresen a la etapa de autonomía, como son la estabilidad grupal e individual, la capacidad de autogobierno y la conducción del grupo con determinación, claridad de objetivos, metas, metodologías, procedimientos grupales y estabilidad económica. Para esta fase también es necesaria la capacidad de autoevaluación crítica, la discusión y reevaluación.

También se propuso que para llevar a cabo el proceso de autonomía era necesario recopilar información para hacer un diagnóstico de cada grupo teniendo en cuenta aspectos como: la calidad de vida de la familia y el grupo, la capacidad de asociación y el desarrollo humano.[37]

---

[36] CENCOA, Unidad de desarrollo, área social. Propuesta de formación y capacitación de liderazgo campesino en el marco del proyecto Jóvenes agricultores. Cali, 2002, pp. 6-7.

[37] CENCOA, Equipo del área social del proyecto. Programa Jóvenes agricultores. Propuesta

En el momento de la realización del estudio el Programa ha establecido las siguientes etapas:

Conformación: En donde se realiza la compra o alquiler del terreno, la escogencia de los beneficiarios, la introducción y planeación técnica, financiera y social (con una duración aproximada de seis meses).

Desarrollo: En donde se realiza la gestión y seguimiento de recursos financieros, la instalación y seguimiento de proyectos productivos, el fortalecimiento del tejido social, la implementación del plan ambiental y el fortalecimiento organizacional y comercial (duración aproximada de 24 meses).

Consolidación y autonomía: en donde se da la verificación de la aplicación de actividades productivas, ambientales y de fortalecimiento del tejido social (duración aproximada de 12 meses). [38]

Uno de los Jóvenes Agricultores comenta cómo fue su experiencia en la etapa de conformación. Para distribuir los lotes después de intentar un consenso y no llegar a un acuerdo, se tomó la decisión de hacer un sorteo.

> Ya después de que quedamos los cinco nos presentaron la finca, allí tenemos la posibilidad de si queríamos o no retirarnos. Y seguimos. No presentaron la finca y los lotes y nos pusieron en un consenso a ver quién quería cada lote. Bueno, los gustos eran varios y no llegamos a un acuerdo, entonces se hizo un sorteo, se enumeraron los lotes del uno al cinco y el que sacaba el uno le tocaba el lote uno […].Varios que quedaron con el lote que querían […]. Yo quería otro lote, entonces llegamos a un sorteo y cada quién quedó contento con el suyo. Y bueno, yo creo que fue suerte, gracias a Dios no me ha ido mal, esa fue la suerte que me tocó a mí.[39]

Es importante anotar que en el Programa se busca que los jóvenes lleguen a consensos que fortalezcan el proceso del grupo reconociendo las diferencias de las familias (conformación, número y edad de los hijos, cercanía a las escuelas y vías de acceso). Una vez hecho el sorteo, se desarrollaron capacitaciones para que los nuevos dueños pudieran tener herramientas para el manejo de su tierra. Los siguientes testimonios muestran cómo son las responsabilidades de

---

de autonomía. Componente social. 2006.

[38] Federación Nacional de Cafeteros. Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca.. Programa Jóvenes agricultores. Santiago de Cali, 2005. Pág. 8.

[39] Joven agricultor, 1, Yotoco.

acuerdo con las etapas del proceso y cómo van ganando autonomía a medida que avanzan en su proceso:

> En la primera etapa hay mucho susto pero también compromiso. En la mitad de la etapa ya se va uno consolidando, porque sí somos capaces, porque ya ve que los cultivos progresan. Y ya en esta etapa en la que estamos, en autonomía, uno ya se siente muy capacitado por todo el recorrido. Ya le dicen a uno que no van a regresar más, que ya somos cafeteros normales, y a uno lo asusta mucho. Pero ya uno tiene muchas nociones para manejar el proyecto. O sea que ha sido bueno.[40]

> Cuando íbamos a hacer cualquier cosa teníamos que preguntarle al agrónomo si era, y la duda, de cuántos centímetros, gramos, y todos íbamos aprendiendo allí. Y hoy por hoy cuando tenemos alguna duda, le preguntamos al ingeniero, si no... pues ya diez años son bastante para darse cuenta qué es lo que hay que hacer.[41]

ASOJAV

La Asociación de Jóvenes Agricultores se creó debido a la preocupación de los grupos por responder con el pago de las deudas que habían asumido, tanto para pagar el porcentaje que les correspondía del valor de los predios asignados, como para cumplir con los préstamos de capital de trabajo. Su objetivo era "mejorar la calidad de vida de los asociados, de las familias y sus comunidades, mediante la obtención y comercialización de productos de excelente calidad, respetando el medio ambiente".[42]

Al inicio recibieron apoyo del Programa y de organizaciones internacionales que centraron su ayuda en asuntos de logística para enfocar su trabajo en la consecución de recursos. Cuando la mayoría de los asociados terminó de pagar sus predios, la Asociación se enfocó en otros asuntos, como en los componentes técnicos y de infraestructura, y en los de carácter social con énfasis en equidad de género, medio ambiente y convivencia.

La asociación tiene 87 integrantes y una junta directiva conformada por nueve personas que se rotan cada dos años. Los jóvenes agricultores pueden vincularse a esta organización tan pronto empiezan a producir y comercializar

[40] Joven agricultor, 3, La Cumbre.

[41] Joven agricultor, 3, La Cumbre.

[42] Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle – ASOJAV. IX Asamblea general ordinaria de asociados. Informes de gestión y financiero. Tuluá, Valle, Marzo de 2008.

café. La Asociación ha hecho posible la participación de varios de sus integrantes en espacios nacionales e internacionales de jóvenes agricultores, cafés especiales y comercio justo que han ampliado sus líneas y ámbitos de acción.[43]

ASOJAV también realiza actividades para conseguir recursos que puedan invertir en procesos para mejorar la calidad de vida de los asociados. Para facilitar esta labor realizaron la petición ante Fairtrade Labelling Organizations (FLO, para su sigla en Inglés), para agilizar el estudio y aceptación en el registro FLO, que es una certificación internacional de calidad del café.

Es importante mencionar que dentro de la Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle —ASOJAV— se trabaja el enfoque de género. Esto se logró porque una miembro de la Junta Directiva se interesó por el tema:

> El proyecto de jóvenes está contemplado como tal en documentos. Yo me di cuenta porque a mí me llamó la atención y necesitaba saber hasta dónde podía llegar y ahí dice lo de la perspectiva de género, pero cuando yo veía difícilmente encuentra uno una mujer en cargos directivos, y me gustó ese tema. Y con el problema que tenía con un compañero lo volví como un reto personal.[44]

Fue así como se creó el Comité Femenino de ASOJAV, el cual tiene como objetivo incentivar en las mujeres actividades alternas de financiación como son manualidades para hacer bordado en blusas, bisutería y macramé, seguridad alimentaria con cárnicos, frutas y lácteos, y otras actividades. Sin embargo, según comentan los integrantes del Comité, el proceso se está debilitando porque no se ha logrado consolidar su trabajo.

Aprendizajes y ajustes

En el año 2004 se implantó la modalidad de arrendamiento en sectores donde no es posible la compra de tierras, la cual consiste en la explotación de predios con el objetivo de permitir la reactivación socioeconómica, la generación de empleo y el mejoramiento de los predios.[45] Este proceso se ha carac-

[43] Jóvenes de ASOJAV han participado en eventos como *Primer congreso mundial de jóvenes agricultores*, París, Junio de 2002; Feria de cafés especiales, Bostón, Abril de 2003; Asamblea anual de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, México, Abril de 2003.

[44] Representante 2, ASOJAV.

[45] Federación Nacional de Cafeteros. Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca. Programa Jóvenes Agricultores. Santiago de Cali, 2005, pp. 101-104.

terizado por un fuerte trabajo en grupo, de liderazgo y coordinación debido a que las fincas no se lotean sino que se trabajan en conjunto. Las experiencias de arrendamiento se dieron en El Roble, municipio de Ansermanuevo; La Arabia, en Dagua; y La Esperanza, en Obando. Todos ellos con cultivos de café.[46]

De acuerdo con los testimonios de los coordinadores y asesores, en un primer momento, el Programa no fue tan estricto en la selección de los beneficiarios. La evaluación realizada por el CRECE en el año 2004 también recomendaba hacer mayor énfasis en el proceso de selección poniendo atención en la edad y nivel educativo de los aspirantes. Así en el proyecto reformulado del año 2005 se decidió ampliar la edad de los aspirantes a 32 años, que era antes de 22 a 28 años. Otro de los cambios fue dar prioridad a jóvenes casados y con hijos, para garantizar mayor estabilidad. Respecto a los últimos procesos de selección, César Medina comenta:

> El último proceso de selección que hicimos con el grupo de la Morelia tuvo varios cambios, con el fin de llegar a una selección más objetiva y menos subjetiva. Y lo hicimos a través de unos indicadores y la observación de unos comportamientos y actitudes. Esta fue la primera vez que lo hacíamos; esta construcción la hicimos desde la parte técnica, desde los servicios de extensión con los ingenieros agrónomos, trabajadores sociales y los tres coordinadores (social, jóvenes y cafés especiales), y la psicóloga clínica. Hicimos un taller que se demoró dos días y lo hemos mejorado para seleccionar a las personas que de verdad quieren estar allí y quieren que el programa sea parte de su proyecto de vida. En la Morelia ya los tenemos seleccionados: son 15 familias.[47]

Uno de los beneficiarios de la fase II comenta sobre su experiencia:

> El perfil solicitado era de una persona que fuera del campo o que le gustara el campo[…] que no tuviera el pensamiento de ir a la ciudad a buscar un empleo, más que todo eso era lo que nos decían. Por lo menos las personas que eran estudiadas les preguntaban que si ellos con el estudio que tenían, si les resultaba un trabajo importante en la ciudad o en el pueblo, dejarían la finca abandonada. Por lo menos yo contestaba que no, que mi sueño era tener algo propio. Que yo prefería la finca a conseguir un trabajo bueno… era el perfil de gente trabajadora.[48]

[46] Luz Adriana Ramírez.
[47] Entrevista con Cesar Medina, febrero 20 de 2008.
[48] Joven agricultor 3, Yotoco.

La evaluación realizada por el CRECE entre el 2004 y 2005, también identificó que era necesario hacer un diagnóstico en la zona de la oferta laboral y de la infraestructura como escuelas y puestos de salud para garantizar que no haya deserción de los beneficiarios. Por otra parte, el CRECE hizo un reconocimiento sobre los avances en el tema social al implementar normas de convivencia entre los grupos de familias pertenecientes a una misma finca, actividades para integrarlos y el que desarrollaran un control social de las normas. También propuso pautas de sistematización y se acordaron formatos para recoger información sobre los reportes psicológicos y hacer mayor seguimiento a las familias para evaluar su proceso. Otro de los cambios propuestos y acogidos fue el desarrollo del componente ambiental en el proyecto.

> Las críticas se han ido atendiendo porque con nosotros llegaban a hacer experimentos y a medida que nosotros íbamos embarrándola se iban acomodando otros proyectos y fue como un ciclo. [Un ejemplo fue] la finca que se recibió en muy mal estado, ya hoy se ha mejorado, ya buscan fincas productivas. Porque es muy difícil encontrar una finca que toda esté en café para repartírsela. Es muy difícil pero ya hay proyectos productivos a los que entran compañeros a generar ingresos para poder subsistir. Nosotros antes llegamos a sembrar toda esta finca y esperar dos años a punta de créditos para poderlo volver a esto. Y hoy por hoy se ha mejorado mucho.[49]

El Programa JAV se convirtió en referente de una nueva iniciativa de carácter nacional desarrollada por la Federación de Cafeteros. De acuerdo con la información brindada por Héctor Fabio Cuéllar, Director de el Comité Departamental de Cafeteros, el programa del Valle del Cauca seguirá avanzando hacia una caficultura sostenible en lo económico, en lo social y lo productivo, desarrollando proyectos integrales con manejo medioambiental ubicados en microcuencas para aportar en tres aspectos:

> […] uno, al calentamiento global; dos, al tema del agua, que será factor importante porque el agua nace, no en los páramos, sino en la zona cafetera; y tres, para conseguir productos medio ambientales… así un productor cafetero tendrá y venderá su café especial, participará en algunos de los programas productivos, pero con los productos medioambientales tendrán nuevas oportunidades".

[49] Joven agricultor 2, La Cumbre.

IV. Empoderamiento individual y colectivo, logros y dificultades

Uno de los logros más importantes enunciados por la fuentes consultadas está representado en la propiedad de la tierra, que, como se verá más adelante, tiene para los integrantes del programa, para las comunidades donde este se desarrolla y para otros actores locales, una significación especial en términos de autoestima, identidad, autonomía y poder. Sin embargo, la división y otorgamiento de las parcelas no ha resultado un problema menor por las diferencias en la calidad de la tierra, acceso al agua, cercanía a las vías de trasportes y posibilidades de acceso y construcción de vivienda que este proceso implica.

Otro logro está relacionado con la obtención de la productividad de los proyectos, no dependientes únicamente del café. La productividad hace posible el pago de créditos y deudas adquiridas por los jóvenes agricultores y la mejoría de la calidad de vida de sus familias. También es muy importante para la generación de empleo en las zonas donde se está desarrollando el programa.

> […] un muchacho que inició con nosotros hace 8 o 10 años, inclusive algunos de 7 o 6 años, tienen más patrimonio que un profesional. Con una gran diferencia que si uno revisa las condiciones de vida de ese muchacho en el campo, en lo afectivo, en lo familiar, son mucho mejores que las de un profesional en la ciudad, entonces económicamente tiene mejores condiciones. Además, familiar y socialmente yo pienso que están mejor que cualquier profesional en cualquier sitio.[50]

La participación de los jóvenes y el impulso por parte de ellos a la creación de espacios colectivos y organizaciones comunitarias es otro logro relevante del proyecto, entre ellos ASOJAV. Aunque estos procesos han logrado mantenerse por fuera de las cadenas y circuitos clientelistas, y de los favores políticos, la participación de los jóvenes aparece muy limitada a organismos y dinámicas de carácter comunitario y del gremio cafetero. Por ejemplo, los jóvenes no se han vinculado a otros procesos de organización juvenil, ni a otras organizaciones y movimientos del sector agrícola u otras expresiones culturales, políticas y sociales, que podrían favorecer no sólo el desarrollo económico de sus proyectos, sino los procesos de integración social y de fortalecimiento de su ciudadanía. Además, la participación en espacios más amplios y diversos son definitivos para enfrentar las coyunturas

[50] Entrevista Héctor Fabio Cuéllar, Director Comité Departamental de Cafeteros Valle del Cauca, Julio 15 de 2008.

propiciadas por el conflicto y la presencia de actividades y negocios ilícitos en las zonas donde están ubicados los proyectos. A este respecto uno de los integrantes del "Club de amigos del café" en el grupo de Jamundí expresó:

> Para mí falta mejorar, como comunidad yo creo que tenemos que apuntarle a proyectos más grandes y ser mucho más unidos, mas organizados, porque así se captan más ayudas y más recursos, hasta ahora la comunidad ha ido adelantando trabajos que valen la pena, pero falta más unión, más diálogo, mas personal capacitado para hacer proyectos macro, para toda la comunidad, eso creo que nos hace falta, hacernos sentir como un proyecto mucho más grande, hay instituciones que nos han estado apoyando a nivel local pero sería mejor pensar en proyectos para toda la comunidad.[51]

Desde su segunda fase el programa Jóvenes Agricultores ha mostrado mayor sensibilidad por el enfoque de género. Para el año 2003 se planteó una propuesta que buscaba el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de la capacidad de asumir un rol protagónico en el proceso a través del desarrollo humano, el fortalecimiento grupal y comunitario, la formación política y ciudadana, y el desarrollo económico a través de alternativas productivas.

La evaluación de impacto socioeconómico del CRECE del año 2004 y la evaluación de Planes de Acción del año 2006, plantean algunos avances alcanzados en el tema de género como la propiedad de un grupo importante de mujeres, el mejoramiento de las relaciones familiares a partir del apoyo interroles, el desarrollo de proyectos productivos por parte de las mujeres cuyo resultado económico es para beneficio propio, y el establecimiento de alianzas interinstitucionales. Sin embargo, todos los actores vinculados coinciden en anotar que todavía no se ha trabajado con fuerza en el Programa, ni se le ha dado la importancia que merece por parte de las mujeres y hombres de los grupos. Tampoco se ha logrado desarrollar una perspectiva que involucre a mujeres y hombres, y que tenga en consideración tanto acciones diferenciales, como de solidaridad de roles e identidades.

Otro logro, anotado principalmente por los coordinadores y asesores del programa, está en la mejoría de los procesos de selección de beneficiarios, que ha redundado en mayor estabilidad de los proyectos y en la calidad y el ritmo en el desarrollo de sus componentes y fases.

[51] Joven agricultor 4, Jamundi

Entre las dificultades más destacadas encontradas en la indagación, están los problemas de convivencia que se han dado en el interior de los grupos de cada proyecto. Estos problemas han sido producto del compartir la misma vivienda y por las diferencias generacionales y de los niveles de educación.

Por otra parte, la llegada de los jóvenes a las granjas donde se desarrollan los proyectos, no se ha producido sin resistencias ni reacciones de rechazo por parte de la comunidad. Los principales motivos expuestos por gente de la comunidad son: los privilegios de los que gozan sus integrantes, la desconfianza que produce la llegada de gente extraña, la juventud de los integrantes de los proyectos y el reclamo por no incluir en la selección gente de la zona. Varias comunidades consultadas expresaron, además, tener escasa información y conocer poco los procesos y proyectos del Programa.

Recuperar las fincas y la productividad de las mismas es visto como uno de los momentos más difíciles del programa, por la vejez y las enfermedades de los cafetales, por la no existencia de otros cultivos y productos, y por la falta de herramientas y de experiencia para administrar las fincas.

El acceso a créditos y financiación externa sigue siendo considerado como un problema mayor, sobre todo "cuando hay poquito café", y si se tienen en cuenta las fluctuaciones de los precios del grano y los recientes efectos de la reevaluación en la agricultura. Además, por fuera del acompañamiento y asesoría por parte del Comité de Cafeteros y CENCOA, los jóvenes se sienten profundamente olvidados y desamparados por las instituciones locales y nacionales en términos de protección social, salud, educación y transporte.

A pesar de la mejoría en la situación, la presencia del conflicto y de actores armados e ilegales en sus zonas no deja de producir bastante preocupación. En este sentido, se ve la necesidad de desarrollar más herramientas para el reconocimiento y análisis de las dinámicas que se viven en sus zonas. También es importante que el Programa muestre con mayor claridad los análisis que realiza sobre los problemas del departamento y las coyunturas locales. De igual manera, es necesario dar visibilidad a las formas como se relaciona con esas problemáticas y con el desarrollo regional, y que presente (ojalá con datos e información cuantitativa y cualitativa), los aportes que hace para solucionarlos.

Entre las dificultades halladas por los coordinadores y asesores se encuentra el temor al endeudamiento, la precariedad en la gestión para acceder a recursos económicos de otras instituciones y la falta de estrategias de comercialización de los productos.

También la falta de lineamientos ambientales del programa en el área técnico-social, la deficiente conciencia ambiental, el inadecuado manejo de basuras y la poca posibilidad de recolección en la zona. Asuntos en los que se ha venido trabajando de manera conjunta, pero que merecían mayor atención y diseño de estrategias más efectivas.[52]

Un asunto clave relacionado con el desarrollo de capacidades de los jóvenes, está en retomar la preocupación por su formación social y política (que no sólo se logra con base en la capacitación). Es necesario fortalecer tanto la capacidad de negociación, gestión y participación de los jóvenes del proyecto, como de las organizaciones campesinas y los actores locales. Porque por su falta de poder adquisitivo y político, las dificultades en el acceso a créditos, su bajo nivel educativo y los precios inflados de la tierra, los pobres rurales terminan necesitando de *intermediarios* tanto para acceder a subsidios y servicios complementarios, como para la participar en procesos sociales y para tramitar sus demandas como ciudadanos y sujetos de derechos (Höllinger, 1999).

V. Conclusiones

> Estas zonas han sufrido y han soportado mucho, y es de admirar la valentía que tiene la gente para volver al campo, para volver a su tierra después de que le han matado familiares, le han matado amigos, tíos, hermanos, pero aun así, vuelven y están en la lucha…, pero lo que yo siempre pienso es que estas zonas son muy olvidadas por el gobierno y falta apoyo real a los campesinos. El campesino en realidad es la base de la economía del pueblo colombiano y es el que menos favorecido está, el que menos inversión social tiene, menos vías, infraestructura, y son las personas más resignadas, más aguantadoras, las que más luchan por seguir ahí, por no olvidar sus raíces, pero lo que yo siempre he dicho, a Colombia le hace falta una reforma agraria de verdad y con apoyo de verdad que le ayude al campesino a salir adelante.
>
> El campo podría volver a ser muy bueno, porque el campo es muy bueno, pero falta mucho apoyo, más profundización de políticas verdaderas y no solo políticas porque muchos decretos salen pero no se aplican, muchas cosas que en realidad le sirvan al campesino, a veces son cosas muy útiles y muy sencillas, que no necesitan de bautismos ni de proyectos de ley, pero que al menos se vea que al campesino le están dando la importancia que en realidad tiene.[53]

[52] Central de Cooperativas Agracias -CENCOA. Unidad de Desarrollo – Área Social. Evaluación planes de acción año 2006.

[53] Joven agricultor 4, Jamundi.

Con ocasión del lanzamiento del libro *El derecho y la globalización desde abajo*, Boaventura de Sousa Santos indicaba que para muchas personas de Colombia el hecho de sobrevivir ya representaba un acto de resistencia. Sin embargo, aunque la sobrevivencia es condición de posibilidad para el desarrollo de capacidades y competencias, ella en sí misma no garantiza la búsqueda y construcción de bienestar, de una vida buena, con la variedad de significaciones que ello implica para personas, comunidades y sociedades diversas como las colombianas.

En su texto titulado *Vive y deja matar: lecciones de supervivencia a la colombiana*, Boris Salazar (2001) sostiene que los años de conflicto armado y de anarquía creciente, han generado un orden espontáneo, producto de la adaptación y del aprendizaje de los colombianos en los últimos cincuenta años. Sin embargo, para Salazar, hablar de orden y organización no implica la aparición espontánea de un orden legítimo. Para él, se trata del surgimiento de un orden precario, en el que predomina la adaptación para asegurar la supervivencia, fundamentado en unos arreglos sociales y unas organizaciones que están marcados por la violencia, la coerción armada y los contratos e intercambios realizados en medio de la incertidumbre.

El autor citado también argumenta que en medio de estas circunstancias adversas los agentes racionales tienden a seguir estrategias que privilegian un comportamiento depredador organizado, o a negociar formas de acomodamiento a la estrategia depredadora predominante, y que estas estrategias tienden a imponerse y a desplazar a las de cooperación.

Otros analistas y estudiosos de la región también sustentan que el proceso modernizador y de desarrollo del Valle está fundado en un modelo de "arriba hacia abajo" y que el departamento tiene una trayectoria de construcción de lo "estatal y lo público" desde arriba y precaria, con una élite porosa, que se resquebraja y da lugar a nuevos sectores sociales sin tradición de manejo estatal-legal, en donde grupos armados ilegales han agenciado formas de violencia de distinto origen, con objetivos diferentes, pero que se entrecruzan (Guzmán y Moreno, 2007: 233 y 234).

La pregunta que surge frente a estas hipótesis y demostraciones es ¿cómo romper, cómo socavar, estos órdenes y dinámicas, que, de acuerdo con la información y datos presentados en el contexto de este caso, no favorecen un desarrollo humano equitativo, justo y sostenible en el departamento?

Las claves para superar el conflicto y construir la paz en la región deberían responder a la complejidad y al tamaño de los problemas planteados en el contexto presentado antes. Ello implicaría tener en consideración, entre otros aspectos, asuntos

de orden estructural como de orden subjetivo. Además, debería considerar, logros, dificultades y aprendizajes que puedan ser útiles para resolver problemas, económicos y políticos, pero también culturales y simbólicos en el corto, el mediano y el largo plazo.

El programa de los jóvenes agricultores, por supuesto, no es la respuesta a la pregunta lanzada más arriba. Sin embargo, sí arroja claves que pueden servir tanto a la resolución de situaciones cotidianas, que aseguran la sobrevivencia, como a abonar el terreno para la búsqueda de una vida mejor, sobre todo para sectores tradicionalmente excluidos y vulnerables.

En este sentido, el Programa de JAV como los grupos y personas que lo componen, han desarrollado y probado un modelo de distribución y uso de la tierra que aporta herramientas para la reflexión y la búsqueda de alternativas de una reforma agraria, desde una visión renovada de la misma. De igual manera las trayectorias y aprendizajes del Programa y de los jóvenes que lo componen han mostrado que esta es una iniciativa efectiva para prevenir y desestimular el reclutamiento y la vinculación de jóvenes a los grupos armados ilegales y a actividades ilícitas y criminales. Así lo demuestra la información consultada, las entrevistas y las observaciones realizadas y los análisis desarrollados en este trabajo.

Se podría argumentar, como efectivamente lo escuchamos en este proceso de indagación, que un Programa como este, diseñado y agenciado por un gremio, percibido por algunos actores sociales como parte de los sectores dominantes de la región, puede representar una estrategia de recomposición y reconstrucción del poder perdido por estos sectores frente a otros agentes legales e ilegales. O que se trata de acciones para mantener el *statu quo*, que no responden a las transformaciones estructurales requeridas en la región y el país. Más aún, si se tiene en cuenta que en el departamento hay una larga tradición de experiencias y prácticas filantrópicas, consideradas por analistas regionales como maniobras o tácticas de control y contención social.

Estas reflexiones y preocupaciones deben ser tenidas en cuenta tanto por los promotores y participantes del proyecto, como por quienes realizamos este análisis. Reflexiones y preocupaciones que plantean, además, la necesidad de estudiar y analizar con mayor profundidad y cuidado las relaciones y los impactos de las experiencias y prácticas filantrópicas en la región, tanto en el desarrollo de capacidades y competencias individuales y colectivas, como en los procesos de organización y movilización social y en la formación y participación política y ciudadana en el departamento.

Pero, ¿en dónde están los secretos, las claves, para sostener que ésta es una experiencia (institucional y grupal) significativa que puede contribuir a superar el conflicto armado y a construir la paz en el Valle del Cauca, en Colombia y quizá en otros lugares? Esas claves están en una serie de asuntos interrelacionados a saber:

- En el fortalecimiento de la autoestima y la identidad campesina y cafetera de los jóvenes.
- En el restablecimiento de la confianza vecinal y en el desarrollo y reorganización de espacios de trabajo y acción comunitaria.
- En el desarrollo de proyectos agrícolas que además de contribuir a la seguridad alimentaria, sean viables y sustentables.
- En la reactivación de circuitos económicos comunitarios y locales.
- En el reconocimiento social y en el soporte brindado por la Federación Nacional de Cafeteros y su vínculo con las organizaciones cafeteras del departamento como CENCOA.

Estas claves han hecho del programa un ejemplo que ha sido replicado en otras regiones del país por organismos de la Federación de Cafeteros y ha servido de inspiración para el diseño y desarrollo de proyectos regionales como los de Vallenpaz y, también, de otras organizaciones nacionales e internacionales.

Claves del estudio de caso

Reconstruir y recuperar la autoestima y su identidad como jóvenes campesinos, lograr el reconocimiento y el respeto de sus familias, de la comunidad y de organizaciones e instituciones locales, ha sido el fundamento para redefinir sus planes de vida y para diseñar y empezar a realizar proyectos colectivos. También se ha convertido en referente para interactuar e interlocutar con otros sectores sociales e incluso para confrontar a los armados.

Las experiencias y sensaciones de dependencia y falta de autonomía en relación con padres y familiares; las historias de la falta de oportunidades y los fracasos en los intentos por buscar un empleo y mejores condiciones de vida, moviéndose entre el campo y la ciudad; y las sensaciones que experimentaron en los contextos urbanos por su falta de pericia en el manejo de la ciudad al sentirse como un "Don Nadie", habían afectado profundamente su amor propio, su dignidad y orgullo.

La propiedad de la tierra, las responsabilidades al frente de una empresa agrícola, la posibilidad de aprender e innovar en técnicas agropecuarias, el reconocimiento de su trayectoria y conocimientos de campesinos y la posibilidad de expresarse y relacionarse con otros agentes sociales, que se han encontrado en el proceso, les ha brindado el soporte para "sentirse dueños de sí mismos" y de su propio destino. Todas estas oportunidades se han convertido en el terreno para recrear su autoestima y sus identidades como campesinos y caficultores, y como jóvenes. También ha contribuido para desarrollar su capacidad crítica y su sentido y reconocimiento como ciudadanos:

> […] se siente muy bien, rico, que ya la tierra es de uno, esa es la ventaja en trabajar lo que es de uno, para nuestro propio beneficio. Ahora hay que mantener deudas para poder mantener el cultivo, es algo que es un patrimonio para la familia, que ninguno de nosotros lo tenía hace 10 años, y creo que no se nos pasaba por la cabeza tener una finca como la que tenemos hoy. Porque usted sabe que adquirir tierra es costoso y con esta oportunidad pudimos llegar a ser algo, porque sino yo creo que todavía no estaríamos en esto. Yo no sé qué estaríamos haciendo.[54]

Estos *soportes* les han abierto las puertas al reconocimiento y legitimación local, los ha empoderado y ha contribuido para que los integrantes del programa ganen capacidad y experiencia de negociación con otros pares y vecinos, con representantes de instituciones del Estado y de organizaciones políticas, con bancos y organizaciones de cooperación nacional e internacional, y por supuesto, con los actores armados legales e ilegales. Con estos últimos, en particular, han conseguido arreglos que, además de lograr mínimas garantías a sus vidas y las de sus familias, han incluido el respeto de sus propiedades, de su intimidad y de sus actividades cotidianas:

> […] uno ya había escuchado en otras zonas que pasaba la guerrilla y después pasaban los paramilitares e iban acabando con justamente toda la gente que era colaboradora. Pasaban, de pronto aparecían una noche, al otro día no aparecían pero uno se da cuenta que[…] eso fue. Mucha gente cayó en la zona por eso, porque de pronto conoció a la guerrilla, tenía conocido a dos cuadras y ya eso. Eso fue muy duro, muy difícil. Entonces nosotros teníamos la fortaleza de decirles…[55]

[54] Joven agricultor 3, La Cumbre.
[55] Joven agricultor 1, La Cumbre.

Por otra parte, los jóvenes se han encontrado con zonas golpeadas por la violencia, con una precaria presencia institucional (educación, salud, protección social, créditos, asesoría técnica), y con altos niveles de desocupación y de movilidad de gente en busca de oportunidades entre el campo, los municipios aledaños y las ciudades más grandes del departamento. Estas circunstancias han generado miedo, desconfianza e incertidumbre, que se ha traducido en aislamiento y destrucción del tejido social por varios años.

La presencia de los jóvenes y de los proyectos productivos en las zonas donde se ubica el programa, ha favorecido el restablecimiento de la confianza vecinal y el desarrollo y reorganización de espacios de trabajo y acción comunitaria ligados a las actividades del campo, como: proyectos de acueductos veredales, de electrificación rural o de mantenimiento y cuidado de vías y cañadas. De igual manera, ha contribuido a la rehabilitación del trabajo de Juntas de Acción Comunal y de asociaciones culturales y deportivas, y ha favorecido la creación de nuevos espacios locales como los de los amigos del café o del mismo proceso de la asociación de jóvenes agricultores (ASOJAV).

Estas acciones y escenarios los han puesto frente a la discusión y a las prácticas relacionadas con asuntos de interés público, que a su vez implican interacciones con instituciones y organizaciones locales y departamentales, favoreciendo sus representaciones y prácticas como ciudadanos. Se trata de la construcción de lo público que pasa por lo comunitario.

> Allá se ha trabajado mucho lo que son mingas las carreteras están malas, propongámosle al Alcalde: ¿usted qué aporta? y hagámoslo. Lo mismo se hizo con la recuperación de la microcuenca que es el pilar que nos tiene, ah, porque la gente comenzó a dañar el monte y nosotros nos quedamos sin agua. Entonces un proyecto grande que se masificó que unió más la comunidad fue ese de la cuenca y del acueducto. Allá existen grupos pequeños que se reúnen a rezar o grupos de fútbol, cosas pequeñas que hacen mejor la vida cotidiana.[56]

Como los núcleos primarios de los proyectos son las familias y las agrupaciones de algunas de éstas, los procesos han permitido fortalecer sus interacciones y lazos, no sin problemas y dificultades como se vio más arriba. Estos espacios

[56] Representante 3, ASOJAV.

les han brindado la oportunidad de reconstruir y crear proyectos comunes, que no sólo implican actividades de diseño colectivo sino, también, la construcción de normas de convivencia y la aplicación de estrategias de apoyo mutuo para la siembra, recolección y venta de sus productos. Esto también ha ayudado a su sentimiento de hacer parte de un *proyecto común*.

Aunque los proyectos agrícolas dependen de muy diversas circunstancias (calidad de la tierra, clima, precios, producción, demanda, seguridad, entre otros), el programa ha logrado desarrollar experiencias viables y sustentables que contribuyen a la seguridad alimentaria. Esto se fundamenta, principalmente, en los siguientes factores: los procesos de acompañamiento y asesoría permanente, la tecnificación y diversificación de los cultivos (con cuidado del medio ambiente), el acceso a financiación y créditos, y los esfuerzos en la comercialización (nacional e internacional).

Los aportes de esta experiencia coinciden con los principales problemas identificados en el sector rural: propiedad, crédito, asistencia técnica, proyectos ecológicamente viables, comercialización nacional e internacional, acompañamiento y protección del sector. Por eso, este tipo de iniciativas deben darse a conocer, ser visibilizadas. Pero también es necesario integrarlas a los debates sobre la reforma agraria, y a la búsqueda de construcción de políticas públicas, asuntos que no aparecen suficientemente abordados en el desarrollo de la experiencia.

Los proyectos no solo han representado una mejoría en las condiciones y la calidad de vida de sus participantes, sino que han contribuido a reactivar y dinamizar las economías locales donde se encuentran ubicados. Estos han generado nuevas oportunidades laborales para otros campesinos –pequeños propietarios, arrendatarios de tierras, jornaleros–; han dinamizado el mercado local mediante la compra e intercambio de herramientas e insumos agrícolas, la venta de sus productos (café, plátano, yuca, fríjol, maíz, frutales, gallinas, entre otros), y la prestación de servicios a otras fincas de la zona (productivas y de recreo).

> Es que el café genera mucho empleo. Es que las fincas cuando usted las vuelve ganaderas se acaba el empleo. Un personaje maneja 500 animales. Acá una hectárea de café genera dos jornales permanentes. Estamos beneficiando que el conflicto se aleje del alcance de mucha gente porque si la gente tiene oportunidad de trabajo, pues no le va a interesar entrar a la ilegalidad.[57]

[57] Roberto Pizarro Mondragón.

Otra clave de esta reactivación tiene que ver con la demostración práctica percibida por los campesinos de las zonas de influencia del proyecto, quienes ven que las técnicas y cuidados medio ambientales aplicados por los jóvenes agricultores funcionan y que el café sigue siendo productivo y contribuye a mejorar la calidad de vida de manera integral.

Todo lo anterior no se podría lograr sin la presencia y respaldo institucional de la Federación Nacional de Cafeteros y sus vínculos con el Comité Departamental y con CENCOA. Este respaldo no sólo se relaciona con la eficiencia de su aparato organizativo y con la decisión de mantenimiento del proyecto, sino también con el reconocimiento social y la buena imagen de la que gozan los cafeteros para una mayoría de actores de la región. Esta imagen está soportada en la historia y la tradición cafetera del país (en lo que ha significado el café para el desarrollo económico, institucional y social de Colombia); en las percepciones del sector cafetero, como un sector compuesto primordialmente de medianos y pequeños propietarios, y en la visión del trabajo de la Federación y de los Comités regionales de cafeteros como un trabajo que históricamente ha buscado el desarrollo y la mejoría de la calidad de vida de los cafeteros y sus familias (servicios públicos, salud, educación, organización, cooperativismo).

Las organizaciones de cafeteros han puesto al servicio del proyecto el reconocimiento e incidencia que tienen con instituciones estatales, con otros gremios y sectores económicos, con el sector financiero e incluso con las organizaciones armadas legales e ilegales, como se pudo ver más atrás en los diálogos realizados con ellos para buscar proteger los proyectos. Además, han conformado equipos de trabajo de carácter interdisciplinar, sensibles a la situación del país y de la región, con diversas formas de entender el compromiso social y con capacidad de diálogo y trabajo conjunto con los campesinos.

De todas maneras, es importante no olvidar que estos procesos se desenvuelven en contextos de muy alta volatilidad en los que se han impuesto lógicas de la guerra y el uso de la fuerza para el logro de diferentes fines. Además, el programa se desarrolla en medio de procesos de urbanización del campo y de proyectos agroindustriales de carácter expansivo y de alta concentración de la tierra, que hacen parte de modelos de desarrollo y de acumulación capitalista que se han impuesto. Todo ello no deja de ser una seria amenaza para los primeros avances logrados por una experiencia como esta.

Además, tal y como lo plantea Héctor Mondragón (2002: 22), los proyectos productivos particulares no pueden prescindir de la situación general y resultan inútiles los proyectos individuales independientes que están sucediendo en el país. Los proyectos piloto con todos sus méritos, deben tratar de superar los enfoques aislacionistas dobles, que por una parte experimentan en un costoso laboratorio que trata de separar la vida real, y por otra parte, hacen recomendaciones sin tocar el modelo general. Y aunque el programa de los Jóvenes Agricultores hace un aporte en los asuntos planteados, no podría responder a problemas que requieren, no sólo de la intervención estatal, sino de acuerdos que involucren al sector privado, a la sociedad civil e incluso a los mismos actores armados ilegales.

Con estos argumentos se puede mostrar que, a pesar de las falencias y problemas de este proceso, institucional y grupal, esta experiencia aporta, desde la práctica, elementos para el diseño de propuestas de *reforma rural* que apuntan a visiones renovadas sobre la reforma agraria, que tal y como propone Absalón Machado (1999) deberían considerar que:

> La conformación de una estructura de tenencia y uso de la tierra y de los principales factores de producción, solamente puede ser el resultado de negociaciones y pactos productivos-sociales locales entre propietarios, campesinos e instituciones, y no de una ley centralista del Estado que ordene construir una estructura multinodal.
>
> Más que repartir tierras en el sector rural como un propósito último, hoy es válido repartir oportunidades de ingreso, empleo y seguridad social y crear nuevos mecanismos para el acceso a activos y derechos de propiedad diferentes a la tierra, así como de servicios productivos, el acceso a los mercados y al uso de la propiedad a través del arriendo y otras formas empresariales donde se compartan riesgos en la inversión. Para muchos minifundistas, aparceros y jornaleros sin tierra, es preferible y mejor, en términos de ingresos, vincularse a actividades extraprediales y a contratos de uso de la propiedad donde participen empresarios bajo norma de equidad y convivencia.

Bibliografía

Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle —ASOJAV. *IX Asamblea General Ordinaria de Asociados. Informes de Gestión y Financiero*. Tuluá-Valle, 2008.

BETANCOURT, Darío y García, Martha L., *Matones y cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano 1946-1965,* Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional y Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990.

CAMACHO, Álvaro, "De narcos, paracracias y mafias". En: *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI,* Universidad de los Andes, editorial Norma, Bogotá, 2006.

CENCOA, *Consolidado resultados diagnóstico etapa de autonomía,* informe digital (Consolidado auton05). Feb 2006.

CENCOA, *Etapa de autonomía. Consolidado resultados diagnóstico 2006,* informe digital (Consolidado06). 2006.

CENCOA, *Evaluación planes de acción año 2006*, informe digital (Consolidado evaluación 06), 2006.

CENCOA, *Propuesta de desarrollo integral para las mujeres del programa Jóvenes agricultores y Cafés Especiales*. 2003.

CENCOA, *Propuesta de formación y capacitación de liderazgo campesino en el marco del proyecto Jóvenes agricultores.* Cali, 2002.

CENCOA, *Propuesta de programa de Desarrollo Comunitario aplicado*, s.f. aprox. 2002.

CENCOA, *Programa Jóvenes agricultores. Propuesta de autonomía. Componente social.* 2006.

Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales -CRECE. *Programa Jóvenes Agricultores. Evaluación de impacto socioeconómico. Informe final para discusión*. Manizales, Colombia, 2004.

CIDSE – Universidad del Valle: grupo de investigaciones sobre pobreza y desigualdad. "Calidad de vida, pobreza y desigualdad en el Valle del Cauca: un análisis basado en la Encuesta de Calidad de Vida DANE 2003". Pág. 201–239 en CASTILLO, Luis Carlos (Comp.); *Sociedad y economía: el Valle del Cauca y Colombia. 30 años del CIDSE*. Programa editorial Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2007.

Codhes, "Codhes informa. Boletín Informativo" No. 74, Bogotá 25 de septiembre de 2008.

CORRELLA Hurtado, Arsenio, "Breve Historia de la Reforma Agraria en

Colombia". Parte de *Revista de Ciencias Agrícolas*. Editorial Universitaria UNED, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto. No.1/2 Vol. 141, 1996.

DE ROUX, Gustavo I. "Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacífico. Informe Regional de Desarrollo Humano 2008. Cali, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

DUNCAN, Gustavo, citado por: Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; *Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle,* Bogotá, julio de 2006.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, *Política de Comercialización. Informe del Gerente General 1999–2000. LIX Congreso Nacional de Cafeteros.* Feriva S.A., Cali, 2000.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca. *Proyecto Jóvenes Agricultores*. s.f. Aprox. 2000. Pertenece al Archivo de CENCOA. Código 340B2. Proyecto Jóvenes Agricultores – *General,* 1999-2002 (224).

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca. *Proyecto Jóvenes agricultores.* Enero 2000. Pertenece al Archivo de CENCOA. Código 340B2. Proyecto Jóvenes Agricultores – General. Año: 1999-2002 (224).

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca. *Programa Jóvenes agricultores.* Santiago de Cali, 2005.

FERRO Medina, Juan Guillermo y Uribe Ramón, Graciela, *El orden de la guerra. Las FARC-EP. Entre la organización y la política.* Centro Editorial Javeriano CEJA, Bogotá, 2002.

GARCÍA Vásquez, Demetrio, Informe del secretario de Industrias y Agricultura del Valle, Imprenta Departamental, Cali, 1933, pp. 10 y 11, en: Betancurt, Darío y García, Martha L., Matones y cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano 1946-1965, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional y Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990.

GAVIRIA Carlos Felipe y Muñoz, Juan Carlos, *Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996–2004*, En Lecturas de Economía. N.66 Medellín ene./jun. 2007. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012025962007000100001&lng=es&nrm=iso

GUZMÁN, Álvaro y Moreno, Renata, "Autodefensas, narcotráfico y comportamiento estatal en el Valle del Cauca, 1997-2005", en ROMERO, Mauricio (Editor); *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos.* Serie Conflicto y Territorio. Corporación Nuevo Arco Iris, Cerec y Asdi, Agencia sueca de cooperación internacional para el desarrollo. Bogotá, agosto de 2007.

HÖLLINGER, Frank, "Del mercado de tierras al mercado de reforma agraria", en: Machado, Absalón y Suárez, Ruth (Coord.), *El mercado de tierras en Colombia ¿Una alternativa viable?* Tercer Mundo Editores, CEGA e IICA. Bogotá, 1999.

MACHADO, Absalón, "Una visión renovada sobre la reforma agraria en Colombia", en: Machado, Absalón y Suárez, Ruth (Coord.); *El mercado de tierras en Colombia ¿Una alternativa viable?* Tercer Mundo Editores, CEGA e IICA. Bogotá, 1999.

MONDRAGÓN, Héctor, LRAN, *Colombia o mercado de tierras o reforma agraria*. ANUC UR, Fensuagro 2002 http://www.espaciocritico.com/articulos/mndrgn/mndrgn01tierra.pdf

Oficina de Gestión de Paz y Convivencia, Gobernación del Valle del Cauca "Plan Integral Único Departamental". Cali, Octubre de 2007

Programa de promoción integral de los derechos del niño –PRODER, *Niños, niñas y adolescentes involucrados en conflictos armados;* Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA, Montevideo, 2002.

RAMÍREZ, Luz Adriana, *Consolidado datos sobre manejos medioambientales en nueve grupos del programa Jóvenes Agricultores,* archivo digital (Medio ambiente varios), s.f.

RAMÍREZ, Luz Adriana, *Consolidado datos sobre participación de beneficiarios en diferentes asociaciones,* archivo digital (Participacion), s.f.

RAMÍREZ, Luz Adriana, *Consolidado datos sobre problemáticas de beneficiarios*, archivo digital (Problematicas), s.f.

RAMÍREZ, Luz Adriana, *Consolidado datos sobre proyectos productivos*, archivo digital (PROY. PROD), s.f.

RAMÍREZ, Luz Adriana, *Consolidado datos sobre retiros en el programa,* archivo digital (RETIROS), s.f.

RAMÍREZ Bacca, Renzo, *Formación y transformación de la cultura laboral cafetera en el siglo XX,* La Carreta Editores E.U., Medellín, 2004.

RINCÓN García, John Jairo, *Trabajo, territorio y política: expresiones regionales de la crisis cafetera 1990 – 2002*. La Carreta Editores E.U., Medellín, 2005.

SALAZAR, Boris, "Vive y deja matar: lecciones de supervivencia a la colombiana", en: PAPPACHINI, A. (Ed.); *Guerra y Paz: Una visión desde las ciencias humanas*, Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, Cali, 2001.

SALAZAR, Boris, María del Pilar Castillo y Federico Pinzón, "Guerra y distribución territorial en el Valle del Cauca", pág. 337 – 370, en CASTILLO, Luis Carlos (Comp.); *Sociedad y economía: el Valle del Cauca y Colombia. 30 años del CIDSE*. Programa editorial Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2007.

SALCEDO, Jorge Arturo [2001]. Documento Final del proyecto *"Diseño y ejecución del Sistema de Información Epidemiológica para la Población Desplazada por la Violencia, en los Municipios de Sevilla, Buenaventura, Bugalagrande, Tuluá, San Pedro, Buga, Jamundí: Hacia la construcción de un Modelo Piloto para el Diseño e Implementación de un Sistema de Información de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, en Poblaciones Desplazadas por violencia política",* auspiciado por la Secretaria Departamental de Salud Pública del Valle del Cauca. http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/sdsvalle/default.htm

SANTA Dávila, Augusto y Pérez Castañeda, William, *La crisis cafetera 1989 – 1994: el caso de Sevilla*. Trabajo de grado Universidad del Valle, Facultad Ciencias Sociales y Económicas, Plan de Economía. Cali, 1997.

SPRINGER, Natalia, *Prisioneros Combatientes. Datos del primer informe exploratorio sobre el uso de niños, niñas y adolescentes para los propósitos del conflicto armado en Colombia*. Informe realizado para la Fundación Maya Nasa, Abril de 2008. Tomado de http://www.actualidadcolombiana.org/pdf/Informenatalia.pdf

URREA Giraldo, Fernando, "La respuesta del empresariado vallecaucano a la apertura económica en los años 90 y la recesión hacia finales de la década", pág. 247-284, en Ladrón de Guevara, Carlos Dávila (comp.); Empresas y empresarios en la historia de Colombia siglos XIX-XX, Tomo I, Bogotá, Colombia. Grupo Editorial Norma, Ediciones Uniandes, CEPAL, 2002.

Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; *Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle,* Bogotá, Julio de 2006.

VILLADA Zamora, Néstor Javier; *Efectos de la ruptura del pacto en 1989 en la*

zona cafetera del Valle del Cauca; Universidad del Valle, Facultad Ciencias Sociales y Económicas, Programa Académico de Economía. Cali, 1999.

Páginas web:

www.cencoa.com

www.cafedecolombia.com

Revisión documental:

Archivo de CENCOA. Código 340B2. Nombre. Proyecto Jóvenes Agricultores – General. Año: 1999-2002 (224).

Archivo inactivo de CENCOA. Código 340B2. Nombre. Proyecto Jóvenes Agricultores. Año: 2003-2005. Folder No.2 (263).

Archivo de CENCOA. Código 340B2. Nombre. Proyecto Jóvenes Agricultores – General. Año: 2006.

Capítulo 4

Tensiones del periodismo público frente al conflicto

Ana Lucía Paz Rueda

Introducción

Este documento pretende mostrar de manera completa las características del programa de televisión D3 de Telepacífico, desde el marco de las buenas prácticas para superar el conflicto, siguiendo las propuestas del PNUD. El documento está dividido en cuatro segmentos sustantivos. El primer segmento se describe el contexto general de referencia para el caso, específicamente la relación entre medios de comunicación y opinión pública y el caso de los desaparecidos y desplazados en el Valle del Cauca. En el segundo segmento, se describen los eventos anteriores, que básicamente son los programas previos a la aparición de D3. El tercer segmento describe el programa, sus actores, enfoques, perfiles, recursos técnicos y el uso que los ciudadanos le dieron y, finalmente, un cuarto segmento describe algunas claves que, en sentido positivo o negativo, arroja este caso como proceso que contribuye a la comprensión de la relación entre medios de comunicación regionales y sus aportes a la solución del conflicto. La pregunta central que orientó el análisis del caso es: ¿cuál es el aporte del Canal Regional Telepacífico a la resolución del conflicto, desde la producción y difusión de información por medio de su programa D3?

Otra pregunta importante es: ¿puede afirmarse que Telepacífico, por medio del programa D3, es un mediador informacional entre las víctimas del conflicto? Estas preguntas se apoyan en una hipótesis central: los medios masivos de comunicación se convierten en una plataforma virtual (comunicativa), desde donde se contribuye a la construcción de ciudadanías mediante el intercambio

informacional, en este caso, fundamentalmente en relación con las víctimas del conflicto que viven situaciones de desaparición o desplazamiento.
El estudio de este caso se llevó a cabo a través de técnicas cuantitativas; se utilizaron fundamentalmente técnicas documentales y etnográficas. En primera instancia se realizó una revisión bibliográfica que comprendió la revisión de literatura especializada, de archivos históricos, audiovisuales y de contexto. También se utilizaron documentos (impresos, digitales, de audio y video). Se recurrió a entrevistas semiestructuradas y en profundidad; como a fuentes documentales convencionales (primarias y secundarias): actas, reglamentaciones de ley y comunicados, que permitieron tener un primer bosquejo de la consolidación y desarrollo de estas prácticas.

I. Contexto

1. El concepto de la televisión pública y su función

Entender el papel que juega el programa D3, dentro de la programación del canal regional Telepacífico y en el contexto del Valle del Cauca, requiere ubicarse en relación con lo que significa la televisión pública y el aporte que desde ella se hace a la configuración de espacios públicos de carácter social y político. Este no es un tema simple; el papel de la televisión pública ha generado múltiples debates. Para nuestro contexto nacional, según el Plan de Desarrollo planteado por la Comisión Nacional de Televisión —CNTV—, la televisión pública es considerada como:

> […] aquella de interés social, educativo y cultural que por principio nos fortalece como nación y nos aproxima creativa y productivamente a la sociedad del conocimiento; se ocupa de los asuntos que concierne al interés común y al espacio ciudadano, y que promueve la interacción comunicativa y la participación social con el propósito de formar ciudadanía.[1]

Pero asegurar que ésta se mantenga y cumpla con su papel es una tarea ardua. Sobre ello, Jesús Martín-Barbero, Germán Rey y Omar Rincón plantean que, ante todo, la televisión pública debe interpelar e ir dirigida al ciudadano más que al

[1] Comisión Nacional de Televisión. Plan de desarrollo de la televisión 2004-2007. Por una televisión bien vista. Bogotá, 2004.

consumidor, buscando contribuir a la construcción del espacio público en cuanto escenario de comunicación y diálogo entre los diversos actores sociales y las diferentes comunidades culturales. De igual modo, los autores plantean que debe hacerse cargo de la complejidad geopolítica y cultural de la nación y de trabajar en la construcción de lenguajes comunes, y ser un mecanismo de representación de las voces más débiles: como las minorías culturales y los creadores independientes (2000: 50). El reto de D3 fue lograr que el tema del conflicto y, especialmente, el fenómeno de la desaparición y el desplazamiento, permearan al ciudadano y contribuyeran a construir opinión pública y sensibilidades sociales frente a estos problemas, desde las singularidades culturales de los diversos actores sociales afectados por el problema.

La televisión pública, en este caso, es asumida como un lugar de diálogo entre los imaginarios sociales y las identidades culturales, en donde no se transmite sólo aquella cultura hecha, sino que trabaja a partir de sus propios "modos de ver" la vida social, de sus recursos, lenguajes y potencialidades expresivas (*Ibíd.*: 51). Es así como aparecen distintos enfoques sobre el conflicto, diversos actores, temas, situaciones que permiten que los públicos vean no sólo las características de un problema social sino la complejidad sociocultural y política que la soporta.

Diversos autores, entre ellos Omar Rincón, señalan que la televisión pública es una clara estrategia para el cambio social, siempre y cuando responda a las necesidades y expectativas de las audiencias, favorezca el desarrollo y la visibilidad de los invisibles, realice nuevas maneras de expresión y ciudadanía en la pantalla, y promueva la movilización social. El autor plantea que actualmente se ha vuelto a la pregunta por la responsabilidad social, democrática y ciudadana de las televisiones privadas (Rincón, 2000). En este mismo sentido, Germán Rey afirma que la sociedad civil tiene hoy un papel más activo en la televisión que traerá a futuro una modificación en la relación tradicional entre los ciudadanos y los medios, una representación mediática de la política y una participación de organizaciones no gubernamentales en la comunicación (*Ibíd.*). Al respecto, Rosalía Winocur señala que se han creado nuevos escenarios de la ciudadanía recreados por los medios de comunicación; el ciudadano de hoy ya no es interpelado en la plaza pública sino en espacios de la cotidianidad como su hogar, su automóvil o su oficina, dando origen a lo que la autora denomina ciudadanía doméstica (Winocur, 2002).

Martín-Barbero, Rey y Rincón plantean a la televisión pública como propuesta integradora de lo cultural y lo educativo, en este caso una educación ciudadana,

entendiendo que la cultura se refiere hoy mas a cómo los ciudadanos desarrollan una comprensión de su país que les capacite para ayudar a transformarlo, que a eventos de contenido artístico o culturalista. Por otra parte, plantean que la educación en televisión tiene como finalidad la construcción de la ciudadanía expresiva y la promoción de un proyecto ético, que para el caso colombiano es la convivencia pacífica y el reconocimiento de la pluralidad cultural (Martín-Barbero, Rey y Rincón, 2000: 55).

De acuerdo con todo lo expuesto, los autores plantean que la televisión pública hoy debe trabajar en lo expresivo como estrategia, en lo ciudadano como proyecto, en los experimental como experiencia estética y de identidad. Lo cultural, lo educativo y lo comunicativo deben tener como finalidad el proyecto ético de nación y comunidad deseada, que para el caso colombiano estaría dirigido a formar ciudadanos competentes para convivir con el otro y actuar en el horizonte de la paz y la diversidad cultural. Éste sería el papel fundamental del programa D3.

Pensar la relación entre los medios de comunicación y la construcción de lo público, pasa por reconocer que D3 se da en medio de un contexto de crisis de la televisión pública que lo impactó fuerte y permanentemente. Una investigación de Solón Calero Cruz, muestra cómo nuestro país vive una tensa situación frente a la televisión pública derivada de una decisión presidencial de dar fin a Inravisión y Audiovisuales en 1994. A esto se suma la crítica, constante por parte de ámbitos académicos y públicos, de la promesa incumplida de la función social de la televisión pública y de privilegiar al consumidor sobre el ciudadano (Calero, 2005: 1-3). El estudio hace evidente la disminución del papel del Estado "proveedor del servicio público de televisión y el achicamiento constante de los recursos económicos en un período en que las innovaciones tecnológicas y el encarecimiento de la producción en televisión exigen enormes inversiones" (*Ibíd.*: 102).

Por otra parte, la investigación advierte sobre el riesgo que corre la televisión local al pensar más en los consumidores que en los ciudadanos; esto deriva en competencia por los mercados y por la innovación tecnológica, y se subordinan las propuestas culturales y la responsabilidad informativa a la lógica del mercado, causando que los canales incurran en la autocomercialización que ha afectado los procesos misionales de la televisión pública. Otras de las situaciones que han contribuido a la crisis del canal regional tiene que ver con:

> […] el poco riesgo y experimentación en sus labores creativas y de programación, la ausencia de productores independientes que propongan innovaciones de lenguaje, la desaparición de varias productoras y la copia de los formatos reiterativos de las televisiones comerciales (Calero, 2006: 10).

En el caso de D3 es evidente que las necesidades de sostenimiento económico y de competitividad en el mercado afectan fuertemente su quehacer y sus enfoques, tal como se verá en los segmentos posteriores.

En una segunda fase de investigación, Calero, *et al.*, analiza el discurso de las principales audiencias del canal para el año 2006, permitiendo obtener mayor información sobre los consumos. Dentro de los resultados que transmite la investigación, se hace referencia a los programas que trabajan el tema social y comunitario, denominado: "Reportero y mediador de problemas comunitarios". Es así como los televidentes encuestados comentan que gracias a algunos programas del canal, los problemas de su comunidad son mostrados al resto de la región, y así sienten que se pueden expresar. El canal contribuye así a resolver conflictos de la comunidad (*Ibíd.*: 47-48).

De acuerdo con el estudio, el canal adquiere muchas responsabilidades al contribuir desde un rol que a veces opera como médico o psicólogo, educador, ordenador de la cotidianidad y de la economía hogareña, sacerdote, vocero oficial para estar actualizado, reportero y mediador de problemas comunitarios, espejo identitario y guía para organizar el ocio. Así, D3 es el espacio mediático en el que las comunidades se ven reflejadas. En medio de la proliferación de canales y programas y de la despersonalización de la información, D3 es un lugar en el que las víctimas del conflicto pueden expresarse y en general la sociedad caleña puede ver la cara directa de las consecuencias del conflicto a través de historias reales y nombres propios. Pero estos temas están lejos de proveer el soporte económico vital para su subsistencia, Estas responsabilidades generan un riesgo a la sostenibilidad, si se tiene en cuenta que el Canal debe generar sus propios recursos.

2. Desaparecidos, desplazados y conflicto en la región

Al describir D3 es imprescindible abordar el tema del conflicto en la región, especialmente en lo que concierne al tema de desapariciones y desplazamientos. En el Valle del Cauca el tema de los conflictos y las violencias es central. Algunos estudios señalan tres grandes núcleos: el primero está definido entorno a la confrontación entre Fuerzas Armadas, Guerrillas y Paramilitares, en donde

la aparición de las Autodefensas en distintas zonas de la región y el incremento de la presencia urbana de las Guerrillas son los elementos más relevantes, junto con el globalizado discurso sobre el terrorismo. El segundo, en torno a la confrontación Estado y Narcotráfico, que dio como resultado la desaparición de los grandes capos y sus carteles, la atomización del negocio, la fuga de los capitales asociados y el crecimiento de los cultivos ilícitos en Nariño y Valle, especialmente. El tercero, la confrontación Estado y delincuencia organizada, en el cual el contrabando, la piratería y otras actividades delictivas han mostrado su enorme capacidad de acción y de combinación con otras formas de conflicto y violencia. Habría que señalar, además, las dinámicas de la violencia ligada a los conflictos interpersonales (Betancourth, 1997).

Salazar, Castillo y Pinzón plantean que la guerra es ante todo un mecanismo violento para redistribuir y localizar población de acuerdo a los objetivos estratégicos de los contendientes. Según estos autores, el propósito consiste en lograr una distribución de la población en un espacio que permita el ejercicio del dominio efectivo por parte de los vencedores. El desplazamiento forzado es, por esta razón y sobre la base de una distribución violenta, el mecanismo más efectivo de redistribución de la población para lograr un control territorial (Salazar, *et al*, 2007: 341).

Según el CODHES, solo en el año 2004 el departamento del Valle del Cauca recibió 11.698 personas desplazadas. Este desplazamiento, se hace de manera interna; es decir, de un municipio a otro, o de las zonas rurales a las cabeceras de los mismos municipios, al igual que llegan personas provenientes de otros departamentos. Los municipios que más recibieron desplazados son: Cali, con 56.2%; Buenaventura, con el 39.6% y Tuluá y Calima, con 6.4% del total de desplazados.

Este desplazamiento en el Valle del Cauca, tiene relación con el conflicto armado, aunque no siempre de forma directa. Para el periodo 1999 a 2001, en la agudización del conflicto, los movimientos forzados de población desde zonas rurales de Buga, Tuluá, Riofrío, Bugalagrande, Buenaventura y Dagua fueron una consecuencia directa del conflicto y de la estrategia paramilitar para excluir a la guerrilla en las zonas de influencia. Sin embargo, para periodos posteriores, el desplazamiento a nudos urbanos como Cali y Buenaventura no ha tenido como origen la guerra en el Valle. Salazar, Castillo y Pinzón plantean que tal comportamiento obedece a la intensidad del conflicto en otros departamentos como Cauca, Nariño, Risaralda, Putumayo y Chocó, de donde provienen gran

parte de los desplazados que llegan al Valle. El desplazamiento genera, entre otras cosas, dispersión y con ella desapariciones, aunque no es la única causa de estas desapariciones.

El reporte de desaparecidos de la Personería Municipal de Santiago de Cali, de 2004-2007, muestra que entre el 2004 al 2008 se registraron 1231 adultos (18-65 años) desaparecidos (70.2%); 375 adolescentes (13-17 años) (21.4%) y 149 menores de edad (8.4%).[2]

Las instituciones que reciben y reportan los casos son la Personería Municipal y la Alcaldía.[3] También participan en recepción de denuncias la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o a la Policía. Cualquiera de las autoridades judiciales puede activar el mecanismo de búsqueda que tiene como fin encontrar a las personas vivas o muertas; estas instituciones tienen el deber de adelantar el proceso. Pero son los medios masivos de comunicación los que generan visibilidad, no sólo del problema de las desapariciones en general sino de las víctimas en particular. D3 y sus programas antecesores se crearon con este sentido.

II. Eventos anteriores

El nacimiento del Canal Regional Telepacífico está ligado a la historia de Cali como pionera del cine mudo en Colombia, con la realización de la película *La María* (1921-1922), basada en la novela de Jorge Isaacs, y posteriormente por su experimentación durante los años setenta y ochenta con un grupo de caleños como Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y Luis Ospina interesados en contar historias relacionadas con "la violencia urbana, gusto por los personajes barriales y marginales, la cinefilia, el humor popular, lo cotidiano y temáticas adolescentes" (Bravo y Olave, 2005: 42), el cual fue conocido como Caliwood.

Según señala el mencionado estudio de Calero, por esta misma época se da la llegada del video, cuyas técnicas fueron incrustadas en las producciones de cine, creando un nuevo lenguaje. Pero, también, dando paso a un nuevo grupo de realizadores quienes apoyarían posteriormente al Canal Telepacífico. Otro de los grandes apoyos que recibió el canal para comenzar con su funcionamiento fue el del SENA, quien a finales de los setenta comenzó con la creación de un Centro didáctico de producción relacionado con el manejo del video y la tele-

[2] Personería Municipal de Santiago de Cali, Reporte de desaparecidos desde el 2004 hasta el 2007, Cali, 2008.

[3] Defensoría del Pueblo, Regional Valle del Cauca. Reporte de desaparecidos, 2008.

visión, el cual fue apoyado por académicos, dentro de los que se encontraban personalidades como Jesús Martín-Barbero, profesor de la Universidad del Valle en ese momento. Fue así como el cine y la televisión dieron paso a la televisión regional (*Ibíd.*: 45-46).

El Canal Telepacífico sale al aire el 3 de julio de 1988, como un canal vespertino con pocas horas de transmisión. En un principio es sólo emisor, pero a medida que empieza a aumentar la cantidad de material para transmitir, crece la necesidad de programas y es así como se convierte en un canal productor con 24 horas de transmisión. Entre 1988 y 1995 sólo compite con la televisión pública y la comercialización es mucho más fácil. A partir de 1995 se da la entrada de los canales privados como RCN y Caracol.

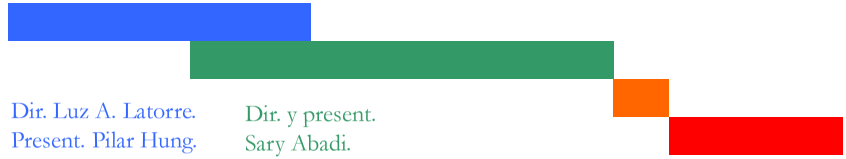
Telepacífico es una institución estatal cuyo principal accionista es INFIVALLE, una dependencia descentralizada de la Gobernación del Valle del Cauca, con el 95,99% de los aportes; le sigue INRAVISION, con el 0,07%; y el departamento del Valle del Cauca con el 3,94%. La participación del sector privado en el canal se realiza por medio de pauta publicitaria y de productoras independientes que realizan algunos programas para el canal (*Ibíd.*: 8-14).

La misión del Canal señala su compromiso con el desarrollo social y cultural y su interés por promover y fortalecer los valores que generen sentido de pertenencia con la región. Producen, emiten y comercializan programas para educar, informar y entretener con una alta calidad y un excelente equipo humano y tecnológico. Si bien esto pone en evidencia que desde el inicio del Canal el asunto de "lo social" es central, algunos programas son claves para entender cuándo se interesan por el tema del conflicto. Para poder entender con claridad el proceso de creación y consolidación del programa D3, se desarrolló una línea de tiempo que da cuenta de los diferentes momentos determinantes para la consolidación del programa, señalando las fechas y sus actores determinantes:

LÍNEA DE TIEMPO TELEPACÍFICO – D3

Amparo de Sinisterra de Carvajal (1988 – 1989)
Fernando Calero Aparicio (1989 –1991)
Gloria Mercedes Martínez (1992 – 1994)
Luis Guillermo Restrepo (1994 – 1997)
Mariana Garcés Córdoba (1998 – 2000)
Germán Patiño (2000 - 2003)
Jaime Fernández (2004-2006)
Héctor Alonso Moreno (2006-2007)
Víctor Manuel Moreno (2008-)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Dir. Luz A. Latorre. Present. Pilar Hung. Pregrabado.

Dir. Samar Sharif (94 ene-mar) Se transmite en directo.

Dir. y present. Sary Abadi (94 abril). Sección de desaparecidos.

Acuerdos Secretaría Salud Mpal. y Deptal. para suministros médicos. (96)

Dir. y present. Sary Abadi. Presentador: Rubén Darío Gálvez

Se retira Sary Abadi de la dir. y present. Lisandro Penagos asume dir.

Apoyo de la Alcaldía de Cali, de las ias, DAS, ICBF. Se transmite los martes y jueves con una hora de duración.

Dir. Lisandro Penagos. Present. Rubén Darío Gálvez

Dir y present. Lisandro Penagos. Nov. 2004

Dir. y present. Hernán Freire. May. 2006

PROGRAMAS

Punto de encuentro (1993 – ¿1998?)

Desaparecidos (1996 – 2003)

Desaparecidos y Desplazados (2003-2004)

D3 (2004-2007)

1. La creación de un Punto de Encuentro

"Punto de encuentro" es el primer programa del Canal interesado en "lo social", e inicia su emisión en 1993. Se ocupaba de los llamados "servicios sociales" (tales como pérdida de documentos, desapariciones de personas y donación de sangre) y quejas relacionadas con la falta de atención del Estado.[4] Se trataba de un programa de media hora semanal, creado y dirigido por Luz Adriana Latorre, quien era la Coordinadora de Producción del Canal Telepacífico en ese momento. Trataban temas como el Código Nacional de la Policía, derechos de los niños, control del ruido, donaciones de órganos, alcoholismo en jóvenes y mujeres, preparación para la muerte y atención a dolientes, tiempo libre, educación para la salud sexual de las mujeres y niños autistas, entre otros. Desde un principio se plantea que el magazín contará con la presencia en estudio de representantes de entidades relacionadas con los temas propuestos, como son Policía, Hospital Universitario, etc., y ofrecerá espacios de contacto con la comunidad.

Posteriormente el programa pasa a ser presentado y dirigido por Sary Abadi, quien representa la imagen de una mujer sensible y madura con capacidad de análisis y buena entrevistadora.[5] No se conoce con precisión el momento en que se crea en el programa una sección relacionada con los desaparecidos. Surge porque los televidentes llamaban al canal para pedir información sobre sus seres queridos. El programa se concentraba en atender asuntos del ser humano relacionados con el tema de la vida más que el de otras necesidades, y era altamente avalado por las directivas:

> [los programas] "Punto de encuentro", y […] después "Desaparecidos", marcaron un hito dentro de la televisión regional pues sirvieron, al principio, para el reencuentro entre familiares que por diferentes circunstancias no se habían visto en muchos años y luego para establecer y muchas veces encontrar a muchas personas desaparecidas. Para la gerencia este tipo de programas cumplían realmente mucha de la función para la cual se crearon los canales regionales.[6]

[4] Archivo activo de Telepacífico. Carpeta 1993. Carta enviada al a Fuerza Naval del Pacífico. Cali, 11 de octubre de 1993.

[5] Entrevista con Luz Adriana Latorre, creadora del programa "Punto de encuentro" y actual directora del Área de programación de Telepacífico. Febrero 20 de 2008.

[6] Entrevista con Gloria Mercedes Martínez, exgerente del Canal. Abril 4 de 2008.

Posteriormente se crea el programa "Desaparecidos", pero "Punto de Encuentro" siguió al aire trabajando temáticas como salud, educación, violencia en diferentes expresiones y servicios públicos.[7]

2. Surge Desaparecidos

El programa "Desaparecidos" sale al aire en abril de 1996. Surge de una de las secciones del programa "Punto de Encuentro" que trataba este tema. A partir del abordaje de casos y del intercambio con académicos y funcionarios de instituciones expertas en el tema, identificaron que el problema de las desapariciones no siempre tiene una connotación violenta, sino que el 85% de éstas se producen por desacuerdos familiares, problemas económicos y de otro orden. Esto representaba un reto periodístico porque requería comprensiones y abordajes más complejos. Al respecto comenta Luz Adriana Latorre:

> [Tuvimos que trabajar] […] el tema de las auto desapariciones, el tema de las desapariciones porque la gente pierde la razón, entonces […] se pierde en la ciudad, […] trata de blancas, […] la niña se voló con el novio, es que no sólo la niña se desapareció, es que no quiso seguir en su casa, el tema de las desapariciones por maltrato, o sea, los niños que se escapan de su casa, el tema del señor que se desaparece porque debe mucho dinero y necesita cambiar de identidad y todo eso. […], el tema de las catástrofes naturales donde la gente no sabe qué sucedió con su familia […]. Tuvimos casos maravillosos donde además el programa propició los encuentros y era que a través del programa la gente empezaba a buscar.

Presentar las desapariciones propiciaba los reencuentros. Para ello se buscaron alianzas de distinto orden, por ejemplo: con transportadoras aéreas y terrestres. Pero la situación empezó a ser problemática, la mediación que el programa establecía no lograba controlar la particularidad de cada caso. Entonces, el programa en ocasiones era utilizado por la ciudadanía de manera inadecuada, por ello el formato debió variarse. Según palabras de Latorre:

> […] en muchos casos los reencuentros no eran reales, sino que la gente utilizó el programa para ver a su hermana que no veía hace muchos años, entonces también de parte del televidente empezó a haber un manejo del propio reco-

[7] Archivo activo de Telepacífico. Carpeta 1996.

> nocimiento de las historias de vida, porque cómo garantizábamos nosotros la realidad de…, entonces el programa dejó de ser el canal para el reencuentro físico, sino el de la entrega de información para los reencuentros.

"Desaparecidos" contaba con el apoyo de la Alcaldía de Cali, la Personería Municipal, la Defensoría, la Fiscalía, el DAS, el ICBF y la Policía Metropolitana, y recibía múltiples casos diariamente. Según un ex-gerente,[8] el éxito era tal que, en más de dos años en que él estuvo al frente, se lograron hacer mil reencuentros. Además, el programa fue pionero en su clase y este modelo fue copiado para otras regiones.

Una coyuntura da un nuevo giro al programa: el recrudecimiento del conflicto armado. Se acentuó el tema del narcotráfico y el paramilitarismo, y empezó a ser tan grave el problema de los desaparecidos como el problema de los desplazados, tanto que el gobierno nacional emprendió la creación de políticas para la población desplazada. El programa reconoció que en muchas ocasiones era más importante explicar a la comunidad cómo atender estos fenómenos que realmente convertirse en un vehículo de servicio social. En mayo de 2001 Sary Abadi se retira de la dirección y la presentación del programa "Desaparecidos", y entra Lisandro Penagos a la dirección y Rubén Darío Gálvez en la presentación. Este es el inicio de "Desaparecidos y Desplazados".

3. El énfasis en el desplazamiento

Aproximadamente para el año 2002 se da en Cali un incremento en el fenómeno del desplazamiento y las subsiguientes políticas estatales. Este marco, junto a la necesidad de rescatar la democracia, el interés de reconstruir el tejido social y la labor pública del Canal Telepacífico, permite la creación de "Desaparecidos y Desplazados". El interés del programa era cubrir la realidad colombiana frente a la agudización del conflicto y la descomposición social, tratando temas como desapariciones, desplazamientos, violaciones a los D.D.H.H. y el D.I.H., tráfico de personas, prostitución, consumo de drogas, maltrato infantil, etc., que se manejaban con el apoyo de especialistas, entes gubernamentales y no gubernamentales a quienes se comprometía públicamente a solucionar la situación de los protagonistas a través de políticas sociales claras.[9]

---

[8] Entrevista con Luis Guillermo Restrepo, exgerente del Canal. Abril 1 de 2008.

[9] Penagos Cortés, Lisandro; *La Tiranía del Rey Ting*, Ensayo personal, Archivo digital (Reflexión).

El programa estaba dividido en dos partes: una donde se contaban los casos, y otra donde se explicaban y se hacían recomendaciones o propuestas para prevenir dichas situaciones. Sobre los casos de desaparecidos y desplazados, el director del programa, Lisandro Penagos, comenta:

> Aunque son únicamente dos términos, en cada uno de ellos se condensa gran parte de la problemática que vive el país. Personas o grupos de personas que por muy diversas circunstancias, se encuentran imposibilitados o inhabilitados para el ejercicio de sus derechos sociales. De hecho estas palabras adquieren para Colombia una significación particular, casi única, que podríamos inscribir como otro más de los aportes nefastos de nuestra situación específica en el mundo.[10]

En el mismo texto aclara que dentro del programa no se tratarán las desapariciones políticas:

> […] nunca o casi nunca el programa ha abordado el tema de las desapariciones políticas que en Colombia existen y son —como en cualquier lugar del mundo donde se utilicen como recurso— terreno vedado, espinoso o para utilizar un símil con la situación de guerra, campo minado.

Por otra parte, uno de los periodistas del programa plantea que además de los espacios para que la gente buscara a sus familiares: "existían una combinación de temas, información del tema central e información que dábamos nosotros sobre cosas que pasaron en el día, no necesariamente relacionadas con el tema central".[11] Pero en muchas ocasiones la historia que salía al aire era muy diferente a la que los familiares de desaparecidos o desplazados contaban detrás de cámaras. Para evitar mayores inconvenientes, se creó un formulario para que la gente consignara sus casos. Esto ayudó a evitar que se utilizara a Telepacífico para pedir certificados que demostraran persecución política en los temas de asilos políticos, pues algunos beneficiarios pensaban que con ello era más fácil conseguir la visa u otro tipo de beneficios.

---

[10] Penagos Cortés, Lisandro; *Desaparecidos y Desplazados,* Propuesta del programa, archivo digital.

[11] Entrevista con Jorge Galeano, practicante en Desaparecidos y Desplazados y periodista D3. Telepacífico. Marzo 31 de 2008.

Lisandro Penagos fue propuesto como director, según comenta Luz Adriana Latorre, por sus capacidades periodísticas. Ella plantea que era necesario tener un personaje con la cabeza puesta en el programa, que dominara el tema. Este hombre se caracterizaba por realizar permanentemente escritos y ensayos sobre su labor periodística. En uno de ellos plantea las fortalezas y debilidades del programa. En relación con las fortalezas se puede destacar:[12]

- El enfoque y tratamiento del periodístico desde lo regional a lo nacional.
- Ser un programa especializado coloca al canal Telepacífico como pionero en el orden nacional en el análisis del conflicto de Colombia.
- La situación del país es una de nuestras ventajas. Cada día sucede algo susceptible de análisis.
- El trabajo audiovisual del programa. Las crónicas gustan e identifican el programa.
- Hay una fuerte presencia del programa en el suroccidente de Colombia. Cauca, Valle, Nariño y Chocó son referentes informativos obligatorios del programa. También se han recibido llamadas desde Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo e incluso el Meta.

Entre las desventajas, Penagos plantea que el nombre del programa distanciaba. El tiempo de duración —40 minutos— no cumplía con los tiempos establecidos comúnmente para la teleaudiencia, además de la impuntualidad en la repetición. También existía sobrecarga laboral que impedía un mejor desempeño en el ámbito de la realización periodística, esto es: contactos, grabación, visualización, escritura y edición de notas que salen al aire. Esto, y la necesidad de hacer el programa rentable, impulsó el último giro del programa hacia el formato de D3.

III. Eventos contemporáneos: episodio central D3

1. El programa a las Doce Del Día (D3)

D3 es la continuación del programa "Desaparecidos y Desplazados". Salió al aire a finales de 2004 y terminó en diciembre de 2007 y, desde su origen, es

[12] Penagos Cortés, Lisandro; Fortalezas y debilidades. Desaparecidos y Desplazados, archivo digital.

cofinanciado entre Telepacífico y la Comisión Nacional de T.V. Durante este periodo tuvo dos tendencias diferenciadas:

La primera, dirigida por Lisandro Penagos, que amplía la mirada, se concentra en el análisis del conflicto y analiza casos puntuales sobre desplazamiento. Tuvo un fuerte contenido analítico en el que se aprovechaba el perfil académico del director. Se trata, por lo general, de un panel de discusión sobre temas políticos que son puestos a consideración de expertos y desde donde se pretende contribuir a que las audiencias tengan una mayor comprensión del tema.

Una segunda tendencia da un giro hacia el servicio social; es emitida desde la calle, visibiliza al ciudadano y disminuye su nivel de análisis para centrarse en mostrar la cara de la realidad social actual desde el punto de vista del ciudadano común y corriente.

Inicia así D3 como una mirada al conflicto armado desde el periodismo público. Para el director Lisandro Penagos dicho cambio era necesario, pues aunque el programa comenzó tratando los temas de desaparecidos y desplazados, su panorama periodístico empezó a ampliarse. Era tanta la necesidad de cambiar el nombre del programa que muchas personas invitadas a la emisión preguntaban qué tenían que ver con el tema:

> ¿Y yo qué tengo que ver con Desaparecidos y Desplazados? Todo. Así como con el maltrato infantil, con la prostitución, con la drogadicción, con la trata de personas, con la guerrilla, con las autodefensas, con la explotación laboral, con la política nacional e internacional, con los impuestos, con la selección Colombia de fútbol, con Juan Pablo Montoya o Fabiola Zuluaga, con García Márquez o Rodolfo Llinás, con todo. Ser ciudadano de una nación supone, el tener que ver con todo. Ahora bien, si se diseñara otro programa para analizar la realidad nacional dudo que su nombre fuera: Guerrilleros y Narcotraficantes. Pero, volvería alguien a preguntarse ¿Y yo qué tengo que ver con eso?[13]

Por otra parte, la coyuntura económica también forzó el cambio. Para el año 2004 la Comisión Nacional de Televisión, a través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, cofinanciaba cuatro programas, entre ellos: "Desaparecidos y Desplazados". Este apoyo siempre fue central para grabaciones en otros lugares y ampliación de la mirada regional y visibilidad nacional e internacional.

[13] Penagos Cortés, Lisandro; *¿Y yo qué tengo que ver con eso?* Ensayo personal, archivo digital.

Al respecto, el director del programa comenta:

> […] en esa temporada por ejemplo fuimos a Cartagena, fuimos a Antioquia, fuimos al Chocó…, había mucha posibilidad, pero había cosas tan particulares que por ejemplo los proyectos que le presentaban a la Comisión tenían garantizado el transporte y no la alimentación, […] pero fue el momento en que el programa más descentralizados tuvo, el momento en que más reconocimiento tuvo, no de las entidades sino del público, lo que confirma que mirar ese espacio es diferente[…][14]

En esa época se reportó audiencia de diferentes regiones de Colombia como Barranquilla, e incluso de gente de Estados Unidos, España y Holanda. Pero llegó un momento en que la Comisión anunció el fin de la cofinanciación y el tema de la sostenibilidad cobró especial relevancia. Frente a esto el formato de "Desaparecidos y Desplazados" resultaba poco rentable. Estas son las palabras del ex-gerente Jaime Fernández sobre el tema:

> Un programa de desaparecidos y desplazados qué emoción puede producir, qué sentimiento puede haber para un programa que parte de ese mundo […], a eso se suma que la Comisión dice "no vamos a darle plata para este programa, ese programa ya lleva cinco años financiándolo, ya llevan trabajando mucho tiempo. Si esos programas no se defienden ya, nada los defiende.[15]

Así, se diseña un programa especializado en el análisis del conflicto y la situación del país desde una perspectiva constructiva, el cual mantuviera "la obligación de informar y brindar herramientas a la comunidad para una comprensión del presente de la nación desde lo regional".[16] Para ello se formularon diferentes propuestas de nombre que remitían a un concepto o una línea editorial que delimitaba el campo de acción del programa, y el horario de transmisión dio pistas para el nombre: Doce Del Día o D3.

---

[14] Entrevista con Lisandro Penagos. Ex-director del programa D3. Telepacífico. Febrero 25 de 2008.

[15] Entrevista con Jaime Fernández. Ex-gerente de Telepacífico entre enero de 2004 y abril de 2006. Mayo 21 de 2008.

[16] Penagos Cortés, Lisandro; *De Desaparecidos y Desplazados a D3*. Ensayo personal, archivo digital.

1.1 La primera tendencia de D3: la dirección de Lisandro Penagos

a) Enfoque

La primera tendencia se da bajo la dirección de Lisandro Penagos. Según explica este director, los periodistas se han convertido en transmisores de información y se hace necesaria la humanización de la producción televisiva. Es por ello que el programa se inscribe dentro del periodismo público al estar especializado en el análisis del conflicto y la situación del país desde una perspectiva constructiva, al informar y brindar herramientas a la comunidad para una comprensión del presente de la nación desde lo regional, y al no consultar siempre las fuentes formales. Para ello se propone como misión: "lograr frente a la opinión pública un concepto de periodismo en el que esta se vea reflejada, que parta de sus intereses y le tenga en cuenta para conocer sus opiniones, no para hacer más creíble un problema o fortalecer una denuncia".[17] Es la forma de vincularse a procesos de cambio que se gesten en la región y donde la participación del programa es netamente periodística.[18] Al respecto Penagos comenta:

> La información noticiosa tiene una significación propuesta, hay algo que se espera que se crea. Entonces cuando uno entrega herramientas era decirle al público, vea, le entregamos estas herramientas para que usted imponga esa barrera de comunicación y pueda tomar una información más cercana a la realidad. No se deje meter los dedos a la boca; esto es así, esto es asa y le estamos entregando información, finalmente usted verá qué termina creyendo, usted es libre de creer…, pero le estamos entregando información.

Es así como el programa D3 visibiliza el trabajo realizado por diversas personas o comunidades que desarrollan procesos en municipios del Cauca y el Valle con proyectos artísticos, de reciclaje, o de cualquier vertiente que buscan ayudar a resolver el conflicto.

b) Estructura del programa

Se propusieron dos bloques: uno dedicado al análisis del conflicto y la situación del país, que estaba apoyado por cuatro notas que trataban enfoques

[17] Penagos Cortés, Lisandro; *D-Tres: Periodismo Público,* Ensayo personal, Archivo digital.
[18] Penagos Cortés, Lisandro; *Video D-TRES,* Ensayo personal, Archivo digital.

económicos, políticos, sociales y demás del tema del día. Y otro dedicado a presentar dos o tres casos de desaparecidos durante los últimos cinco minutos.

El primer bloque en donde se trataba el tema central comenzaba con una introducción —escrita cuidadosamente y leída del telepronter— en donde se explicaba por qué era interesante tocar el tema y qué se iba a decir sobre el mismo. Posteriormente se presentaba un hecho noticioso que tuviera que ver con el tema central, pues según palabras de Penagos, "siendo un trabajo periodístico, no podíamos desligarnos de la noticia". Esto daba paso al desarrollo del tema con los invitados a estudio. Es de resaltar que a quienes se les daba la palabra en el programa no siempre eran personajes oficiales, analistas políticos o representantes de instituciones tanto públicas como privadas, también se tenían en cuenta voces de la comunidad. El programa contaba con dos cortes comerciales que eran aprovechados para dar información estadística, datos o cifras que ayudaban a dar mayor consistencia a la información. Este primer bloque terminaba con una conclusión que era construida durante el transcurso del programa en donde se hacía énfasis en que cada televidente tenía que hacer sus propias conclusiones.[19]

El segundo bloque dedicado a los casos de desaparecidos eran los últimos cinco minutos del programa en donde hablaban dos o tres personas, teniendo cada una aproximadamente dos minutos para contar su historia con datos puntuales. Según Jorge Galeano, periodista de D3, esta organización daba mayor tiempo a la gente para contar su caso, puesto que anteriormente en "Desaparecidos y Desplazados", la información sobre un caso se daba de forma fragmentada, durante la entrevista a un personaje en estudio. Al respecto comenta:

> Sentimos que más allá de relegarlo, le dimos un orden y un lugar específico del programa para ese espacio, eso fue lo que pretendimos hacer con eso, no relegarlo. Además, el programa siempre fue conocido por ese espacio, la oportunidad de darle a la gente que busca familiares un espacio.

La estructura, entonces, respondía fundamentalmente a crear un espacio para el análisis formal de la compleja realidad del conflicto en la región.

[19] Entrevista con Nilson Romo, periodista del programa D-TRES bajo la dirección de Lisandro Penagos y de Hernán Freire. Marzo 12 de 2008.

c) Equipo de trabajo y recursos tecnológicos

La fortaleza del programa fue el abordaje periodístico que rescataba la crónica y el reportaje y en donde interesaba la noticia puntual porque no podían competir con la inmediatez. Al respecto Penagos comenta:

> Nosotros trascendimos la reportería para hacer periodismo. El reportero de un noticiero espera que algo suceda para ir y cubrirlo, […] porque eso hace el reportero, el reportero va y cuenta. Nosotros como no éramos noticiero, no teníamos ni la plataforma tecnológica ni el personal, siempre fuimos 4 o 5, todo el grupo de trabajo no era más, entonces, lo que hacíamos era tocar el mismo tema de salud pero no de manera puntual sino investigado y la mejor época del programa siempre contó, por lo menos, con dos periodistas de mucha trayectoria y dos practicantes que se iban incluyendo ahí en la lista del programa.

Debido al presupuesto que manejaba el programa, sólo tenía un día de grabación a la semana. Se transmitía de lunes a viernes a las 12:10 p.m. y duraba 40 minutos y durante algún tiempo se retransmitió en la noche. El contacto con el público era casi nulo. En la revisión audiovisual que se realizó para llevar a cabo este estudio nunca entraron llamadas. Existía un correo electrónico que era utilizado para que las audiencias sugirieran temas para ser tratados en el programa.

1.2 La segunda tendencia de D3: la dirección de Hernán Freire

Con la llegada en mayo de 2006 de Héctor Alonso Moreno, el nuevo gerente del Canal, Lisandro Penagos sale del programa y entra en su reemplazo Hernán Freire. Este nuevo momento de D3 retorna a lo social, en el sentido de atender a la gente. Freire anota que no se puede quedar en contar la historia del familiar desaparecido, sino comenzar a mostrar nuevos ejemplos de gente luchadora que sale adelante a pesar de las adversidades. Este programa retoma las crónicas como herramienta para presentar la información al público.

a) Enfoque

En uno de los textos escritos por Hernán Freire, el último director del programa D3, se plantea a D3 como "un espacio no sólo para los reportes y denuncias sino también como una oportunidad para demostrar cómo estas familias colombianas, afectadas por la violencia, se las ingenian para salir adelante en medio

de la adversidad".[20] El proyecto plantea como D3 es el único medio televisivo en Colombia, y en el mundo, que presenta la búsqueda de las familias de sus desaparecidos, desplazados y secuestrados.

Para Hernán Freire, a su llegada al canal encuentra un programa muy periodístico, investigativo y analítico. El nuevo gerente de Telepacífico le comenta que "la Comisión no financia programas periodísticos, la Comisión financia programas sociales". Frente a lo cual se vuelve a la raíz del programa, al enfoque social donde no sólo se cuentan las historias sino que se muestran las experiencias de mujeres trabajadoras que salen adelante a pesar del conflicto, jóvenes empresarios que a pesar de vivir en hogares muy conflictivos no cayeron en la droga como muchos de sus amigos y crearon empresa apoyados por los institutos tecnológicos en donde estudiaban, desplazados que sin invadir el espacio público comienzan a generar empresas y procesos humanitarios, entre otras.

Gracias a una renovación tecnológica del canal, que incluye poder contar con la *Fly away* (programa satelital) y las microondas que permiten la transmisión en directo, el programa comienza a responder a diferentes eventos que acontecen en la ciudad como la entrega de pruebas de los desaparecidos, información sobre la muerte de los diputados, marchas de repudio contra este acto y contra el atentado a la Policía de El Vallado, y su impacto en la comunidad; y diferentes eventos, incluso desde Buenaventura como la Comisión de Derechos Humanos. Este planteamiento desde lo social fue una buena disculpa para no utilizar al programa como un instrumento político.

El periodista Jorge Galeano, quien acompañó el proceso con Hernán Freire durante algunos meses, plantea que aunque no se desarrollaba una investigación profunda sobre el tema, se le brindaba a la gente información sobre procesos como el manejo del nuevo recibo de teléfono. Otro de los periodistas del programa, Nilson Romo, comenta que el programa trataba temas como la nueva cédula, decisiones de salud, desarrollo social, Sisben y el predial. Eran temáticas relacionadas con la cotidianidad de la comunidad. Los invitados a estudio eran funcionarios públicos, politólogos especialistas y representantes de comunas, quienes buscaban dar respuesta a los televidentes.

Al tiempo que entra Hernán Freire a la dirección del programa D3, se crea otro programa llamado Foro 9 p.m. bajo la dirección del gerente Héctor Alonso

[20] Freire, Hernán; *Programa de Televisión periodístico-social D3*, proyecto impreso. Cali, Febrero de 2008, pág. 1.

Moreno, interesado en el análisis de temas como: el Derecho Internacional Humanitario, de conflictos y de procesos como el de Verdad y Reparación de los paramilitares. Este programa se transmitió todos los festivos.

b) Estructura del programa

El programa toma 45 minutos al aire y su estructura estaba dividida en tres secciones. En la primera se hacía una presentación del tema del día, una crónica de desaparecidos y se mencionaban 3 casos de desaparecidos. El segundo bloque desarrollaba el tema del día con sus invitados y crónicas al respecto, y concluía el tema. El tercer bloque hacía otras seis menciones de desaparecidos y daba información de interés comunitario.

Es así como se eliminaron las notas relacionadas con el tema del día, se aprovecha la tecnología para realizar notas en directo y se pasa de dar tres informes de desaparecidos a tres en cada corte del programa; es decir, un total de nueve por programa. Como el programa era en directo, se logró una alta participación del público mediante llamadas telefónicas que permitían recoger preguntas de los televidentes sobre el tema.

c) Equipo de trabajo y recursos tecnológicos

Cuando Hernán Freire toma el programa, decide emitir desde la calle frente al Canal para garantizar cercanía con el público. Esto le dio mayor sentido de inmediatez y mayor participación del público mediante llamadas telefónicas que provenían de diversas partes del país. Gracias a un buen desempeño de comercialización —que se genera por nuevas políticas de gerencia— el horario empieza a ganar auge comercial y se despierta el interés por ese espacio dentro de la parrilla de programación, y también por decisiones de gerencia —el programa es desplazado a las 9 p.m. — lo que obliga a hacerlo pregrabado y a cambiar de esquema y de estructura. Estos cambios vinieron acompañados de reducción de presupuesto, de tiempo de grabación, etc. Fue así como se acordó realizar todas las crónicas o historias de los desaparecidos en un día, lo que implicaba una preproducción muy grande. El programa se dedicó entonces a darle un completo cubrimiento a los desaparecidos. Frente a toda esta situación, el director plantea que se había empezado un proceso para acabar el programa.

Una vez el programa se empezó a transmitir pregabado, las llamadas telefónicas se perdieron, pero se mantuvo el contacto por medio del correo

electrónico recibiendo correspondencias desde Bogotá, Medellín, Nariño, Cauca y Venezuela.

El programa mantuvo una relación con instituciones como la Personería, la Fiscalía, la Policía y la Defensoría que consistía en que ellos enviaban información al programa. En el caso de la Personería, ellos tenían informes mensuales que eran enviados por correo físico acompañados de un oficio que estaba firmado por el Personero Delegado de los D.D.H.H. La información llegaba no sólo de la personería de Cali sino también de otros municipios. Por otra parte, la Fiscalía enviaba un informe con fotos de los desaparecidos, y la Defensoría del Pueblo enviaba otro esporádicamente.

Respecto a su participación en el programa, iban representantes de estas instituciones sólo cuando se les invitaba y dependía del tema que se tratara. Es decir, no había un representante para los medios de comunicación, sino que variaba dependiendo del tema. Estas participaciones de las entidades estatales en el programa eran aproximadamente una durante el mes.

Desde julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007 se emitieron 367 programas, reportando a 1697 personas desaparecidas, de las cuales aparecieron 507 con algún grado de intermediación del programa.[21]

2. Beneficiarios del programa

Para poder conocer mayor información sobre los servicios del programa D3 a sus beneficiarios, se realizaron diez entrevistas a personas que usaron el programa para buscar a sus familiares o amigos desaparecidos. Cuando se les pregunto qué esperaban del programa, respondieron que encontrar a quien buscaban. Sólo una añadió que esperaba ser escuchada. Sobre la pregunta qué le había permitido el programa, cinco personas comentaron que mostrar su caso; otras dos comentaron que conocer a más personas en su misma situación; otra más comentó que conocer personas dedicadas a la labor social, y una última señaló que el programa no le había permitido nada. Es evidente que D3 les permitió presentar su caso y conocer los de otros ciudadanos.

La mitad de los entrevistados hicieron referencia a que habían encontrado a la persona desaparecida, lo que para el programa D3 es catalogado como un caso positivo. Indagando sobre los casos, afirmaron que dos de ellos se habían

[21] Freire, Hernán; *op. cit.* pág. 4.

solucionado gracias al apoyo del programa D3, otros dos debido a la búsqueda de los familiares en otros lugares de la ciudad, y un último caso positivo se dio gracias a la ayuda que prestaron otros medios de comunicación como la radio.

Algunos de ellos plantean que no veían el programa con regularidad, pero lo consideran como una herramienta eficaz para encontrar a sus seres queridos al mostrar una imagen de ellos, con lo cual es más fácil identificarlos. Lo anterior lo basan en la información sobre los casos positivos que se han presentado en el programa al mostrar el reencuentro con la familia. Por otra parte, todos comentan que el acceso al programa fue fácil, pues el primer contacto lo pudieron realizar por teléfono o vía mail, y luego si fueron directamente al canal. Además, una de las personas comentó que le hicieron una visita domiciliaria, y crearon una crónica con la información que facilitó el familiar del desaparecido. La eficacia del programa se hace evidente en la entrevista a usuarios y se ratifica al constatar que recibió un premio del Círculo de Periodistas de Bogotá.[22]

3. Asuntos políticos: los gerentes

Según Latorre, las primeras gerencias de Telepacífico tenían sobre sus hombros toda la responsabilidad de manejar inteligentemente un arma tan poderosa como es la televisión pública, para lo cual necesitaban no sólo la sensibilidad humana, sino una sensibilidad política para poder manejar y sacar adelante el canal. Al respecto, Restrepo comenta que el personaje del gerente debería ser un muro de contención ante el interés del gobierno en el canal. Es decir, no se podían confundir los intereses del gobierno de paso frente a las necesidades de lo que significa ser una entidad del Estado. Es así como durante esta primera etapa, Telepacífico era un Canal del Estado y no del gobierno, por lo tanto, su enfoque estaba dirigido a exaltar la información regional del Pacífico, de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Dentro del Canal existían programas comerciales como de corte social en donde se trataban temáticas como: la cultura, los valores sociales y el trabajo de la gente.

Posteriormente se conforma la Comisión Nacional de Televisión y se establecieron lineamientos para la consecución de los recursos a través de la misma. Ello significó una lucha para lograr que la Comisión cumpliera con los canales regionales de acuerdo con lo establecido en su creación. Por otra

[22] En total los cuatro programas mencionados en este informe recibieron 10 premios de periodismo. Al respecto ver anexos.

parte, alrededor de 1994, seis años después del inicio del canal, se logra una estabilidad económica tanto para las programadoras productoras como para el canal, por lo que Telepacífico logró también hacer diversas inversiones tecnológicas necesarias para ampliar la cobertura, cámaras, nuevo estudio, ampliación de las oficinas, nuevos programas y dejó establecida la negociación para el acceso a satélite, a través de Inravisión, por un canje de programación regional producida por el Canal.

La gerencia debe defender la co-financiación en diferentes momentos. En el 2004 Jaime Fernández, viaja a Bogotá para discutir personalmente la continuidad de la financiación. Durante la siguiente gerencia de Héctor Alonso Moreno, y dentro de su lema "Telepacífico más cerca de la gente", se realiza una renovación de espacios para el canal, pero sobre todo para que la gente pueda participar en ellos. Otra de las estrategias adoptadas, durante su periodo de gerencia, fue la renovación tecnológica comprando equipos como la *Stedy cam*, y la grúa, lo cual se ve reflejado en el cambio de enfoque del programa D3.

Al iniciar un nuevo periodo de gerencia en el año 2008, Víctor Manuel Moreno analiza los programas que serán enviados a la Comisión para su financiación y decide no enviarlos dentro del paquete porque siente que se ha agotado la propuesta y que la financiación está llegando a su fin.

IV. Conclusiones

D3 como práctica para superar el conflicto

Como caso de buena práctica, D3 contribuyó a *visibilizar* el tema del conflicto desde dos perspectivas básicas y diferenciadas. Por una parte se diseñaron y emitieron programas sobre el conflicto que fueron trabajados por el director e invitados expertos en el tema. Y, por otra, se abrió un espacio a los ciudadanos para presentar sus casos, hacerlos visibles y obtener información sobre mecanismos de búsqueda de desaparecidos. Si bien D3 no tuvo como tema central los desaparecidos, heredó de los programas anteriores el foco sobre el tema y, al menos, se presentaron algunos casos al público. Esto convirtió al canal en una instancia potencial de construcción de lo público, un lugar simbólico que recogía los intereses y sensibilidades de los ciudadanos y ponía el tema en la agenda pública, lo que acerca al ciudadano a estos temas sensibles. Es importante señalar que, en este sentido, la principal limitación estuvo dada por la escasa audiencia

del canal regional lo que disminuyó la posibilidad y el impacto. Ese nivel de audiencia tuvo que ver con la crisis económica y administrativa por la que atraviesa Telepacífico desde hace varios años.

El programa permitió que la comunidad dispusiera de información confiable y oportuna sobre las instancias e instituciones que resuelven problemas. Aunque no hay evidencia empírica contundente que refleje la construcción de una red interinstitucional de atención a víctimas del conflicto, pero se reconoce un interés permanente del Programa por emitir información que ayude a conocer procedimientos relativos a la atención de víctimas, como denuncias y atención a los desplazados, etc. El programa es, potencialmente, un nodo de intercomunicación entre la comunidad y las instituciones y de la comunidad entre sí. Esto une a los ciudadanos alrededor de sus vivencias y de las acciones para enfrentarlas.

La información no siempre fue la misma ni tuvo los mismos enfoques; fue, precisamente, el adentrarse en el manejo de los casos lo que llevó a los directores de los programas a cambiar formatos que respondieran a las complejas condiciones de las víctimas del conflicto en la región. El enfrentarse a casos de gran diversidad es lo que hace que el formato y enfoques del programa varíen y se ajusten a la realidad social. Hay, entonces, un proceso de aprendizaje logrado en el intercambio con el ciudadano, con el experto, con las instituciones que permiten que el programa avance en su papel de mediador social frente al conflicto. Es entonces una buena *oportunidad política*, el lugar comunicativo, la plataforma simbólica desde donde se visibiliza el conflicto, se lo analiza, se lo discute, se interactúa con la gente que lo padece. Un lugar en donde se asume a las audiencias como ciudadanos, no como consumidores. Esta clave se ve reforzada por la *visibilidad*, pues a mayor nivel de reconocimiento, el programa alcanzó mayores niveles de legitimidad como mediador entre el ciudadano y el Estado, y entre los ciudadanos entre sí.

Desde las ideas de *oportunidad política y visibilidad,* siguiendo a Peter Berger (1999), podría afirmarse que D3 se constituye en una instancia mediadora frente al conflicto. Para el autor: "en el marco de una sociedad hay dos tipos de instituciones: aquellas que polarizan los conflictos y las que intentan mediar en ellos" (*Ibíd.*: 530). Así mismo, se dan acciones dentro del marco de operación de los medios masivos (D3 en este caso): ciertas acciones polarizan el conflicto y otras promueven la creación de espacios mediadores. Esto depende de las

ideas y valores que los inspiren y, por supuesto, están cruzados por intereses específicamente creados. Toda instancia de mediación protege al individuo de la alienación y a las estructuras de la pérdida de legitimidad. Esto ha sido llamado por Berger: mediación horizontal.[23] De manera más refinada Hervieu-Léger (Berger, 1999: 535) realiza tres clasificaciones que denomina: mediación imperativa, pragmática y dialógica. La primera es realizada por organismos políticos y legales quienes toman una decisión que es impuesta vía coerción a las sociedades y a través de ello se concluye el conflicto. La segunda implica un proceso de negociación a través del cual las partes buscan soluciones de compromiso, determinan las condiciones mínimas y convierte normas en intereses. Y en la tercera se da un esfuerzo por abordar los conflictos y buscar un compromiso no solo pragmático sino ideativo. Es en esta última categoría que el programa actúa. Media entre el conflicto y los ciudadanos creando espacios simbólicos en donde las vivencias e ideas sobre el conflicto se ventilan, circulan y permiten una reconstrucción del tema en los imaginarios ciudadanos.

Es contundente entonces la *visibilidad* del programa, que, paradójicamente, a pesar de su bajo *rating* tiene altos niveles de recordación sobre todo por presentar los rostros, las vidas, los dramas de las víctimas de conflicto en la región.

En este sentido, se podría pensar que la *eficacia*, entendida como el aporte real que el programa hace a la superación del conflicto, se da alrededor de las dos claves ya mencionadas: la visibilidad y la oportunidad política. Es eficaz en la medida que hace el problema visible, lo pone en la agenda pública, acerca a los ciudadanos, liga al ciudadano con las instituciones, apela a la academia para profundizar los análisis y por esas vías contribuye a la cualificación de la opinión pública.

El reto permanente fue la *sostenibilidad*: bajos niveles de *rating* significan una escasa pauta publicitaria, lo que hacía difícil la cofinanciación. Frente a ello, la gestión continua del Canal, desde sus orígenes, para presentar proyectos que permitieran percibir aportes permanentes de la CNTV evidenció el interés por la sostenibilidad de la línea social y el soporte al desarrollo de las políticas de apoyo a la televisión regional. Mantener al aire programas de alto impacto social como D3 puso en evidencia el interés de Telepacífico por ofrecer programas

[23] El concepto de mediación horizontal se ha derivado de otro concepto: el de instituciones intermedias. En tanto ellas también pueden polarizar, Berger ha distinguido el nuevo concepto de mediación horizontal que garantiza la función mediadora entre sectores de la sociedad que entran en conflicto. Ver *op cit*. P. 533.

que contribuyeran a la visibilización de problemas sociales relacionados con el conflicto, como en este caso el tema de los desaparecidos y los desplazados. Este aporte se ha hecho fundamentalmente en D3 a través de la presentación y análisis de información sobre el tema y la apertura de espacios para que la ciudadanía visibilice sus casos y busque, desde la articulación televisiva con la opinión pública, soluciones a ellos.

Es clave el tema de la gerencia de lo social y los líderes que la asumen, lo que se traduce en diferentes asuntos. Por una parte, en la gestión permanente de recursos ante la CNTV, la búsqueda de fondos a través de pauta comercial y, en general, la búsqueda de una sostenibilidad económica. Por otra, la optimización de recursos y el abordaje idóneo de temas y enfoques reta permanentemente la capacidad personal y calidad humana del equipo de producción, siendo clave en ellos la formación y la sensibilidad social del director del programa y del equipo técnico.

Un elemento central en el programa, en su producción, enfoque, visibilidad, alianzas y en general en su éxito, fue el *liderazgo* ejercido por sus directores. A pesar de sus perfiles diferenciados contaban con un fuerte compromiso ético, alta formación y sensibilidad humana y social. Cada uno a su estilo, aportó al programa una gran seriedad y responsabilidad. Se trató de un liderazgo que enfrentó retos de diverso orden: por una parte, el reto de abordar un tema complejo que se enfrenta al dolor humano, que mueve sensibilidades y pasiones y que también pone en evidencia los vacíos del Estado y del sistema político; y, por otra, el reto de analizar con rigor y profundidad, utilizando lenguajes cercanos al ciudadano que permitiera la labor informativa y formativa que se proponían para llegar al ciudadano común. Los directores, además, debieron superar con su ingenio y dedicación los retos que las limitaciones económicas les impusieron al diseñar mecanismos para la sostenibilidad del programa aún, en ocasiones, sin el respaldo de sus instancias superiores. El liderazgo de los gerentes del Canal, en cambio, es muy diferenciado. Si bien el tema de lo social estuvo permanentemente en el transfondo, las decisiones políticas que se tomaron no siempre beneficiaron al programa, ni a su calidad o su sostenibilidad. De hecho, el programa existió hasta que se agota su formato pues, después de varios años de financiación por parte de la CNTV, no logró ser autónomo.

Como limitaciones a las buenas prácticas debe reconocerse la necesidad de que el programa podría haber generado formas de relacionamiento más fuerte con instituciones que trabajan y atienden el tema del desplazamiento y las

desapariciones como la Personería, Fiscalía, ICBF, entre otras, de manera que además de ser un agente que visibiliza el problema se convierta en un puente que contribuye a unir la ciudadanía con las instituciones. Esto ayudaría, además, a dar respuestas concretas a las solicitudes de ayuda que permanentemente les lanzaron los ciudadanos.

Finalmente, hay que señalar que el proceso es potencialmente *replicable*. La documentación de todo el proceso es de buena calidad, pues no sólo hay registro audiovisual de todo lo producido sino que existen informes, actas, reflexiones y diversos tipos de documentos que dan cuenta de las transformaciones del programa, de sus enfoques y sobre todo de los aprendizajes ligados al intercambio mismo con la ciudadanía. Esto es potencialmente utilizable por programas y otros actores interesados en trabajar el tema de los medios masivos y el conflicto.

Bibliografía

ACNUR; Balance de la política pública de atención integral a la población desplazada por la violencia. 2004-2006.

Asociación de Comunicadores Calandria; *Entre públicos y ciudadanos*. Gráfica Bellido. Lima, Perú, 1994.

BERGER, Peter; *Los limites de la cohesión social*, Barcelona, Circulo de Lectores, 1999.

CALERO Cruz, Solón. *Cartografía cultural sobre la Televisión en Cali* (1984-2003). Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2005.

CALERO Cruz, Solón. *Consumo, usos, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del canal Telepacífico en Cali dentro del contexto de una coyuntura crítica.* Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2006.

CASTILLO, Luis Carlos (Comp.); *Sociedad y economía: el Valle del Cauca y Colombia. 30 años del CIDSE*, Programa editorial Universidad del Valle. Cali, Colombia**,** 2007.

COLLINS, Charles David; *Prensa y poder político en Colombia*, Talleres Gráficos de la Universidad del Valle, CIDSE. Cali, 1981.

Comisión Nacional de Televisión. *Acuerdo número 012 de 1997,* 1997.

Comisión Nacional de Televisión. *Plan de desarrollo de la televisión 2004-2007. Por una televisión bien vista*. Bogotá, 2004.

Defensoría del Pueblo, Regional Valle del Cauca. *Reporte de desaparecidos*, Cali, 2008.

FREIRE, Hernán; *Programa de Televisión periodístico-social D3*, proyecto impreso. Cali, Febrero de 2008.

FUENZALIDA Fernández, Valerio; "La televisión como industria cultural en América Latina", en: *Revista Escribanía.* Santiago de Chile, 2000.

HUERTAS Mario Sigfredo & Asociados. Evaluación de hábitos, imagen y posicionamiento del canal y programación de Telepacífico (archivo digital). Cali, 2001.

MARTÍN–BARBERO, Jesús Martín, Germán Rey y Omar Rincón. "Televisión Pública, Cultural, de Calidad". En: Revista *Gaceta* No 47. Bogotá, Diciembre de 2000.

Oficina Gestión de Paz y Convivencia. Gobernación del Valle del Cauca; *Diagnóstico situacional de la población en situación de desplazamiento —PSD— asentada en el municipio de Cali*, Convenio con la Organización Internacional para las Migraciones OIM con la financiación de USAID. Cali, Febrero 2005.

Oficina Gestión de Paz y Convivencia. Gobernación del Valle del Cauca; *¡Tiempos de esperanza! Nuestra agenda humanitaria: una travesía hacia el retorno*,

Oficina Gestión de Paz y Convivencia. Cali, 2003.
Oficina Gestión de Paz y Convivencia. Gobernación del Valle del Cauca; *Plan Integral Único Departamental*, Gobernación del Valle del Cauca. Cali, Octubre 2007.
PENAGOS Cortés, Lisandro; *¿Y yo qué tengo que ver con eso?* Ensayo personal, archivo digital (DYD NOMBRE), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Actividades Realizadas por el Equipo de Desaparecidos*, informe, archivo digital (FUNCIONES DYD), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *D-Tres: Periodismo Público,* Ensayo personal, Archivo digital (D3.OPINIÓN), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *D-TRES al Banco*…, ensayo personal, **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *De Desaparecidos y Desplazados a D-TRES*. Ensayo personal, archivo digital (DE DYD A D-TRES), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *DESAPARECIDOS, un fenómeno al que nadie le pone la cara*, archivo digital (INTROINFC), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Desaparecidos y Desplazados,* Propuesta del programa, archivo digital (DYD PROPUESTA), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Dignificar la Profesión, un reto para los periodistas.* Ensayo personal, archivo digital (DIGNIFICAR LA PROFESIÓN), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *El programa social de Telepacífico Desaparecidos y Desplazados un año al aire,* informe, archivo digital (DYD UN AÑO). Cali, marzo de 2003.
PENAGOS Cortés, Lisandro; *El conflicto, una amenaza para el periodismo.* Ensayo personal, archivo digital (DYD GUERRA), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Fortalezas y debilidades. Desaparecidos y Desplazados*, informe, archivo digital (VEN Y DES), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Guión básico para Desaparecidos y Desplazados*, archivo digital (GUIÓN DYD), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *La impunidad y sus sinónimos* (D3 – CNTV), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *La Tiranía del Rey Ting*, Ensayo personal, Archivo digital (REFLEXIÓN), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Promociones unificadas canal,* informe, archivo digital (PROMOCIONES), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Re-Encuentros D-TRES 2005,* archivo digital (RE-ENCUENTROS 2005), **s/f.**
PENAGOS Cortés, Lisandro; *Reconocimientos,* informe, archivo digital (RECOCOCIMIENTOS), **s/f.**

PENAGOS Cortés, Lisandro; *Video D-TRES,* Ensayo personal, Archivo digital (VIDEO D-TRES), **s/f.**

Personería Municipal de Santiago de Cali, *Reporte de desaparecidos desde el 2004 hasta el 2007*. Cali, 2008.

RINCÓN, Omar (Comp.); *Televisión pública: del consumidor al ciudadano.* Pro Scanner Barrera'Z Ltda.. Bogotá, Colombia, 2001.

SALAZAR, Boris, María del Pilar Castillo y Federico Pinzón; "Guerra y distribución territorial en el Valle del Cauca", en CASTILLO, Luis Carlos (Comp.); *Sociedad y economía: el Valle del Cauca y Colombia. 30 años del CIDSE*. Programa editorial Universidad del Valle. Cali, Colombia, 2007.

Telepacífico; *Teatro Estudio. El primero en el país. Buenas Señales.* Cali, 2007.

Telepacífico, *Encuesta de gestión*, formato encuesta para medir impacto social del programa D3, archivo digital (Encuesta de gestión), **s/f.**

WINOCUR, Rosalía. *Ciudadanos mediáticos*. Gedisa S.A. Barcelona, España, 2002.

Páginas Web

www.telepacifico.com

Archivo Telepacífico.

Archivo Activo Telepacífico sobre programas Punto de Encuentro, Desaparecidos, y Desaparecidos y Desplazados. Carpetas de los siguientes años: 1994-1997, 2000-2001, 2003-2004.

Informes del programa D3 enviados a la Comisión Nacional de Televisión –CNTV.

Telepacífico, *D3. Informe diciembre 2005- marzo 2006*.

Telepacífico, *D3. Informe abril-julio 2006*.

Telepacífico, *D3. Informe agosto - noviembre 2006*.

Telepacífico, *D3. Informe diciembre 2006 – marzo 2007*.

Telepacífico, *D3. Informe abril - julio 2007*.

Telepacífico, *D3. Informe final programa D3*.

Epílogo

La ciudadanía en conflicto

Rafael Silva Vega

> Si ustedes, los que poseen las cosas que los demás deben tener, comprendieran esto, podrían ponerse a salvo. Si ustedes pudiesen separar las causas de los resultados, si pudiesen saber que Paine, Marx, Jefferson, Lenin fueron resultados, no causas, podrían sobrevivir. Pero ustedes no pueden saber. Porque la cualidad de poseer les ha metido para siempre el "Yo", y separado totalmente del nosotros.
>
> John Steinbeck*, Las uvas de la ira*

Este epílogo no es propiamente una recapitulación de lo dicho, anteriormente, en este libro. Tampoco tiene el ánimo de agitar con más eficacia, en un supuesto auditorio, las conclusiones a las que llegaron los autores en el informe final de su ejercicio investigativo sobre "*buenas prácticas para superar el conflicto en el Valle del Cauca*".

Se trata, más bien, de una especie de cometario crítico sobre los resultados y los análisis expuestos en los cuatro *estudios de caso*, sobre experiencias de superación del conflicto en el Valle del Cauca, que los investigadores del CIES

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi presentan en esta obra, siguiendo la perspectiva establecida por el Banco de Buenas Prácticas para la resolución del conflicto desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).[1]

Para empezar vale la pena señalar que los cuatro estudios de caso que hacen parte de este libro, publicado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi y el PNUD, son una importante contribución a lo que yo llamaría "análisis sobre la ciudadanía en condiciones de crisis social y política" en la región del Valle del Cauca. Efectivamente, estos relatos o "biografías comunitarias", si se me permite la expresión, distan mucho de la versión construida por la tradición democrática liberal acerca de un modelo de *ciudadano* que no ve en la participación política ni una prioridad ni un rasgo fundamental para la reivindicación de sus derechos y libertades. Contrario a la narración elaborada por el liberalismo –donde el ciudadano se piensa, así mismo, como un individuo y se supone instalado en un orden político y social en calma que le garantiza, de por sí, esos derechos y libertades de naturaleza individual sin que él tenga la necesidad de salir al espacio público a defenderlos– los casos presentados aquí nos hablan de la experiencia de unas poblaciones y comunidades situadas en unos contextos sociales conflictivos y violentos en los cuales, la gran mayoría de las veces, no es el Estado quien es el garante efectivo de sus derechos sino su propia capacidad y su poder político para resistir, negociar y demandar respeto al propio Estado, a la sociedad y a los grupos armados que los hostigan incesantemente.

Muy acostumbrados como estamos al modelo de *ciudadano pasivo y formal*, tan difundido por la ideología liberal, hemos llegado a perder de vista que, como se ha señalado desde ciertas tradiciones del pensamiento político, ciudadano también es aquel que desempeña un papel político activo y es protagonista directo de las decisiones y de los intereses que persigue la comunidad política a la que él pertenece. Este otro modelo de ciudadano es el corazón mismo de lo que algunos pensadores han dado en llamar el modelo de la *democracia radical* (Goodwin, 1997: 235 a 272).

1 Estudios de caso fueron realizados por Rosa Emilia Bermúdez Rico, Enrique Jaramillo Buenaventura, Luis Fernando Barón Porras y Ana Lucía Paz Rueda, y seleccionados a partir de la base de datos del PNUD, teniendo en cuenta los siguientes criterios: pertinencia, eficacia, sustentabilidad, legitimidad y replicabilidad.

Desde este punto de vista, las mujeres y los hombres –jóvenes, niños o ancianos– que son la carne viva de estos casos, merecen ser considerados en sentido pleno: ciudadanos. Y sus vivencias de la superación del conflicto que les ha tocado padecer, junto con sus resultados (buenos o malos), experiencias de una *vida ciudadana*.

En este sentido, pienso que las experiencias que estos estudios reconstruyen nos brindan importantes pistas acerca de cómo los ciudadanos de democracias en proceso de formación, azotadas por graves y prolongados conflictos sociales, económicos, políticos y militares, buscan ingeniosas salidas –formales e informales– para luchar por sus derechos y libertades. Nos aportan un valioso ejemplo de cómo grupos de ciudadanos o poblaciones enteras resisten, demandan respeto, luchan por la equidad o la inclusión con su esfuerzo propio, en una sociedad que los expulsa sistemática y reiterativamente de su seno, sin caer en la lógica del recurso a la violencia, sin echar mano de las prácticas de sus opresores. Como, también, nos ofrecen ejemplos plenos de ciudadanos ejercitándose en una forma de la democracia que se construye desde las bases de esas propias comunidades, donde se aprende la ciudadanía desde la propia lógica de las relaciones de poder, del litigio, el conflicto con el otro y la capacidad de negociación para construir acuerdos y reglas de juego que les permita vivir en las condiciones propias de un mundo político, social y económico profundamente inestable y excepcional.

En otros términos, las experiencias relatadas en estos casos nos dan un buen ejemplo de la otra forma de la ciudadanía que sigue siendo tan escasa y, generalmente, tan ausente en nuestra sociedad: la del *ciudadano activo*, de aquel ciudadano que tiene voz, voto y capacidad de decisión dentro de su comunidad. De aquel ciudadano que es protagonista dentro de su comunidad porque tiene en sus manos una buena porción de poder político para influir, hacerse escuchar y valer en ella. De aquel ciudadano al que no le han expropiado su poder político, y no se lo deja expropiar porque sabe que ese es el instrumento más eficaz para luchar por sus derechos. De aquel ciudadano que se ha decidido por la *participación política* y la pone como el centro de su experiencia comunitaria; porque es a través de la *participación política* que él muestra su inconformidad con el *statu quo,* resiste la dominación, propone y construye, desde abajo, nuevas formas de vida política.

Aún más, la importancia de este trabajo investigativo no sólo reside en ayudarnos a localizar las coordenadas para las posibilidades de construcción de

formas distintas de ciudadanía y vínculos sociales en condiciones no ideales, es decir, en un mundo dónde la realidad social es, en sí misma, un obstáculo para que florezca la *vida cívica*. Creo que su importancia también está en otros dos aspectos que no se pueden dejar de señalar.

El primero de ellos es que estos estudios de caso nos hablan de la experiencia ciudadana de mujeres y hombres, de negros, mestizos, mulatos, de pobres, desposeídos, desplazados, de personas que han sido violentadas en sus derechos y han vivido en la zozobra e incertidumbre del conflicto y la guerra. Reconstruir la experiencia de este tipo de ciudadano, el modo en que lo trata el sistema político en el que le ha tocado vivir, y la forma en la que él experimenta ese trato, puede contribuir a que el ciudadano –de tono de piel un poco más despercudido, con servicios sanitarios, propietario o rentista, letrado, con amplio acceso a medios de comunicación y asiduo visitante de los modernos centros comerciales– compare su "apacible" experiencia ciudadana con el drama de ese otro que le es lejano y pueda, a partir de un lenguaje de la experiencia ajena, hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Este aspecto es relevante, pues en la medida en que tratemos de imaginarnos el dolor ajeno y representárnoslo en nosotros mismo, en esa misma medida, logramos encontrar un camino más expedito para conectarnos con la justicia. Obviamente, hay muchas personas que no logran esto por desconocimiento de la realidad en la que viven.

Ilustro esto último. Yo he conversado con jóvenes de entre 17 y 20 años, ciudadanos que llevan una vida apacible, y que desconocen por completo la experiencia de lo que significa ser ciudadano en condiciones de *crisis social y política profunda*. Y digo que la desconocen por completo no porque hayan tenido que vivir esa vida, sino porque ni siquiera están enterados de que muchos de sus conciudadanos llevan una vida miserable. Aún más, no tienen memoria de las terribles masacres de las que han sido víctimas muchos de nuestros conciudadanos en las últimas dos décadas.

Por supuesto que ponerse en "el lugar del otro" no tiene sólo que ver con cargar la memoria ciudadana de eventos crueles y negativos sino, también, con experiencias que pueden ser reivindicadas y dignas de emular. Y aquí está el segundo aspecto importante de esta investigación, pues ella nos da cuenta de una experiencia organizativa con la que ciudadanos que han vivido en condiciones extremas de peligro, miseria y violencia, han logrado reivindicar

sus derechos y exigir de aquellos que los han maltratado y olvidado respeto y reconocimiento. En estos términos este trabajo es un valioso aporte a nuestra memoria ciudadana. En él hay un conjunto de experiencias que no deben ser olvidadas y una estructura de valores sociales y morales que merecen seguir siendo promovidos, como por ejemplo: la dignidad, la participación política, la solidaridad, el respeto, la filantropía, la confianza, la justicia y el sentido de pertenencia.

Y otro dato importante para recordar: aún en condiciones sociales y políticas extremas, donde el conflicto, la injusticia, la desigualdad y la pobreza campean, siguen estando presentes valores morales y sociales en los que los ciudadanos vulnerables se apoyan para salvarse del horror. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo entender y explicar este fenómeno? Este es un punto valiosísimo con el cual los investigadores de este trabajo quedan en deuda con el lector. Pues, en la medida en que se hubiesen adentrado en estos interrogantes nos habían podido dar, sino una respuesta contundente, por lo menos una hipótesis acerca de qué es lo que hace posible que en estas poblaciones alejadas de los centros urbanos, marginadas, sometidas a la crueldad y el horror, y con escasas posibilidades de ilustración florezca la semilla de participación política, de la transformación social y de la vida comunitaria de una forma que no es posible, a veces, encontrar en los grandes centros urbanos de Colombia.

Este faltante, me hizo recordar una bella novela de John Steinbeck titulada *Tortilla Flat*. Cuando leía cada uno de los estudios de caso venía a mi memoria, de forma recurrente, la manera como Steinbeck describe el tema de su obra, así:

> Esta es la historia de Danny, de sus amigos y de su casa. Es la historia de cómo las tres cosas llegaron a convertirse en una sola, de modo que si en *Tortilla Flat* uno habla de la casa de Danny no se refiere a una construcción de madera con una capa de vieja cal desconchada, cubierta por un antiguo rosal de Castilla sin podar. No, cuando hablamos de la casa de Danny se supone que nos referimos a una unidad cuyas partes componentes son hombres que despiden dulzura y júbilo, filantropía y, en último término, una tristeza mística. La casa no se diferencia de la Tabla Redonda, y los amigos de Danny son similares a sus caballeros. Y ésta es la historia de cómo el grupo nació, floreció y creció hasta ser una organización sabia y hermosa. La historia trata de las aventuras de los amigos de Danny, del bien que hicieron, de sus pensamientos y sus esfuerzos. Al final, la historia cuenta cómo el talismán se perdió y el grupo se deshizo (1981: 7).

Territorios y poblaciones en disputa es como la historia de "Danny, de sus amigos y de su casa". Es como la historia que relata Steinbeck de "un grupo que nació, floreció y creció hasta ser una organización sabía y hermosa" pese a las condiciones sociales adversas en la que tuvo que surgir. Es la historia de la experiencia ciudadana de un grupo de hombres, de un agrupamiento humano, que poco a poco se van convirtiendo en una comunidad. Sin embargo, en la construcción del relato de estos estudios de caso falta algo que no se le olvida a Steinbeck en su novela: cuando el talismán se pierde y el grupo se deshace.

Lo que quiero decir con esto es que si, por un parte, los investigadores se dedican con rigor a mostrar y describir las experiencias organizativas de estos grupos de hombres que los llevan a constituirse en una comunidad –"una unidad" en términos de Steinbeck–, de otra parte no le dedican el mismo esfuerzo a describir y analizar las tensiones y contradicciones internas de esas experiencias de organización comunitaria. Pues, leyendo los casos que construyen los investigadores uno advierte claramente que estas poblaciones y comunidades están permanentemente asechadas por un conflicto violento del cual quieren escapar –el enfrentamiento entre el Estado, la guerrilla, los paramilitares y narcotraficantes que los asedia sin cesar. Sin embargo, lo que no queda suficientemente descrito ni evidenciado, con total claridad, es el *conflicto político interno* que uno supone que ha de ser parte de la cotidianidad de estas comunidades, pues donde la *participación política* es el centro de la vida comunitaria es inevitable que hayan tensiones, diferencias y conflictos de intereses en torno al bien que persigue la comunidad –si es que todos están identificados con ese *bien*, y no prefieren o buscan otros.

No haber descuidado este aspecto en el trabajo investigativo y en la construcción de estos casos habría ayudado, tal vez y entre otras cosas, a que los investigadores hubieran evidenciado las prácticas políticas y sociales que, en estas poblaciones, podían ser un obstáculo a la construcción de comunidad, que podían hacer que el talismán se perdiera y pusiera en riesgo el esfuerzo organizativo. Llamo la atención sobre este punto porque consideró que él resulta de verdad relevante como parte de una experiencia que quiere aportar elementos de aprendizaje para experiencias futuras. En este sentido, pienso que experiencias de este tipo se deben reconstruir, con el mismo esfuerzo, desde todos los frentes posibles del análisis. Por lo cual no conviene olvidar la observación de Pierre Rosanvallon acerca de que lo *político* no sólo corresponde a un *campo* sino, también, a un *trabajo*. Y en tanto que trabajo:

> […] lo político califica el proceso por el cual un agrupamiento humano, que no es en sí mismo más que una simple *población*, toma progresivamente los rasgos de una verdadera comunidad. Una comunidad de una especie constituida por el proceso siempre conflictivo de elaboración de las reglas explícitas o implícitas de lo participable y lo compartible y que dan forma a la vida de la [comunidad] (2003: 16).

Ninguna sociedad o comunidad es, en sí misma, homogénea o uniforme. El proceso de construcción de una comunidad política es, por su propia naturaleza, algo conflictivo. En ese tipo de procesos es donde es fácil advertir eso que el realismo político de Kant llamó la "insociable sociabilidad humana" (Kant, 1991), esa tendencia natural a estar con los otros pero, al mismo tiempo, a entrar en conflicto con ellos. Reconocer este aspecto de la vida social no sólo es un aspecto de vital importancia para cualquier experiencia de ciudadanía sino que, al mismo tiempo, es un elemento fundamental que contribuye a la salud mental de cualquier ciudadano. Ya que en la medida que seamos capaces de advertir que no hay "mundo social sin conflicto", en esa misma medida estaremos mejor preparados y capacitados para enfrenta y resolver de forma civilizada las posibles diferencias o desavenencias que tengamos con quienes nos ha tocado en suerte convivir. En este sentido es que digo que hubiese sido oportuno que este aspecto de las experiencias, que se publican en este libro, hubiera tenido más relevancia y protagonismo en la construcción de los casos.

Pese a esto último, es oportuno que el trabajo de los investigadores haya reivindicado los esfuerzos organizativos y comunitarios de estas poblaciones y sus líderes. Pues es una evidencia más de que muchos de ellos han hecho importantes contribuciones a los desarrollos de sus comunidades. Por esta razón digo que se trata de una reivindicación oportuna, porque como dice Steinbeck acerca de su relato de la historia de Danny y sus amigos:

> Conviene que este ciclo se ponga por escrito para que los estudiosos, al oír las leyendas, no digan en tiempos futuros lo que dicen de Arturo, Rolando o Robin Hood: "No existió Danny, ni su grupo de amigos ni la casa común. Danny es un dios de la naturaleza y sus amigos son símbolos primitivos del viento, del cielo, el sol". Esta historia pretende evitar ahora y siempre que los labios de amargados eruditos dibujen una sonrisa burlona (1981: 7-8).

Aunque a partir de las experiencias de las poblaciones del Bajo Calima, del rio Cajambre, de los Jóvenes Agricultores del Valle del Cauca y del programa de televisión regional D3 podemos evidenciar claramente, como lo muestran los investigadores, "buenas prácticas para superar el conflicto", no podemos dejar de advertir, con base en lo que los relatos de esas mismas experiencias enuncian y callan, que de todas formas algo no marcha bien en la vida ciudadana de estas comunidades –y es de presumir que lo mismo puede estar aconteciendo con muchas otras comunidades del país.

No se trata de negar que resulte bastante significativo y por demás alentador que estas poblaciones analizadas hayan logrado organizarse para defender sus derechos haciendo uso de su valor ciudadano y de la ayuda de la sociedad civil. Sobre todo cuando la vida democrática de hoy está, como sostiene Alejandro Llano: "[…] ante una crisis de integración política, ante un decaimiento de la conciencia de pertenecer a unidades sociales que engloben y superen al conjunto de los individuos aislados" (1999: 7).

Por lo tanto, el que estas comunidades hayan logrado organizarse y cuenten con organizaciones civiles que les brinden apoyo indica que disponen de un mecanismo valioso y efectivo para plantear exigencias, reclamaciones y para defender con éxito sus derechos. Al mismo tiempo, esto también muestra que su experiencia ciudadana los ha llevado a reconocer que en situaciones de *crisis social aguda* es urgente dejar a un lado el individualismo y recobrar el sentido y la pertinencia que tienen los intereses comunes. Esto implica que han comprendido, para usar unas palabras de Charles Tilly, que:

> El hecho de plantear exigencias (lejos de ser la característica habitual de individuos desorganizados o grupos desarraigados) sólo se produce cuando existe una organización social relativamente compacta. Además, plantear exigencias implica no sólo una acción de grupo, sino una interacción de grupo. Como mínimo, vinculan a quienes plantean esas exigencias con el objeto de sus reclamaciones (2000: 58-59).

En este sentido, "organizarse", dar el salto de las reclamaciones individuales a las *exigencias colectivas* es lo que aparece en estas experiencias de estas comunidades como "buenas prácticas para superar el conflicto". Ese es, para usar un término de Robert D. Putnam, su "capital social" o su "virtud cívica", es decir la fuerza con la que cuentan para hacer efectiva sus demandas ciudadanas (Putnam, 2002: 14).

Sin embargo, hay un elemento que preocupa en estas experiencias. Se trata de que en ellas el mayor esfuerzo para la superación del conflicto parece estar sólo en las manos de las propias poblaciones y de la sociedad civil y en muy escaza medida, y a veces parece que en ninguna, en manos del Estado. Esto es algo que no marcha bien. Bien es cierto que la vida democrática actual tiene como exigencia un amplio margen de participación activa de la sociedad civil y sus organizaciones en la resolución de los conflictos y problemas sociales y políticos que aquejan a las sociedades contemporáneas. Pero eso no significa o no tiene porque significar la retirada del Estado y el abandono, por su parte, de la población más vulnerable. En una democracia el Estado también tiene deberes y prioridades éticas, y una de ellas, sino la más fundamental, es la de ser el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos menos aventajados socialmente. Y ese deber moral se le impone con mayor fuerza cuando esas poblaciones vulnerables se encuentran amenazadas permanentemente por el conflicto –y por los grupos con poderes legales o ilegales que lo ocasionan.

Al terminar de leer estos estudios de caso no puede uno evitar pensar que las experiencias ciudadanas de estas comunidades hablan de una victoria incompleta, porque en ellas no se ve de manera decisiva la acción comprometida del Estado con el sufrimiento y el dolor de las víctimas del conflicto. Pues es innegable que en una sociedad dónde el Estado no se apersona de los problemas sociales y él mismo no contribuye con buenas prácticas para superar el conflicto la vida no puede marchar bien para la gran mayoría de los ciudadanos.

Como tampoco puede uno evitar preguntarse: ¿acaso, esa ausencia del Estado se debe, más bien, a la decisión de esas propias poblaciones de no contar con su apoyo, pues lo identifican como parte de sus males y, por eso, más bien tienen razones para sospechar y recelar, que para confiar en él? Y, en este mismo sentido: ¿en qué medida el Estado, por acción u omisión, ha sido responsable de la tragedia por la que han tenido que pasar y siguen pasando muchos de nuestros conciudadanos?

Bibliografía

GOODWIN, Barbara [1997], *El uso de las ideas políticas*, Editorial Península, Barcelona.

KANT [1991], "Idea de una historia universal en sentido cosmopolita", en: *Filosofía de la historia*, editorial F.C.E., México.

LLANO, Alejandro [1999], *Humanismo cívico*, Editorial Ariel, Barcelona.

PUTNAM, Robert D. [2002], *Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana*, Editorial Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona.

ROSANVALLON, Pierre [2003], *Por una historia conceptual de lo político*, editorial F. C.E., Argentina.

STEINBECK, John [2004], *Las uvas de la ira*, Biblioteca El Tiempo, Colombia.

STEINBECK, John [1981], *Tortilla Flat*, Editorial Bruguera, Barcelona.

TILLY, Charles [2000], *Las revoluciones europeas, 1492 – 1992*, editorial Crítica, Barcelona.

De los autores

Rosa Emilia Bermúdez Rico
Magíster en Sociología y especialista en Teorías y Métodos de investigación en Sociología, de la Universidad del Valle. Ha sido profesora de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi. Integrante del Grupo de Investigación «Organizaciones, conflicto y responsabilidad social», reconocido por Colciencias, del CIES (Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas) de la Universidad Icesi. Autora del libro: *Mujeres obreras y construcción de identidades sociales. Cali, 1930-1960*, Universidad Icesi y Editorial La Carreta, 2007.

Enrique Jaramillo Buenaventura
Antropólogo de la Universidad de los Andes y DEA en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades y Estudios Antropológicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi y Director del Programa de Antropología de la misma Universidad. Sus investigaciones han abordado en diferentes momentos la pregunta por el cuerpo, la técnica y la narratividad en relación con los procesos de subjetivación. Sus intereses metodológicos incluyen el trabajo con video y nuevos medios, al igual que la inquietud por la escritura y la representación del conocimiento etnográfico. Ha sido profesor hora cátedra del programa de Artes visuales y del programa de Sociología de la Universidad del Valle. Y miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Socioculturales y Psicológicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.

Luis Fernando Barón Porras
Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana, con Maestría en Antropología, de la Universidad de los Andes. Investigador sobre temas de cultura, comunicación y paz. En la actualidad, participa en **investigaciones** sobre memorias, empresarios y jóvenes, en el Valle del Cauca. Su libro más reciente es Historias no oficiales sobre la guerra y la paz. Director de las investigaciones: "Estado de alerta continua: noticieros y guerra en Colombia"; "Internet, guerra y paz en Colombia", entre otras. Fue codirector del "Diagnóstico nacional de televisión local y comunitaria, en Colombia". Trabajó por más de diez años, como investigador, en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), y fue Research Fellow del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) del Canadá. Y miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Socioculturales y Psicológicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.

Ana Lucía Paz Rueda
Socióloga. Especialista en teoría y métodos de investigación en sociología. Magíster en Sociología. Doctorado en Educación en curso. 13 años de experiencia como investigadora en los temas de conflicto, convivencia e intervención social. Directora del programa de Sociología de la Universidad Icesi. Y miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Socioculturales y Psicológicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.

Vladimir Rouvinski (Prólogo)
Profesor de Tiempo Completo, Departamento de Estudios Políticos, y Director, Programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales, de la Universidad Icesi. Cuenta con los estudios de post-doctorado, en el Instituto de la Ciencia para la Paz de la Universidad de Hiroshima. PhD y Máster, en Estudios de Desarrollo y Cooperación, Universidad de Hiroshima. Máster y Licenciado en Historia, Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia. Antes de vincularse a la Universidad Icesi, estaba laborando con la Sociedad Japonesa, para la Promoción de la Ciencia (JSPS); el Instituto de las Naciones Unidas, para Entrenamiento y Capacitación (UNITAR) e instituciones educativas, en Rusia y Colombia.

Rafael Silva Vega (Epílogo)
Magister en filosofía de la Universidad del Valle. Especialista en filosofía política y ética. Fue catedrático de la universidad del Valle, donde dirigió por varios años la Cátedra en Política y Derechos Humanos y el Programa para Cualificación de Maestros –Eulogos. Actualmente es Profesor de Tiempo Completo y Coordinador Editorial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi de Cali.